



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PLATAFORMA ELECTORAL 2021

INDICE

I.- POLITICA SOCIAL

1. Educación

- a. Eliminar el cobro de reinscripciones en instituciones particulares que imparten educación
- b. Desarrollo de habilidades para el mundo digital
- c. Tarjetas de descuento a estudiantes para alimentación, recreación, ocio y cultura

2. Salud

- a. Incrementar niveles de inversión en salud
- b. Recursos suficientes para la prevención, diagnóstico y atención oportuna del cáncer infantil
- c. Impulsar el uso de la telemedicina para mejorar la atención a personas con riesgo de padecer cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares
- d. Prevención del cáncer de mama y reconstrucción mamaria gratuita
- e. Incentivar la donación de órganos
- f. Promoción de la activación física en espacios públicos, en el hogar y en el trabajo a través de medios virtuales
- g. Prevención del suicidio
- h. Impulsar la producción de medicinas por parte del estado

3. Niñez

- a. Infancia sin chatarra
- b. Mejorar la atención a la primera infancia y a la salud materno-infantil, así como impulsar el desarrollo infantil temprano
- c. Centros de desarrollo infantil para los hijos de los trabajadores
- d. Fomentar el involucramiento de los hombres en la crianza de los hijos para una paternidad responsable

4. Mujeres

- a. Incentivar la lactancia materna exclusiva
- b. Equidad en la remuneración entre hombres y mujeres. A igual trabajo, igual salario

5. Personas con Discapacidad

- a. Programa nacional de atención a personas con discapacidad

6. Adultos Mayores

- a. Programa de atención al Alzheimer y otras demencias en adultos mayores

7. Protección a las Familias

- a. Ingreso mínimo vital
- b. Seguro de desempleo
- c. Suspensión de pagos de renta e hipoteca hasta por tres meses para personas que pierdan su fuente de ingresos.

II.- POLITICA ECONÓMICA

1. Capacitación para el Empleo y Herramientas para el Desarrollo

- a. Impulsar el acceso a ingresos extra por trabajos digitales desde casa y apoyo a emprendedores
- b. Dotar de una canasta básica digital a los hogares que no puedan adquirirla

2. Reactivación Económica

- a. Digitalización para el impulso de los micro y pequeños negocios, incluyendo los del sector turístico
- b. Fondo de fomento a las incubadoras de bienes y servicios verdes para jóvenes empresarios
- c. Créditos a la palabra para mujeres emprendedoras
- d. Acceso a créditos para infraestructura verde en estados y municipios

3. Campo

- a. Fomento de la producción para el autoconsumo
- b. Fomento a la ganadería de bajas emisiones de metano
- c. Fomento a la crianza de especies para el autoconsumo
- d. Otorgar contratos y pagos anticipados a quien produzca maíz criollo nativo de México

III.- POLITICA INTERIOR

1. Seguridad

- a. Castigar a quien lesione de manera permanente a una mujer
- b. Promover una vida sin violencia
- c. Modelo de prevención de la violencia desde la comunidad
- d. Fortalecer la atención y apoyo a víctimas del crimen organizado
- e. Combate a la extorsión
- f. Garantizar la seguridad de los usuarios de transporte público en sus traslados

2. Justicia

- a. Erradicar el feminicidio y la violencia contra las mujeres
- b. Protección a defensores del medio ambiente
- c. Denuncia rápida de delitos vía digital o telefónica

3. Protección de los Derechos Humanos

- a. Erradicar cualquier tipo de discriminación
- b. Promoción de la inclusión

4. Régimen Democrático

- a. Democracia líquida

IV.- MEDIO AMBIENTE SANO PARA TODOS

1. Bienestar Animal

- a. Otorgar facultades al congreso para legislar en materia de bienestar animal
- b. Modificar la ley general de bienestar animal, aplicable en todo el territorio nacional
- c. Erradicar la crueldad en el desarrollo y sacrificio de animales.

2. Desarrollo Sustentable

- a. Reconversión de unidades de transporte de pasajeros y de carga de gasolina o diésel a gas natural y fomento a la red nacional de estaciones de carga de gas natural vehicular.
- b. Programa de sustitución de leña por gas y electricidad
- c. Incentivos fiscales para mujeres que cuiden el medio ambiente
- d. Incentivos económicos, fiscales y disminución de cargas regulatorias para inversiones verdes
- e. Promoción de huertos urbanos
- f. Impulso a la creación de sistemas de transporte interurbanos y regionales de trenes eléctricos
- g. Incentivar el uso de vehículos híbridos y eléctricos a través de la instalación de más estaciones de carga de electricidad

3. Energías Renovables

- a. Reconversión y certificación de edificios y oficinas públicas en materia de sustentabilidad energética y uso eficiente de la energía
- b. Impulsar la generación de energía renovable para el autoconsumo
- c. Producción de biocombustibles sin afectación a la biodiversidad o a la disponibilidad de alimentos
- d. Garantizar el acceso universal a la energía por medio de la promoción de la producción de electricidad a través de ciclos combinados

4. Calidad del Aire

- a. Ampliar y modernizar el monitoreo de la calidad del aire

5. Derecho al Agua

- a. Acceso efectivo al agua potable y al saneamiento
- b. Captación de aguas pluviales
- c. Protección de cenotes a nivel nacional

6. Protección de la Biodiversidad

- a. Limitar el contacto de los seres humanos con la vida silvestre
- b. Recuperación de los niveles de inversión pública en medio ambiente
- c. Proteger los bosques de taladores clandestinos con la fuerza pública
- d. Proteger los mares y garantizar una pesca sustentable

7. Cambio Climático

- a. Norma específica para fijar límites a las emisiones de contaminantes para plantas de generación de energía eléctrica.

- b. Pago por toneladas de emisiones contaminantes sobre límites máximos permitidos (cobrar más impuestos a quienes más contaminen)

8. Manejo de Residuos

- a. Prohibición de plásticos, envases y empaques de un sólo uso
- b. Impulsar el reciclaje y que las personas reciban pagos directos por reciclar su basura

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, Quintana Roo enfrenta una coyuntura profundamente desafiante. La realidad política, económica y social se ha tornado cada vez más compleja y nos hemos visto obligados a enfrentar cambios radicales y vertiginosos en la forma en la que solíamos vivir. Asimismo, nuestro país vive sumido en un panorama de enorme incertidumbre, producto tanto de los problemas estructurales que nos afectan como de las complicaciones coyunturales que definirán el panorama en el mediano y corto plazo para la toma de decisiones, la creación o modernización de leyes y la puesta en marcha de políticas públicas.

En el Partido Verde Ecologista de México nos hemos abocado a la tarea de construir soluciones por medio del diálogo y consenso con las distintas fuerzas políticas del país, a fin de diseñar e implementar políticas públicas y leyes orientadas al desarrollo sostenible, que permitan a los mexicanos realizarse en una sociedad más justa, libre, democrática, próspera y solidaria.

Históricamente, el Partido Verde Ecologista de México ha abrazado como su principal cometido el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. En este sentido, ha conformado una agenda nutrida por diferentes ejes que atienden de manera integral las problemáticas más relevantes en la materia para los mexicanos. No obstante, dadas las condiciones actuales, es necesario reafirmar nuestro compromiso con Quintana Roo y la conservación de nuestro entorno, al mismo tiempo que nos trasladamos hacia una perspectiva con un enfoque novedoso y transversal orientado a proteger, garantizar y maximizar los diversos derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.

Tenemos una responsabilidad histórica y voluntad férrea para lograr la aprobación de temas de gran importancia social, la cohesión por un bien social mayor a los intereses comunes nos ha permitido conjuntar una alianza estratégica legislativa, la cual nos permitirá, enfrentar las dificultades sociales, políticas y económicas que se reflejan en diferentes ámbitos de nuestra entidad, como son la pobreza, la corrupción, la deficiente oferta educativa y de salud, así como la inseguridad que ha derivado en una ola de violencia jamás sentida a todo nivel de extracto social. Aunado a esto existe un problema de desempleo en la zona sur y centro de la entidad, así como la falta de oportunidades que afecta a la sociedad en general, pero sobre todo a los jóvenes, quienes enfrentan grandes barreras que les impiden desarrollarse profesionalmente. No obstante, la zona norte de la entidad tiene severos focos de atención, agua potable, transporte público de calidad, seguridad, oferta académica, vivienda digna y salud pública, entre otros tantos que velaremos su reducción sustancial y la nueva forma de prever la aplicación de políticas públicas para el fortalecimiento de la cohesión social.

Quintana Roo atraviesa por una situación crítica en materia de corrupción, pobreza, desigualdad, inseguridad, desempleo, educación, crecimiento económico, derechos humanos, medio ambiente, entre otros retos que enfrentaremos a través del diseño de alternativas de solución orientadas al beneficio de la colectividad. Consciente de la circunstancia, el Partido Verde Ecologista de México asume una vez más su responsabilidad y compromiso con los quintanarroenses para impulsar políticas y leyes que generen soluciones a los problemas estructurales y de coyuntura que hoy nos afectan como sociedad.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México ha estructurado su plataforma electoral en torno a cuatro vertientes clave:

- I) Política Social;
- II) Política Económica;
- III) Política Interior; y
- IV) Medio Ambiente Sano para Todos.

De cara al 2021, ésta será la base a partir de la cual el Partido Verde Ecologista de México buscará contribuir en la edificación de un Quintana Roo más incluyente y de oportunidades para todos, haciendo particular énfasis en los grupos más vulnerables o en situación de desventaja.

Con estas acciones y su implementación estamos seguros que lograremos avances reales y significativos en la construcción de un Estado moderno, cercano a la gente y apegado a los principios rectores del Partido Verde, pero sin duda cumplirá con su función y la obligación social conferida al máximo de sus potencialidades.

El Partido Verde Ecologista de México, por ti estará trabajando sin descanso para que se implementen soluciones reales para construir un Quintana Roo seguro, un Quintana Roo prospero para todos, un Quintana Roo en el que tengas acceso a la salud, en el que las mujeres vivan sin miedo, un Quintana Roo sin hambre, un Quintana Roo que brinde oportunidades para todos.

I. POLÍTICA SOCIAL

EDUCACIÓN

Eliminar el cobro de reinscripciones en instituciones particulares que imparten educación

Planteamiento del Problema

En Quintana Roo la educación es preponderantemente impartida en instituciones de carácter público; no obstante, la demanda ha obligado a la diversificación de servicios educativos con la finalidad de que cada día existan mayores alternativas para quienes decidan optar por una institución privada.

En este sentido, la autoridad educativa ha enfocado parte importante de sus esfuerzos para definir directrices que garanticen que la educación impartida en instituciones particulares cumpla con los requerimientos mínimos en cuanto a los contenidos, planes y programas, asegurando con ello que la educación en nuestro estado se encuentre estandarizada, para lo cual estableció una serie de requisitos que deben cumplir las instituciones particulares que tengan el interés de obtener un reconocimiento de validez por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que además de brindar certeza a sus usuarios les permita contar con su respaldo y distinción frente a aquellas que funcionan fuera de la legalidad.

No obstante, el reconocimiento de validez oficial no contempla una regulación y estandarización de los servicios prestados y los costos que ellos generen, razón por la cual se registran muchas demandas de padres de familia, tutores y estudiantes que hacen uso de estos servicios escolares, manifestando su descontento al ser víctimas de cobros excesivos, desconocidos e incluso innecesarios.

Por décadas, garantizar el reconocimiento del derecho humano a la educación fue uno de los principales retos de los gobiernos de diferentes naciones; fue hasta 1948 que se logra incluir como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dando pie a su inclusión en nuestra Carta Magna en su artículo 3º, refiriendo que "*Toda persona tiene derecho a la educación*".

Al paso de los años, el derecho a la educación toma especial relevancia diluyendo la idea de que su simple inclusión y reconocimiento legal era suficiente y haciendo patente que el verdadero reto consistía en garantizar su desarrollo, exigiendo esfuerzos importantes para definir acciones que posicionaran a la educación como pilar fundamental de la agenda pública.

En función de ello, la tarea legislativa se volvió esencial al tener la responsabilidad de emitir aquellas leyes que le dieran viabilidad a tan fundamental derecho; periódicamente el Congreso de la Unión ha realizado reformas a la legislación adjetiva en la materia, algunas, incluso derogando leyes y expidiendo nuevos ordenamientos con el objetivo de armonizar sus contenidos en concordancia con las exigencias propias de la dinámica social.

Ejemplo de lo anterior es la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, Esta ley regula la educación que imparten el Estado y sus Municipios, sus organismos descentralizados y los

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en todo el Estado y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

Gracias a esta Ley la función educativa cuenta con un sustento; instituciones públicas y particulares de los diferentes tipos y modalidades de educación son regidas por un marco normativo que define bases mínimas; no obstante, la referencia a las instituciones particulares que imparten educación se limita a la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden público que rigen el proceso educativo, de conformidad a lo establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción VI del artículo 3º refiere que: *los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades; debiendo basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tendiendo al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y fomentando en él el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoviendo la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.*

Lo anterior no representa limitantes específicas respecto a su funcionamiento y determinación de costos por los servicios que se prestan; haciendo una única referencia en la Ley respecto a que: *"en ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos".*

Ante la falta de mayores especificaciones, las instituciones particulares que imparten educación definen deliberadamente el costo de sus servicios y las modalidades de pagos y contraprestaciones; lo cual ha llevado al descontento de los usuarios de dichos servicios escolares.

Lo anterior se vuelve de interés público particularmente ante la presente situación que hoy acontece, provocada por la inactividad derivada de las medidas de confinamiento ordenadas por nuestras autoridades de salud como parte de las acciones de combate a la emergencia sanitaria que desde el mes de marzo de 2020 ha impedido las clases presenciales en los planteles de las instituciones que forman parte del Sistema Educativo Nacional. Lo anterior se suma a la compleja situación económica que atraviesa nuestro país y nuestro Estado como consecuencia de la paralización de actividades sociales, económicas y laborales, lo que incluso ha llevado a muchas personas a perder su empleo o su fuente de ingresos.

Ante ello, madres, padres y tutores manifiestan su descontento respecto al cobro de cuotas de reinscripción, especialmente por tratarse de una figura o un monto que no tiene ningún sustento material; pues aun cuando queda al libre arbitrio la contratación de servicios educativos, el cobro indebido de cuotas en dichas instituciones siempre ha representado una problemática de difícil solución.

Las instituciones particulares basan su funcionamiento en los preceptos legales referidos, argumentando la legalidad de sus acciones; sin embargo, ello ha permitido el desarrollo de prácticas que están lejos de cumplir con las funciones de la educación, pues debe dejarse claro

que el costo de los servicios educativos no siempre es directamente proporcional a la calidad de la educación impartida.

En este sentido, se debe hacer énfasis en la necesidad de atender las demandas de la sociedad, especialmente de aquellos padres de familia que, teniendo la posibilidad de hacerlo, optan por un modelo educativo personalizado que se ajuste a ideas y valores particulares, la formación en diferentes idiomas y tecnologías de la información, así como otras actividades extraescolares que les brinden herramientas a sus hijos para un mayor desarrollo y para el acceso a un mejor futuro.

Bajo esta lógica, el cobro de una cuota de reinscripción en cualquier tipo, nivel y modelo educativo es un obstáculo más que un incentivo para que las personas continúen su formación académica y obedece a incrementar el beneficio económico de los particulares que ofrecen el servicio educativo, lo cual debe replantearse, especialmente ante la situación que atravesamos a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

En el Partido Verde Proponemos:

- Eliminar el cobro de reinscripciones en las instituciones particulares que imparten educación en cualquier tipo, nivel y modalidad, a través de la modificación a la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo.
- Instaurar como atribución de la Autoridad Educativa Federal la definición de lineamientos mínimos para el establecimiento de conceptos y servicios que pueden ser cobrados por instituciones particulares que imparten educación.
- Establecer convenios de colaboración entre la Autoridad Educativa Federal, Estatal y la PROFECO para fortalecer la vigilancia de las actividades de las instituciones particulares que imparten educación, con especial atención en la erradicación de cobros indebidos por la prestación de servicios educativos.
- Definir mecanismos de atención y solución prioritaria a los usuarios de servicios educativos prestados por instituciones particulares ante el cobro de cuotas de reinscripción.
- Establecer incentivos administrativos para las instituciones particulares que presenten ofertas de servicios educativos con precios competitivos y la eliminación de conceptos de cobros innecesarios.

Desarrollo de habilidades para el mundo digital

Planteamiento del Problema

Actualmente, las competencias digitales están reguladas como un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, vinculadas con valores y actitudes, para la utilización estratégica de la información a fin de alcanzar objetivos de conocimiento tácito y explícito, contextualizadas con herramientas propias.

Vivimos inmersos en una revolución digital, ya que nunca antes ha habido tantas personas conectadas a internet con dispositivos y servicios digitales en su trabajo y en su vida en general, esto se debe en parte al auge de la banda ancha móvil que garantiza a diario la participación de más personas de los países en desarrollo en la economía digital.

En la última década, e incluso más recientemente, hemos sido testigos de la proliferación de nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial, los macro datos, la cadena de bloques, la computación en la nube, el internet de las cosas, el aprendizaje de máquina, las aplicaciones móviles, la nanotecnología y la impresión 3D, las cuales cambiarán radicalmente nuestra vida cotidiana durante la próxima década y alterarán sustancialmente nuestros hábitos de consumo, producción y trabajo.

Además, como ocurre con todos los cambios transformacionales, lo anterior nos brindará nuevas oportunidades, al tiempo de plantearnos importantes retos, pues ha aparecido una amplia disparidad de capacidades en un mundo en el que existen millones de puestos de trabajo para quienes poseen habilidades digitales avanzadas, mientras que escasean las personas con la cualificación adecuada para ocuparlos.

Tenemos entonces la oportunidad de construir un Quintana Roo donde las habilidades digitales básicas de todos los ciudadanos se valoren adecuadamente, se promuevan y se prioricen, integrándolas como una de las capacidades fundamentales de la nación junto con la alfabetización tradicional y los conocimientos de matemáticas.

Es igualmente importante realizar los esfuerzos necesarios para que todos los sectores de la población tengan acceso a las noticias y la información, puedan comunicarse con su familia y amigos, utilizar ordinariamente los servicios relacionados con la ciber salud, el ciber gobierno, las finanzas digitales, la agro tecnología, el transporte inteligente y puedan beneficiarse plenamente de la inmersión en una sociedad del conocimiento pujante a nivel mundial.

En ese sentido, debemos impulsar que nuestra población disponga de las habilidades digitales necesarias para ser empleable, productiva, creativo y tener éxito, una sociedad donde todos nuestros jóvenes puedan desarrollar habilidades básicas para adquirir posteriormente los niveles intermedio y avanzado de conocimientos técnicos digitales y ser capaces de participar en los sectores emergentes de la industria para poner en marcha sus propios negocios.

El lugar que ocupan las habilidades digitales en el marco general de las competencias sociales peculiares del siglo XXI ofrecerá directrices claras para la convergencia y dirección de las diferentes partes interesadas en el avance dentro de un marco perfectamente definido y focalizado. La cualidad más sobresaliente de este conjunto de herramientas es su carácter fundamentalmente práctico y sencillo, así como su fundamentación en experiencias de todo el mundo.

Este conjunto de herramientas permitirá a cualquier país integrarse a las nuevas tecnologías globales y con ello fortalecer su economía, así como su productividad, pues incluso los países menos desarrollados optan por formar profesionales en el uso de herramientas correspondientes a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), no solo por moda, sino por necesidad de integración mundial, con repercusiones sobre el empleo juvenil en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Una de las preguntas de rigor que constantemente nos obliga a repensar las políticas que se están poniendo en marcha en el ámbito educativo es: ¿cómo mejorar los aprendizajes que plantea la nueva era digital en los estudiantes?, pero a esta pregunta, hoy en día, se añade una preocupación más: ¿cómo mejorar el aprendizaje en la sociedad del conocimiento? Esto significa que existe una

preocupación real y que la misma viene con exigencias adicionales, tales como el uso de las tecnologías; es decir, toda aquella gama de servicios que existen en internet, telefonía móvil, televisión digital, radio digital, videojuegos, cine digital e incluso los comportamientos digitales que muchos desconocen y que se ponen de manifiesto al comunicarse a través de ellos.

Ante los problemas de aprendizaje que se presentan en los nuevos escenarios digitales son necesarias algunas estrategias para el desarrollo de competencias. Éstas se entienden desde una doble perspectiva: 1) saber actuar (o reaccionar) y 2) saber movilizar, integrar y transferir recursos (conocimientos, capacidades, etcétera) en un contexto profesional, que les permita a los usuarios interactuar en las redes de manera asertiva de cara a no sentirse excluidos.

Lo anterior con el propósito de lograr que las personas se inserten en el mundo de las redes, se inicien en el uso de tecnologías web y sean creadores de productos que distribuirán, compartirán y difundirán en una cultura de colaboración y cooperación, con implicaciones en la gestión del conocimiento.

Esto significa que Quintana Roo deberá implementar políticas públicas dirigidas a la capacitación y el aprendizaje de tecnologías digitales para lograr que el sector juvenil, principalmente, se adhiera a los requerimientos necesarios para un desarrollo óptimo de tecnología y capacidades digitales; asimismo, se deberán establecer programas de financiamiento público destinados a la adquisición de implementos tecnológicos, como computadoras e internet.

En el Partido Verde Proponemos:

- Fomentar el desarrollo de habilidades digitales en mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores y comunidades indígenas como herramientas fundamentales para el empoderamiento, el aprendizaje y la autogestión, involucrándolos de manera más activa en la producción de recursos digitales. Por lo tanto, habremos de promover reformas a efecto de que el aprendizaje y mejoramiento de las habilidades digitales sea considerado como un derecho humano.
- Establecer estrategias para que los estudiantes adquieran y apliquen en su paso por la escuela las habilidades digitales que necesitarán durante toda su vida para no sentirse excluidos o ajenos a un mundo cada vez más automatizado.
- Impulsar la capacidad de las personas para participar en la sociedad en línea con aptitudes para acceder, recuperar, comprender, evaluar, utilizar, crear y compartir información y medios en todos los formatos, a través del uso de los recursos digitales disponibles de manera crítica, ética y segura.

Tarjetas de Descuento a Estudiantes para Alimentación, Recreación, Ocio y Cultura

Planteamiento del Problema

Prepararse académicamente para las etapas posteriores de la vida es una de las más importantes fases por las que atraviesa un ser humano con deseos de ascender dentro de la pirámide social ya que el nivel educativo es un factor de gran incidencia en el desarrollo personal.

De igual forma, los países cuyas economías presentan altos índices de estudiantes matriculados y años de escolaridad tienden a ser más dinámicos y competitivos en el mercado global, por lo que generar las condiciones para que el número de jóvenes que logran acceder a la educación superior sea cada vez mayor debe ser una prioridad para todos.

Es durante la transición de la niñez a la adultez que la educación y la etapa estudiantil se vuelve el centro de nuestras vidas, al menos durante los primeros años donde la responsabilidad de proporcionar la manutención y cuidado cae sobre los adultos. No obstante, a medida que las personas se adentran en la adolescencia y posteriormente en la juventud, la idea de los padres de financiar de manera integral los estudios escolares no siempre se cumple, pues la realidad mexicana indica que muchos jóvenes no solo deben hacerse cargo de sus estudios y manutención, sino incluso contribuir con la economía familiar debiendo para lo anterior distribuir su tiempo entre la escuela y el trabajo.

Cabe resaltar que solventar la educación no es solamente pagar colegiaturas, inscripciones, créditos, sino también libros, transporte y comidas. De ahí que cualquier ahorro sea bienvenido.

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar que la etapa de la adolescencia y juventud es crucial para el desarrollo de la identidad, ya que es ahí cuando la persona adquiere conocimientos más allá de las aulas que pueden ser de gran importancia para su vida por lo que es necesario poner a su alcance el acceso a experiencias que les permitan nutrir su formación desde los ámbitos recreacionales, culturales, musicales y deportivos, sin que eso represente un golpe fuerte al bolsillo y al capital por lo general limitado del estudiante promedio.

Por esa razón, conjugando aspectos clave como son incentivar la permanencia en las aulas de los estudiantes, garantizar el acceso a actividades extracurriculares, culturales, de ocio o recreativas como parte de la formación complementaria y tomando en cuenta los costos de los bienes y servicios en relación a los ingresos de los estudiantes, es que consideramos pertinente crear un esquema para que las empresas e instituciones ofrezcan descuentos a estudiantes, siempre y cuando se demuestre la vigencia actual de estudios.

En el Partido Verde Proponemos:

- Otorgar tarjetas de descuento a los estudiantes activos para acceder a alimentación, recreación, ocio y cultura.

SALUD

Incrementar Niveles de Inversión en Salud

Planteamiento del Problema

La salud debe entenderse no solamente como la ausencia de enfermedades, sino como el estado de completo bienestar, tanto físico como mental. En este sentido, la legislación y los gobiernos deben procurar las condiciones de vida adecuada para conservar y, en su caso, recuperar la salud, además de promover estilos de vida saludables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. En consecuencia, el derecho a la salud debe incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

Sin embargo, los grupos sociales vulnerables y marginados suelen tener menos probabilidades de disfrutar del derecho a la salud, ya que muchos viven en condiciones de pobreza u otras condiciones de vulnerabilidad que no les permiten tener acceso a una alimentación adecuada, agua potable, vivienda digna y otras carencias que los hacen más propensos a las enfermedades. Además, los grupos vulnerables se enfrentan comúnmente a la falta de servicios de salud cercanos a su hogar y de calidad suficiente.

Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a un grupo étnico, cuestiones de género, preferencia sexual o por cualquier otra condición. Por ello, la no discriminación y la igualdad también son componentes fundamentales para garantizar el derecho a la salud.

Lo anterior implica que, a fin de garantizar el derecho a la atención de la salud, los gobiernos deben invertir recursos suficientes en acciones de prevención de enfermedades, como las campañas de vacunación y las jornadas de servicios médicos, así como en acciones para informar sobre los cuidados básicos de salud y promover estilos de vida saludables.

En materia de salud la prevención es la herramienta de mayor costo-beneficio, es decir, que las inversiones destinadas a la prevención pueden generar ahorros muy importantes en la atención de accidentes y enfermedades cuyo tratamiento es costoso, como la diabetes, el VIH/SIDA y los diversos tipos de cáncer.

También es necesario contar con suficientes recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo el diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades, así como la atención de las personas que sufren accidentes.

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 reveló las múltiples carencias que enfrenta el personal médico, de enfermería, de limpieza y el personal administrativo de las unidades de salud, quienes realizan su importante labor a pesar de la falta de materiales y equipo, horarios extenuantes, salarios bajos y condiciones contractuales precarias. Por ello, es necesario atender estas carencias, para que el personal de salud pueda laborar en condiciones óptimas.

La pandemia también dejó en evidencia la falta de personal capacitado y especializado en la atención de diversas áreas de la salud, particularmente la salud mental y las disciplinas de alta especialidad, por lo que se requiere impulsar decididamente la formación de un mayor número de profesionistas en las ciencias médicas, la enfermería, la psicología, la nutrición y otras disciplinas complementarias.

Además, las inversiones en salud deben promover la investigación médica para el desarrollo de mejores tratamientos, medicamentos y tecnologías. Asimismo, la mejora continua de los servicios de atención en salud debe contemplar la creación de un entorno de calidad y calidez en los hospitales y clínicas.

Por estas razones, las inversiones en salud no solamente deben enfocarse en destinar recursos para la operación de los hospitales y la compra de medicamentos, sino que deben abordar diversos aspectos de prevención y promoción de estilos de vida saludables, igualdad, respeto a los derechos humanos, accesibilidad para los grupos vulnerables, atención de las necesidades del personal de salud, formación de recursos humanos, apoyo a la investigación y mejora continua de los servicios, entre otros aspectos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Garantizar que en cada ejercicio fiscal se destinen recursos presupuestarios suficientes para el Ramo 12 "Salud", hasta alcanzar por lo menos el 5% del Gasto Neto Total.
- Impulsar que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas destinen montos mayores de sus presupuestos de salud para las estrategias y programas de prevención.
- Fortalecer las campañas nacionales de vacunación y otras estrategias de prevención, especialmente en las comunidades alejadas y en los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad.
- Garantizar que se asignen recursos suficientes para la atención de la pandemia de COVID-19, especialmente para la adquisición, distribución, manejo y aplicación de la vacuna.
- Aumentar los recursos presupuestarios asignados a los hospitales e institutos que realizan investigación en salud.
- Promover la formación de más profesionistas en las diversas áreas del conocimiento relacionadas con la salud, particularmente la salud mental y las disciplinas médicas de alta especialidad.
- Continuar con la recuperación de hospitales abandonados y con la regularización de las contrataciones del personal de atención en salud bajo condiciones laborales justas.
- Dar seguimiento a los programas de compras consolidadas de medicamentos para asegurar que los ahorros logrados se reflejen en beneficios para los pacientes.
- Consolidar la universalidad del acceso a la atención de la salud para toda la población.
- Promover que el Estado garantice los tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades catastróficas.
- Impulsar la portabilidad de los servicios de salud para que el IMSS, ISSSTE y cualquier clínica u hospital público atiendan a todos los mexicanos sin importar si son o no derechohabientes.

Recursos Suficientes para la Prevención, Diagnóstico y Atención Oportuna del Cáncer Infantil

Planteamiento del Problema

El cáncer es la multiplicación anormal de las células de cualquier órgano. Afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sin un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, el cáncer puede extenderse a otras partes del cuerpo e incluso provocar la muerte.

El término "cáncer infantil" generalmente se utiliza para designar a los distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en niñas y niños antes de cumplir los 15 años, aunque en ocasiones el rango se extiende hasta los 18 años.

A diferencia del cáncer en adultos, la mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede dificultar su diagnóstico correcto en fases tempranas. Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los causados por factores ambientales o factores relacionados con el modo de vida de las y los menores.

Dado que el cáncer infantil no se puede prevenir en la mayoría de los casos, la estrategia más eficaz para combatirlo consiste en el diagnóstico oportuno y correcto, seguido de una terapia eficaz y seguimiento para evitar su reincidencia. En consecuencia, el cáncer durante la infancia y la adolescencia es una enfermedad curable si se detecta a tiempo y se trata correctamente. Un diagnóstico correcto y a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte.

El diagnóstico oportuno consta de tres componentes:

- Concientización dentro del ambiente familiar y escolar, además del acceso a la atención sanitaria.
- Evaluación clínica, diagnóstico y determinación del estadio (averiguar hasta qué punto se ha propagado el cáncer).
- Acceso al tratamiento.

Es necesario generar un enfoque de atención primaria con énfasis en la prevención y diagnóstico temprano del cáncer pediátrico, ya que la mayoría de las acciones actualmente están enfocadas en la prevención secundaria, es decir, en minimizar el daño y los estragos de la enfermedad una vez diagnosticada.

Adicionalmente, el cáncer es una enfermedad costosa, que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes y puede causar empobrecimiento, especialmente para las familias que no cuentan con seguridad social.

Por estas razones, se requiere impulsar que el gobierno destine recursos presupuestarios suficientes para la prevención, diagnóstico y atención oportuna del cáncer infantil.

En el Partido Verde Proponemos:

- Dar seguimiento al cumplimiento efectivo de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2021.
- Continuar promoviendo la coordinación de las autoridades y fortalecimiento de las actividades del sector salud en materia de cáncer infantil.
- Garantizar que en cada ejercicio fiscal se destinen recursos suficientes para el cumplimiento de las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención integral del cáncer infantil.
- Dar seguimiento al Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia para conocer los sectores poblaciones que requieren mayor atención y mayores recursos.
- Impulsar la investigación y la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas relacionadas con el cáncer infantil.
- Procurar suficientes recursos presupuestarios para el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (CONACIA); el Centro Nacional

para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA); el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN); y los hospitales que atienden a pacientes diagnosticados con cáncer infantil.

Impulsar el uso de la Telemedicina para Mejorar la Atención a Personas con Riesgo de Padecer Cáncer, Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares.

Planteamiento del Problema

Estamos viviendo una coyuntura en la que debemos salvaguardar el bienestar de los Quintanarroenses, realizando acciones extraordinarias que permitan mitigar los efectos y contrarrestar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia provocada por el COVID-19

En ese contexto, es necesario hacer notar que ciertas áreas de la práctica médica pueden ser ejercidas a distancia mediante el uso de recursos tecnológicos. Es por ello que la telemedicina cobra especial relevancia ya que será indispensable para evitar que los servicios de salud sean rebasados durante la contingencia. Así, toda atención médica que no requiera hospitalización o cuidados especiales podría realizarse de manera remota.

En términos generales, la telemedicina se refiere al cuidado de la salud a distancia, conectando al paciente desde su hogar o algún lugar remoto con el profesional encargado de brindar la atención médica.

La telemedicina ha demostrado tener un gran impacto en la salud ya que evita los desplazamientos innecesarios de los pacientes, reduce costos y riesgos asociados con la movilización tanto de los pacientes como del personal médico, disminuye los días de hospitalización, facilita el flujo de la información entre las instituciones y promueve la capacitación continua de los profesionales de la salud.

El uso de la telemedicina capacita al paciente para tomar las riendas de su propia salud, así mismo, hace posible que los profesionales sanitarios puedan reconocer a distancia al enfermo, completar su historia digital y solicitar el asesoramiento de otros especialistas. Además, permite a los centros diagnósticos controlar los datos biométricos transmitidos por los pacientes.

Numerosos estudios ponen de manifiesto que esta tecnología contribuye a disminuir el uso de la atención primaria, las visitas a urgencias, los ingresos hospitalarios y la morbilidad.

Por otra parte, la telemedicina juega un papel muy importante en el caso de las enfermedades crónicas, ya que permite un mayor control y una mejor comunicación con los pacientes de este tipo, así como la integración en un sistema de respaldo médico, con registro de datos biométricos.

La telemedicina ya ha demostrado sus efectos sobre la calidad de vida de pacientes con dolencias crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad o la insuficiencia cardiaca. Les dota de una mayor autonomía, promueve los autocuidados y obtiene un nivel superior de adherencia al tratamiento. Así, se logra una mejor evolución de las enfermedades crónicas y se ralentiza la llegada de las complicaciones asociadas a estas dolencias.

Una de las funcionalidades más innovadoras y prácticas de la telemedicina son los sistemas de monitoreo de pacientes a distancia empleados particularmente por los pacientes de enfermedades crónicas que requieren un control continuo. Gracias a una serie de dispositivos electrónicos, es posible registrar parámetros como el peso corporal, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la actividad del sueño, el colesterol o la glucosa. Así se logra la detección de posibles alteraciones y la rápida actuación por parte de los profesionales médicos para mantener estable la salud de los pacientes crónicos.

El 21 de diciembre de 2015 se dio a conocer el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) 036-SSA3-2015, con el objeto de regular cuestiones esenciales y específicas de la telemedicina. Sin embargo, el 27 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de cancelación del proyecto de dicha NOM, debido a que la autoridad determinó que la telemedicina debe verse como una actividad integrada a la práctica clínica y no como actividad adicional, por lo que no debía regularse de forma separada a los procedimientos médicos actuales.

En ese sentido, actualmente no contamos con una normatividad específica en materia de telemedicina, por lo que los profesionales de la salud que realizan actividades de esta naturaleza deben observar principios y métodos de la práctica médica tradicional. Por esta razón, resulta necesario que la Secretaría de Salud establezca la normatividad aplicable y emita su correspondiente NOM, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos delineados en diversos ordenamientos legales para utilizar métodos innovadores que permitan llegar de manera más eficaz y eficiente a millones de pacientes. Esta necesidad se ha hecho más evidente a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 a la cual hoy nos enfrentamos.

En términos específicos, la Ley General de Salud establece que el Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo el promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. Asimismo, corresponde a la Secretaría de Salud la incorporación, uso y aprovechamiento de las TIC en los servicios de salud.

El cumplimiento del mandato anteriormente descrito y la aplicación concreta de dicho modelo a partir de principios normativos y criterios técnicos específicos tendrá diversos efectos deseables, entre los que destaca una modalidad de atención médica eficiente, segura, especializada, pronta y expedita.

En el Partido Verde estamos convencidos de que la telemedicina es una herramienta eficaz para poder brindar atención médica de calidad a distancia, particularmente a las personas que padecen enfermedades crónicas.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar la emisión de una Norma Oficial Mexicana que regule de manera integral y garantice la buena práctica de la telemedicina, en estricto cumplimiento de su mandato legal de integrar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.
- Fomentar el uso de la telemedicina como medio para mejorar los cuidados preventivos a la población, coadyuvar en el manejo de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, así como propiciar la detección temprana de patologías en grupos de alto riesgo.

Prevención del Cáncer de Mama y Reconstrucción Mamaria Gratuita

Planteamiento del Problema

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta de manera temprana, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas, por arriba del 65%. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo, por lo invasivo que es este tipo de cáncer. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente.

Se llama cáncer de mama o de seno a los tumores malignos desarrollados en los senos o mamas. Son el resultado de mutaciones o cambios en los genes que regulan el crecimiento de esta parte del cuerpo femenino. Cuando se activa un gen asociado al cáncer, las células comienzan a multiplicarse sin control, produciendo así un tumor.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre mujeres de todos los países, y en muchos casos la extirpación de los senos es la medida extrema que médicamente se recomienda, provocando en las mujeres, aparte de una precaria condición de salud, problemas psicológicos serios e inclusive el rechazo y abandono de su pareja. Su mayor incidencia se da en América, pero se ha vuelto común en otras partes del mundo.

Existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad entre los que se encuentran factores hereditarios, como el antecedente familiar de cáncer de mama, mutaciones de los genes, factores reproductivos, como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía de la menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna y no tener hijos; el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física.

En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o bien, por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.

La educación de la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad, así como la autoexploración han mostrado ser de gran utilidad para fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en situación de riesgo y la búsqueda de atención temprana. Además, la realización sistemática de mastografías entre la población en riesgo ha demostrado ser el método más efectivo para la detección temprana de este tipo de cáncer ya que las barreras existentes en el acceso a la atención de la salud han provocado una disminución de la efectividad de las estrategias de prevención implementadas, lo cual representa un mayor reto para el sistema de salud pública en la utilización de recursos humanos y materiales.

Por otro lado, las mujeres que como parte del tratamiento han sido sometidas a procedimientos de mastectomía quedan con secuelas, las cuales afectan su vida en diversos aspectos, sean estos físicos, familiares, sociales, laborales, económicos o psicológicos.

Muy pocas de ellas tienen acceso a prótesis, implantes o a la reconstrucción mamaria, los cuales coadyuvan en su rehabilitación y reintegración social. Las causas son diversas, pero la principal es la imposibilidad económica, ya que en el sector privado la reconstrucción mamaria puede llegar a costar arriba de los 30 mil pesos, dependiendo de la complejidad del procedimiento y de la institución en donde se practique, haciendo dicho tratamiento inalcanzable para mujeres de escasos recursos y sin seguridad social.

A pesar de que la reconstrucción mamaria se realiza en el sector público de salud mexicano, el porcentaje de aplicación respecto a las pacientes de mastectomía es mínimo, ya que este tratamiento no es considerado un derecho para los beneficiarios de dichos servicios por no ser considerado parte integral del tratamiento en la atención del cáncer de mamá.

Debemos tener en cuenta que la mastectomía practicada ante un diagnóstico de cáncer mamario causa un impacto emocional intensamente perturbador, debido no sólo al significado de la enfermedad, sino también a la privación de un órgano, cuyo simbolismo tiene su origen en las primeras culturas de la humanidad y contiene un valor altamente estimado.

La opción de la reconstrucción mamaria permite recuperar la imagen corporal alterada y además contribuye al restablecimiento del equilibrio psicológico, alterado por la enfermedad, de tal suerte que este procedimiento debe ser considerado como parte integral del tratamiento para las sobrevivientes.

En el Partido Verde Proponemos:

- Intensificar la realización anual de campañas de mastografías gratuitas.
- Proporcionar información gratuita e integral sobre la enfermedad en clínicas y hospitales del sector público.
- Concientizar a la población de que el cáncer de mama no es un problema de las mujeres, es un problema de salud pública que afecta a las familias y a la sociedad entera.
- Intensificar las campañas de prevención enfocadas en la autoexploración.
- Designar presupuestos en el sector salud para prótesis y reconstrucción mamaria.
- Brindar ayuda psicológica a mujeres que han sido sometidas a cirugías de extirpación de mama (mastectomías).

- Diseñar políticas públicas que permitan implementar estrategias para reducir el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento, así como disminuir el tiempo entre la entrega de los resultados de la mastografía y la biopsia diagnóstica para incrementar la supervivencia.

Incentivar la Donación de Órganos

Planteamiento del Problema

Los sistemas de salud enfrentan una creciente demanda de trasplantes asociada a la epidemia de obesidad y al aumento de enfermedades crónico-degenerativas, las cuales producen con frecuencia la pérdida de las funciones de órganos vitales, lo cual puede ocasionar la muerte en los pacientes con estas enfermedades en caso de que no reciban un trasplante.

Para muchos de los pacientes en etapa terminal el trasplante se convierte en la única alternativa terapéutica para salvar la vida, recuperar alguna función e incorporarse a la vida productiva, no obstante, existe un déficit entre la cantidad de órganos que se encuentran disponibles para ser trasplantados y la cantidad que se necesita para satisfacer la demanda de pacientes en espera.

En este sentido, es importante fomentar una cultura de donación de órganos para revertir la inercia negativa que existe en nuestro país en la materia.

Desafortunadamente existe muy poca información sobre el proceso para que nos podamos convertir en donadores y, por lo tanto, casi nula empatía sobre este tema.

Muchas de las personas que esperan un trasplante son niños, mujeres y hombres que anhelan una segunda oportunidad para vivir y ser felices. La posibilidad de ser receptor de un órgano, tejido o hueso donado puede ser tan fácil o tan compleja como que una persona viva o fallecida haya decidido hacerlo de manera altruista.

El día de hoy los avances científicos y tecnológicos permiten hacer realidad la posibilidad de una mejor calidad de vida para los pacientes que enfrentan una enfermedad crónico-degenerativa.

En el año 2001 se crea el Centro Nacional de Trasplantes con el objetivo de coordinar a todas las instituciones de salud pública y de los sectores social y privado, que de alguna forma estuvieran involucradas en el trasplante de órganos y tejidos. Se hicieron modificaciones en años recientes en virtud de las cuales dicho Centro dejó de ser el responsable de la asignación de los órganos donados y se crearon los Centros Estatales de Trasplantes, los Comités Internos de Trasplantes y los Comités Internos de Donación.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó en mayo del año 2000 el decreto por el que se reformó la Ley General de Salud relativo a donación, trasplantes y pérdida de vida, buscando fortalecer y generar una cultura mucho más efectiva de donación, por lo tanto, se incluyó el sistema de no constancia de oposición por considerarse acorde a los principios de altruismo y solidaridad humanos, así como favorecedores de la cultura de trasplantes.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos y logros obtenidos con estas reformas, no se logró cubrir la gran demanda de personas que requieren un órgano o tejido para seguir viviendo.

Es por ello que resulta impostergable instrumentar en nuestro marco jurídico los mecanismos que permitan la obtención legal por nuevas vías de órganos y tejidos para quienes los necesitan, disminuyendo con esto las prácticas clandestinas.

Países como Holanda, Francia, España, Suecia, Alemania y Suiza han disminuido los índices de extracción ilegal y tráfico de órganos al considerar en sus marcos normativos que toda persona fallecida se convierta al instante en donador, si no existe su disposición en contrario, incluso sin requerir de la autorización familiar, aumentando con esto por la vía legal la obtención de un mayor número de órganos y tejidos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Instrumentar acciones que incentiven a los mexicanos a convertirse de manera altruista en donadores de órganos, en un marco de total transparencia y certeza jurídica.
- Impulsar reformas en la Ley General de Salud a fin de que toda persona clínicamente sana que fallezca en accidente o a consecuencia de éste sea considerada como donante, si no existe o consta oposición expresa.

Promoción de la Activación Física en Espacios Públicos, en el Hogar y en el Trabajo a Través de Medios Virtuales

Planteamiento del Problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Asimismo, este organismo asegura que un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos puede ayudar a reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; mejorar la salud ósea y funcional; y generar equilibrio calórico para ayudar con el control del peso.

La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. El segundo es una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.

La pandemia de coronavirus puso de manifiesto la morbilidad en la población mexicana y la frágil situación de salud que viven millones de personas en nuestro país.

En los últimos años la población mexicana ha sufrido una transición epidemiológica en donde destacan la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso. Las causas de lo anterior son diversas, pero resaltan el sedentarismo, la falta de actividad física y los malos hábitos alimenticios.

Lo más grave de la situación radica en que este fenómeno se presenta tanto en población urbana como rural, alcanzando a una parte de la población indígena, así como niños, jóvenes y adultos.

Es importante hacer conciencia en cada persona de que el control del peso no sólo es un asunto de estética, sino de salud, al grado de convertirse en uno de factores de baja autoestima, bajo nivel de productividad y, por lo tanto, de ausentismo laboral, así como elevadísimos costos para la atención médica de todas las enfermedades crónicas que de ello se derivan.

El sedentarismo y las horas frente aparatos electrónicos, de juego o de la televisión han hecho que en la población, salvo excepciones, no se tenga conciencia de la importancia de mantenerse activos y mucho menos que se busque la activación física regular de todos los miembros de la familia.

Si bien es cierto que cada día millones de personas se ejercitan o se proponen hacerlo, en México más de la mitad de la población no lo hace; siendo el nivel de inactividad física de nuestro país similar al de países como Canadá o Estados Unidos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y del gobierno de Canadá.

Como pasa en otros casos, las personas con mayor nivel educativo son quienes se ejercitan más. Según la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) el problema tiene su origen en la educación, porque cuando los niños y niñas tienen información clara aprenden la importancia de ejercitarse y lo harán a lo largo de la vida, por eso es importante transmitir esta información a los niños y jóvenes, incorporando la activación física desde la primera infancia hasta la adultez.

El déficit de actividad física de la población se agrava en el contexto de la pandemia de coronavirus, pues diversas modalidades de trabajo en casa han proliferado con el objeto de continuar con las actividades productivas y cuidar, al mismo tiempo, la salud de las y los trabajadores. En este sentido, los centros de trabajo se han visto obligados a implementar medidas preventivas que reduzcan al mínimo la movilidad y la convivencia entre las personas, lo que ha impactado negativamente en la actividad física que realizaban.

Por lo anterior, se vuelve necesario implementar tanto en los hogares, como en los centros de trabajo y los espacios públicos de acceso controlado una política nacional para la activación física que contribuya al bienestar de la población, aumentando sus factores de protección contra las enfermedades asociadas al sedentarismo y disminuyendo las amenazas a la salud y a la vida de las personas asociadas al sobrepeso y a la obesidad.

No todos los espacios son propicios para practicar un deporte, pero sí lo son para realizar actividad física y hoy más que nunca debemos aprovechar la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación, así como el mayor nivel de conectividad existente en el país para que de manera virtual se puedan compartir guías, instrucciones y materiales para impulsar la realización de actividades que impacten en la salud y promuevan una mejor calidad de vida para las y los mexicanos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover la activación física en espacios públicos, en el hogar y en el trabajo a través de medios virtuales.
- Combatir la obesidad y el sobrepeso por medio de campañas educativas para impulsar el ejercicio y la actividad física.

- Establecer conjuntamente con la CONADE y fundaciones sin fines de lucro iniciativas educativas para estar bien y propiciar que la población se haga responsable de su salud física y cuente con las herramientas para obtener hábitos de vida saludables y crear ambientes escolares, laborales y comunitarios adecuados para ello.
- Rehabilitación de áreas verdes y espacios públicos donde la población pueda realizar activación física y se promueva la convivencia a través del deporte.

Prevención del Suicidio

Planteamiento del Problema

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema grave de salud pública rodeado de estigma, mitos y tabúes. De acuerdo con esta organización, al año cerca de 800,000 personas se quitan la vida a nivel mundial, lo que equivale a que a una persona muere por suicidio cada 40 segundos.

La determinación que lleva a una persona a poner fin a su vida se deriva de un cúmulo de factores que no distinguen género o grupo poblacional. De hecho, las estadísticas indican que puede ocurrir a cualquier edad, pues por un lado la tasa más alta de suicidio en la Región de las Américas se registra en hombres mayores de 70 años y por el otro, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en la misma parte del mundo.

Según la OMS el 79% de los suicidios que ocurren en el mundo se llevan a cabo en países de ingresos bajos y medianos.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se estima que por cada suicidio que se produce hay más de 20 intentos, siendo el intento de suicidio previo el factor de riesgo más importante. Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, como la depresión y el consumo de alcohol está bien establecido, debemos tener en cuenta que muchos suicidios ocurren impulsivamente en momentos de crisis, de tal suerte que el comportamiento suicida está determinado por un gran número de causas complejas, tales como: pobreza, desempleo, pérdida de seres queridos, discusiones, ruptura de relaciones y problemas jurídicos o laborales; además de otros factores que tienen una influencia marcada, entre los cuales figuran: antecedentes familiares de suicidio, maltratos en la infancia y aislamiento social.

El impacto de estas muertes repentinas en las familias, amigos y comunidades es devastador, desafortunadamente, en muchas ocasiones el estigma que rodea a los trastornos mentales y al suicidio impide que las personas busquen ayuda para lograr atender de raíz las causas que los llevan a sentir que no existe otra escapatoria.

Lo anterior significa que la prevención no se ha abordado adecuadamente como tema de salud pública prioritaria por los gobiernos de las naciones, entre ellos, por supuesto, México, situación que es sumamente preocupante, sobre todo si consideramos que la prevención puede realizarse con intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y, a menudo, de bajo costo.

La pronta identificación de los afectados y el tratamiento adecuado a las personas con trastornos mentales son una importante estrategia preventiva. Por otra parte, existen datos que demuestran que la formación del personal de la atención primaria para tales fines contribuye a disminuir los

suicidios entre los grupos de riesgo, tal como se ha observado en países como Finlandia y el Reino Unido.

En ese sentido, los suicidios se pueden prevenir promoviendo la educación y la capacitación en la comunidad, para ello es necesario no solo atender los casos de depresión u otros problemas mentales, sino implementar estrategias para la detección temprana de los posibles detonantes, trabajando como punto de partida con la eliminación de estigmas y prejuicios sociales que rodean a las enfermedades mentales que constantemente limitan a quienes las padecen a pedir ayudar. De igual forma, es importante que existan restricciones para el acceso a medios letales (por ejemplo, pesticidas, armas de fuego, ciertos medicamentos) sobre todo cuando se trata de grupos vulnerables como niñas, niños o adolescentes.

Lo anterior, porque debemos tener en cuenta que dentro del grupo de las niñas, niños y adolescentes también se encuentran fallecimientos por lesiones auto infligidas y que al igual que en los suicidios en el resto de la población, este hecho no significa un simple deseo de morir, sino que se da como un recurso final para escapar de un gran malestar.

En suma, el suicidio es un problema universal que constituye un problema de salud pública muy importante, pero en gran medida prevenible por lo que es necesario que el Estado mexicano refuerce las estrategias para lograr una disminución real y efectiva de un fenómeno que se está traduciendo en cada vez más pérdidas humanas.

En el Partido Verde Proponemos:

- Crear planes nacionales y locales de acción para concientizar sobre los factores de riesgo que llevan al suicidio que logren reunir al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado.
- Destinar recursos a la investigación de los principales factores de riesgo para el suicidio con el propósito de crear una herramienta práctica que brinde información esencial para comprender mejor la conducta suicida y las principales estrategias para combatirla.
- Incluir en la legislación, la obligación del Estado de dar seguimiento psicológico a quienes se causen lesiones auto infligidas, así como soporte a sus familiares.
- Establecer en el marco jurídico que la prevención del suicidio es un tema prioritario, por lo que los tres órdenes de gobierno deberán trabajar de manera coordinada para elaborar un plan a largo plazo.
- Desarrollar e impartir a nivel comunitario y a todo el personal de salud cursos como parte del desarrollo de capacidades para la prevención del suicidio.
- Brindar capacitación y seminarios a los periodistas sobre la información responsable en torno al suicidio, con el objetivo de guiarlos a comunicar al público de manera que se reduzca el estigma y se promueva el acceso a la atención.
- Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales en materia de salud mental teniendo como objetivo mínimo el seguimiento y apoyo psicosocial para los principales factores detonantes del suicidio.

Impulsar la Producción de Medicinas por Parte del Estado

Planteamiento del Problema

El derecho a la salud es un derecho universal consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, su disfrute debe darse sin limitación de ningún tipo. Nuestra Constitución señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de los ámbitos de gobierno.

De lo anterior se desprende que el Estado tiene la obligación de diseñar y operar los programas necesarios para garantizar la protección de la salud de la población, así como de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a la atención integral y de calidad de la salud.

En este punto el sector farmacéutico juega un papel clave, ya que éste se enfoca en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos químicos o biofármacos utilizados para la prevención o el tratamiento de enfermedades.

Con la llegada del COVID-19 el abastecimiento de medicamentos se confirma como una necesidad imprescindible para la seguridad nacional, aunque la realidad es que el sector público ha estado padeciendo problemas serios de abasto desde hace varios años, los cuales solo se han visto agudizados por la pandemia

De acuerdo con información proporcionada por la Cámara Mexicana de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), en los últimos cuatro años las ventas a instituciones públicas han disminuido considerablemente, esta situación, entre muchos otros factores, pone en peligro el abastecimiento de medicamentos, lo cual ocasiona que las personas tengan que destinar sus recursos económicos para adquirir los medicamentos dentro del sector privado aun cuando cuenten con la protección de los servicios que presta el sistema de salud pública.

Como respuesta a las problemáticas actuales de abastecimiento, el gobierno ha realizado cambios en los procesos de licitación y distribución de medicamentos, buscando con ello generar ahorros presupuestales y como estrategia de combate a la corrupción.

Bajo esa tesitura, el Estado debe ir más allá de garantizar la cadena de distribución de medicamentos para atreverse a fabricar a menor costo algunas drogas esenciales que puedan abastecer la red hospitalaria pública y neutralizar potenciales maniobras oligopólicas.

En nuestro país se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerlo, además que la presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas.

Que el Estado mexicano sea capaz de producir medicamentos para todos, permitiría que los criterios económicos no se impongan sobre la seguridad de los enfermos, garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada. Serviría también para reenfocar y estimular la investigación nacional, potenciándola hacia enfermedades prevalentes desatendidas,

así como para mejorar la transparencia sobre efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.

En suma, con esta propuesta se incentivaría a la industria creando un mercado más competitivo, pero anteponiendo en todo momento la seguridad y el acceso a los medicamentos para todos los mexicanos como parte inherente de la protección del derecho universal de la salud.

En el Partido Verde Proponemos:

- Crear un plan de acción y un programa de largo plazo donde se contemple la revisión de las políticas de suministro de fármacos y medicamentos desde el sector público.
- Modificar la legislación con el propósito de crear las condiciones para que el Estado mexicano pueda producir y distribuir los medicamentos para abastecer las necesidades del sistema público de salud.

NIÑEZ

Infancia sin Chatarra

Planteamiento del Problema

A nivel mundial, el COVID-19 ha generado afectaciones críticas y México no ha sido la excepción. Con base en los estudios recientes sobre el comportamiento del virus y las comorbilidades relacionadas, casos graves se asocian directamente al hecho de que, actualmente, ocho de cada diez mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, lo cual nos ha hecho un blanco fácil para ésta y otras pandemias, además de volvernos vulnerables a cualquier otra emergencia de salud mundial o local, a consecuencia de la deteriorada condición de salud de muchos mexicanos.

Un meta-análisis, publicado apenas en julio de 2020, señaló que las personas que padecen diabetes e hipertensión, comorbilidades de la obesidad, tienen el triple de probabilidades de morir por COVID-19 que una persona saludable. Es por esto que resulta imperioso hacer énfasis en la necesidad de cambiar los hábitos de alimentación, al tiempo de exigir regulaciones más estrictas para los productos alimenticios que llegan a las y los mexicanos.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) alerta sobre la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en México, revelando que el sobrepeso y la obesidad han seguido aumentando en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, lo que ha llevado a nuestro país a ocupar los primeros lugares a nivel mundial de obesidad en adultos.

La obesidad está relacionada con diversos factores, pero algunos de ellos son los responsables del inusitado aumento en las prevalencias de sobrepeso y la obesidad en los últimos 20 años en el mundo y en México. Tal es el caso de los hábitos alimentarios y los patrones de actividad física sedentaria, mientras que otros factores, como los hereditarios, aunque importantes, no explican el aumento sin precedentes en los índices de obesidad.

Los patrones de alimentación asociados a la obesidad y varias enfermedades crónicas tienen que ver con una dieta alta en contenido de calorías, con consumos elevados de grasas, especialmente las saturadas y trans, azúcares y sal. Asimismo, los patrones de actividad física sedentaria, caracterizados por poca actividad física en el trabajo, las labores del hogar, la recreación y el transporte cotidianos influyen en el sobrepeso y la obesidad. Es claro que ambos problemas son multifactoriales, pero diversos estudios han demostrado que existe una correlación clara entre ellos y los hábitos alimenticios, y específicamente con el consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.

Una buena nutrición y educación son elementos críticos para el desarrollo de los niños y sus medios de vida futuros. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subraya que las escuelas pueden hacer una contribución esencial a los esfuerzos de los países para conseguir la seguridad alimentaria y construir una sociedad saludable. Los niños son los consumidores actuales y futuros, por lo cual precisan de una educación pertinente para crear hábitos alimentarios sanos a lo largo de toda la vida. Los hábitos alimentarios se aprenden temprano y las escuelas pueden jugar un papel importante al promover pautas alimentarias saludables y sostenibles mediante la participación de los padres, profesores, personal de los servicios de restauración y vendedores de alimentos.

La dieta y la salud son, antes que nada, una forma de vida que el niño aprende en todos los contextos de su existencia. Por consiguiente, para repercutir en la vida de los niños, la educación nutricional debe seguir un enfoque escolar global y hacer frente a los problemas que puedan presentarse en el aula, en el medio escolar, en la familia y la comunidad.

La educación nutricional en las escuelas debe enfrentar los problemas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, garantizando que los niños en edad escolar se conviertan en ciudadanos productivos, saludables y bien instruidos, capaces de asegurar sus medios de vida futuros y, por consiguiente, de contribuir mejor al desarrollo social y económico general del país.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expone que “la buena nutrición es la base del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ya que previene enfermedades y favorece un mejor estado de salud”. En cambio, la malnutrición es un problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes en México de distintas maneras. Por un lado, la desnutrición durante la infancia tiene impactos negativos en el resto de la vida, como talla baja y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, etcétera, con repercusiones graves que afectan la calidad y la esperanza de vida.

La FAO también señala que los programas y políticas escolares holísticos y coherentes son clave para materializar los derechos humanos de los niños a la alimentación, la educación y la salud. A través de intervenciones complementarias, como educación sobre alimentación y nutrición, los alumnos pueden mejorar sus dietas, desarrollar prácticas alimentarias más sanas y extenderlas a sus familias y comunidades.

Por estas razones es importante que no sólo se planteen iniciativas para la disminución del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, también deben incluirse las carnes procesadas, incluidos los embutidos, y que se limite su venta a menores, pues se ha vuelto muy

común ponerlos en presentaciones pequeñas y más atractivas hacia ellos. De igual manera, son necesarias reformas que permitan desde el sector educativo contribuir a mejorar la educación nutricional en las escuelas para enfrentar los problemas de inseguridad alimentaria y malnutrición, garantizando que los niños en edad escolar se conviertan en ciudadanos sanos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Establecer la prohibición en todo Quintana Roo de vender a menores de 15 años alimentos y bebidas no alcohólicas que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio.
- Establecer que la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes deberá considerar el conocimiento para alcanzar una vida sana, un óptimo desarrollo físico y mental y hábitos alimentarios saludables, como forma de contribuir en la prevención de la malnutrición, la desnutrición crónica, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a los mismos.
- Señalar que la Secretaría de Educación de Quintana Roo, en coordinación con el sector salud, deberá fomentar programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva destinados a todas las niñas, niños y adolescentes del país y no sólo a los menores de tres años como actualmente se establece.
- Precisar que las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta, distribución, donación, regalo y suministro en las inmediaciones de los planteles escolares de alimentos y bebidas con alto contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio.
- Señalar como obligación de los padres de los menores o quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y custodia garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación a través de una nutrición adecuada, equilibrada y saludable.
- Impulsar que se etiqueten todos los alimentos para conocer su exceso de contenido de grasas y azúcares nocivos a la salud.

Mejorar la Atención a la Primera Infancia y a la Salud Materno-Infantil, así como Impulsar el Desarrollo Infantil Temprano

Planteamiento del Problema

Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera, ha insistido en señalar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). A partir de este principio, es importante considerar la relevancia que tiene la atención a la primera infancia, pues el cerebro de una persona se desarrolla desde la gestación.

De ahí que el cuidado materno infantil resulte esencial, pues el desarrollo humano comienza antes del nacimiento e implica una compleja interacción de las conexiones neuronales que van formándose a partir de la experiencia y del entorno, considerándose que la alimentación de la madre, la ingesta de ácido fólico y el ambiente en el que viva determinan desde ese momento y hasta los ocho años el futuro del individuo.

En los primeros años de vida, según UNICEF, estas conexiones neuronales se producen a una gran velocidad, algo que no volverá a repetirse, y son la base para el desarrollo, el cual ayudará a los niños a crecer, aprender y progresar, es decir, a ser individuos plenos.

Este proceso se sustenta en una nutrición adecuada, así como en la protección contra el daño y la estimulación positiva, lo que incluye las oportunidades de aprendizaje temprano.

En la primera infancia el desarrollo cerebral es una parte esencial del crecimiento, pues se trata del proceso mediante el cual el niño adquiere sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas básicas y determinan, por tanto, su desarrollo futuro o las limitaciones impuestas de las que saldrá con más dificultad.

Las habilidades que se desarrollan en la primera infancia les permitirán a los individuos pensar, resolver problemas, comunicarse, expresar emociones y realizar relaciones paulatinamente más complejas, es decir, es en ésta donde se sientan las bases de la vida adulta y se prepara el camino para gozar de la salud, el aprendizaje y el bienestar.

Los estudios demuestran que es importante que todos los niños tengan un buen desarrollo en la primera infancia. No obstante, en el caso de los más desfavorecidos, adquirir las habilidades necesarias en un entorno afectuoso y adecuado les proporciona además una vía para salir de la adversidad y encontrar una vida mejor. Estos niños, a su vez, estarán en mejores condiciones de cuidar y educar a sus propios hijos e hijas, lo que ayudará a frenar los ciclos intergeneracionales de desventajas.

Cuando la niñez enfrenta todas estas carencias se puede provocar un desarrollo limitado y perjudicar sus oportunidades en el futuro, lo cual a nivel de la sociedad trae como consecuencia el tener una población que sufra de mala salud y esté poco cualificada, impactando al crecimiento económico y representando una carga para los sistemas de educación, salud y bienestar. Asimismo, esto genera ciclos de privación y dependencia que pueden perdurar durante generaciones.

Por lo anterior, es importante considerar que durante los primeros meses de vida y particularmente durante el embarazo y hasta los 3 años los niños necesitan alimentarse correctamente, siendo fundamentales la lactancia materna, la protección física y emocional, así como la estimulación para que su cerebro se desarrolle de manera óptima. Los progresos recientes en el campo de la neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral durante esta etapa de la vida, gracias a ellos sabemos que en los primeros años el cerebro de los bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, según el Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada segundo, un ritmo que nunca más se repite.

Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que viven (concretamente, una buena nutrición, protección y estimulación a través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores) influyen en las conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las bases para el futuro del niño.

Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de tres elementos esenciales para el desarrollo cerebral: "comer, jugar y amar". En pocas palabras, no cuidamos del cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos de sus cuerpos.

Ahora bien, son varios los factores que determinan el hecho de que algunos niños reciben una nutrición adecuada, estimulación y protección necesaria, mientras que otros se quedan atrás, siendo la más persistente la pobreza.

A menudo, los niños más desfavorecidos son los que menos posibilidades tienen de acceder a los elementos esenciales para un desarrollo saludable. Por ejemplo, la exposición frecuente o prolongada a situaciones de estrés extremo (como en los casos de abandono y maltrato) puede activar sistemas de respuesta biológica que, sin la protección adecuada de un adulto, causan estrés tóxico, el cual puede interferir en el desarrollo cerebral. A medida que el niño va creciendo, el estrés tóxico puede acarrear problemas físicos, mentales y conductuales en la edad adulta.

Los descuidos y la inacción tienen un alto precio y acarrear consecuencias a largo plazo para la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcanzan la edad adulta. También contribuyen a perpetuar los ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión social.

Pese a que son esenciales, los programas para niños y niñas en la primera infancia siguen careciendo ampliamente de financiamiento y su ejecución es deficiente. La inversión pública en el desarrollo del niño en la primera infancia es escasa.

En el Partido Verde Proponemos:

- Brindar a la población infantil acceso a servicios de guardería de buena calidad.
- Garantizar que durante el embarazo las mujeres tomen ácido fólico.
- Impulsar la formación de parteras comunitarias.
- Fortalecer las acciones en materia de atención sanitaria: inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades, acceso al agua potable, mejores servicios de saneamiento y buena higiene.
- Garantizar que la población infantil tenga acceso a una nutrición adecuada, es decir, a una dieta que cubra las necesidades de nutrientes para un crecimiento y desarrollo óptimos, incluyendo la iniciación temprana de la lactancia materna exclusiva y su prolongación durante al menos seis meses, una dieta variada y una alimentación frecuente.
- Proteger a la población infantil de la violencia, el maltrato, el abandono, las amenazas ambientales, incluida la contaminación atmosférica y la exposición prolongada a otras adversidades sociales.
- Promover los cuidados responsables a fin de asegurar la interacción de los menores con un padre, una madre o un cuidador, lo que incluye proporcionar una alimentación adecuada, jugar, cantar o hablar.

Centros de Desarrollo Infantil para los Hijos de los Trabajadores

Planteamiento del Problema

Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos de la psicología del desarrollo, la medicina y la educación han puesto al descubierto la importancia fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia (0 a 5 años) con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social.

La interacción de los menores con aquellos que los rodean les ayuda a moldear su personalidad, así como definir sus propias maneras de pensar y actuar.

Destacando que es importante observar cómo responden los menores al contacto físico, los sonidos y los objetos de su entorno para poder detectar señales de posibles discapacidades o problemas de desarrollo.

Los tres primeros años de vida son cruciales en el desarrollo del niño y se prolongan hasta los cinco años de edad para después incorporarse a la educación básica. En este período los menores aprenden a mantenerse en pie, a caminar, a sentarse adecuadamente, a interactuar con los demás, a comunicarse y desarrollar las habilidades cognitivas básicas.

Al incorporarse a centros formales de desarrollo pueden interactuar con niños de su edad y encontrar un nuevo entorno que estimule sus capacidades, no sólo a nivel cognitivo, también social y emocional.

En ese sentido, si los niños de corta edad no reciben en esos años formativos la atención, el cuidado y la educación con valores que necesitan, sufren de problemas cognoscitivos, emocionales y de comportamiento.

Se ha demostrado que aquellos menores que desde temprana edad asisten a Centros Formales de Cuidado, Bienestar y Desarrollo Infantil tienen mayores probabilidades de tener éxito en el futuro al tiempo que presentan mejor desarrollo en comparación con aquellos que no tienen esa oportunidad. En muchos países esa oportunidad es un derecho.

Aquellos que no logran ingresar a este tipo de educación formal en la primera infancia pueden ver afectada en el largo plazo la capacidad de los niños de iniciar sus estudios y, posteriormente, su desempeño escolar, donde las consecuencias son acumulativas y prolongadas.

Los primeros años de la vida de un menor son muy importantes para su salud, es la etapa en la que cada niño se desarrolla a su propio ritmo, por lo que es imposible predecir exactamente cuándo aprenderá una habilidad en particular.

Contar con el apoyo de un experto en un centro formal, así como conocer los indicadores del desarrollo en la primera infancia, contribuye a que los menores alcancen su pleno potencial.

En el Partido Verde Proponemos:

- Hacer cambios en las Leyes correspondientes para promover la creación de Centros de Desarrollo Infantil para población abierta y transitar de los anteriores términos de “guarderías o estancias”.
- Establecer un Programa de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para población abierta, no solamente derechohabientes del IMSS y el ISSSTE.
- Garantizar como un derecho de toda la población el acceso a centros formales especializados en el desarrollo infantil, “Centros de atención, cuidado y desarrollo infantil” para promover el máximo desarrollo de capacidades en la población menor de 6 años, alineados a la nueva Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.

Fomentar el Involucramiento de los Hombres en la Crianza de los Hijos para una Paternidad Responsable

Planteamiento del Problema

La paternidad responsable es un nuevo paradigma de crianza que debe trascender en la vida familiar y comunitaria en nuestro país. Expertos señalan que, para promover un sano desarrollo de las niñas y niños, los hombres no solo deben participar en la procreación ni sujetarse al rol tradicional de procurar alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino que, además, tienen que asumir la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección.

La paternidad responsable plantea que se debe asumir conscientemente que la procreación de un ser humano implica no sólo un compromiso y deber recíproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad, pues esa decisión tendrá repercusiones importantes al transformar de fondo la estructura de las familias, que son las células básicas de la comunidad.

Tradicionalmente, las labores de educación y crianza de las y los hijos estaban catalogadas como actividades propias de las mujeres. Sin embargo, diversos cambios sociales, económicos y culturales han ido transformando la repartición de tareas y responsabilidades, tanto al exterior como al interior de las familias, lo que ha demandado una mayor participación de los hombres en las labores domésticas y una mayor presencia de las mujeres en el mundo laboral y otros ámbitos históricamente reservados solo para hombres.

Bajo esta perspectiva, el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados elaboró una investigación en la que destaca la necesidad de impulsar una mayor participación de los hombres en las labores de crianza de las familias mexicanas para construir desde un plano de igualdad nuevas oportunidades de desarrollo para todas las personas.

El documento referido plantea que la toma de acciones respecto a la construcción de un nuevo modelo de masculinidad que contemple nuevos paradigmas en materia de crianza responsable no debe estar guiada únicamente por actitudes de cambio del tipo “que los hombres dejen de ser violentos”, “que griten menos en la casa” o “ayuden a las mujeres a barrer y cocinar”, sino que se debe trabajar desde los valores inherentes a la masculinidad patriarcal que obstaculiza el ejercicio responsable de la paternidad para irlos sustituyendo por otros que rompan esos estereotipos de género y así dar paso a una renovada construcción social de lo que implica ser un hombre en nuestra sociedad, desde un enfoque basado en la igualdad y la no discriminación.

El padre, al igual que la madre, debe participar de la vida de las hijas e hijos, desde el embarazo. Saber que será padre inmediatamente lo liga a la vida de un nuevo ser que requiere ser acompañado desde la gestación, siendo lo ideal que acompañe y dé seguimiento al control prenatal, ayude en la selección del nombre y de otras cosas relacionadas a la vida del bebé, con el mismo entusiasmo y afecto que la madre lo hace.

Durante el embarazo se crea un espacio mental y físico para el bebé que lo hará sentir deseado y querido. La figura del padre es importante en todas las etapas del desarrollo de un ser humano.

El padre provee apoyo y soporte emocional para la madre en los primeros años de vida del bebé, principalmente en los primeros meses. Cuando la mujer tiene un bebé, sobre todo si es primeriza, siente mucha ansiedad, al no saber si está o no haciendo bien las cosas. La mamá siente que hay un mundo aparte donde están ella y el bebé solamente. Como existe una relación tan cercana entre la mamá y su bebé, muchas veces las ansiedades de la mamá pueden quedar puestas en el bebé. Si el padre entra en esta dinámica, puede separar un poco la ansiedad del bebé de la ansiedad de la mamá. Si el padre puede tranquilizar a la mamá en estos momentos de ansiedad, entonces, la mamá podrá estar más calmada para atender a su bebé. De igual forma el papá puede intervenir ayudando con el bebé en momentos donde a la mamá le esté costando tranquilizarse, por el cansancio y la ansiedad de hacer las cosas bien.

En etapas posteriores es importante que la pareja comparta las tareas domésticas, así como la atención hacia los hijos, que comprenden las labores del hogar, la alimentación, las tareas académicas y la asistencia a eventos escolares y sociales. Inicia una etapa compleja que se hace más fácil cuando todas y todos comparten, como una comunidad familiar, esas tareas que pesan pero que de ellas se beneficia la familia completa.

Uno de los grandes desafíos para avanzar en la igualdad de género es lograr el involucramiento activo y corresponsable de los hombres en el cuidado y la crianza de los hijos e hijas, así como en los esfuerzos de prevención de la violencia desde la familia.

El mensaje es sencillo, pero a la vez complejo, se trata de entender que la igualdad de género no es un tema solo de mujeres, pues la paridad en el hogar y en el trabajo es una situación de ganar-ganar que resulta en más oportunidades y más felicidad para cada miembro de la familia, generando personas sanas y felices.

En las últimas décadas, en Quintana Roo ha habido avances sustanciales en la igualdad entre hombres y mujeres, en temas como el acceso a la educación y la incorporación en el mercado laboral. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que hombres y mujeres asuman una participación igualitaria en el trabajo doméstico y las labores de cuidado. Esta disparidad sigue limitando las oportunidades de las mujeres tanto de educación como de empleo.

Para acabar con estas desigualdades y promover oportunidades plenas para que niñas y mujeres puedan desarrollar su potencial es crucial que los hombres asuman el compromiso de compartir las labores domésticas, pero, sobre todo, la crianza de las y los hijos. En la medida en que los hombres compartan más responsabilidades en sus hogares, especialmente en el cuidado de los hijos, las mujeres tendrán mayor oportunidad de aumentar su participación laboral e incrementar sus ingresos, lo cual redundará a favor del hogar.

La paternidad activa también impacta de manera positiva a las y los hijos, ya que está vinculada a niñas y niños más felices y saludables.

Los padres también ganan. La paternidad activa está asociada con mayor felicidad, mejor salud y menos probabilidades de sufrir de depresión o morir prematuramente. La evidencia también muestra que los padres que participan en el hogar gozan de una mayor estabilidad y satisfacción matrimonial.

Tomando todos estos beneficios en cuenta, es obvia la necesidad de lograr un mayor involucramiento de los hombres en el hogar, pero en la región aún existen diversas barreras que dificultan el proceso. En México prevalecen costumbres, creencias y una normatividad obsoleta que refuerzan el rol de la mujer como cuidadora de la familia. De igual forma, las políticas de conciliación familia-trabajo aún dejan mucho que desear.

Es importante diseñar programas para asegurar que los hombres sientan que estas labores y espacios también les pertenecen. Asimismo, es importante empezar el trabajo con los jóvenes y no esperar a que sean adultos.

Por otro lado, es necesario mejorar las condiciones laborales para la conciliación trabajo-familia, con permisos como las licencias de paternidad. Las políticas de licencia para los padres pueden no solamente impulsar la participación de los hombres en tareas del cuidado, sino también contribuir a una mayor equidad en el mercado laboral.

También es imprescindible diseñar programas que lleguen a todas las familias sobre nuevas masculinidades y el papel central que juegan los padres en la educación y formación de las y los hijos, así como de familias realmente paritarias y felices.

En el Partido Verde Proponemos:

- Fomentar el involucramiento de los hombres en la crianza de los hijos para una paternidad responsable, a través de una estrategia por la igualdad entre los hombres y las mujeres que promueva nuevos esquemas de masculinidades positivas y sensibilice a los hombres sobre la relevancia del ejercicio de su paternidad para sus familias, así como de sus repercusiones sociales.
- Ampliar las licencias de maternidad y paternidad remuneradas en la iniciativa privada y en el sector público.
- Promover la flexibilidad laboral del padre cuando tenga que acudir a consulta por embarazo o enfermedad de un miembro de la familia.
- Facilitar en los tribunales las negociaciones de la crianza compartida en caso de separación de los cónyuges.

MUJERES

Incentivar la Lactancia Materna Exclusiva

Planteamiento del Problema

En los mamíferos, la vida del recién nacido depende de la capacidad de su madre para amamantarlo, siendo la lactancia esencial para completar el proceso de la reproducción y asegurar la supervivencia de la especie. El ser humano es un mamífero y como tal, la mujer posee una fisiología y una anatomía que se relacionan con el dar de mamar. El ser humano es la única especie que ha intentado reemplazar esta función esencial, teniendo como consecuencia un mayor riesgo del niño de enfermar y morir.

La lactancia proporciona beneficios tanto a la madre como al niño, así como también a toda la sociedad. Existen ventajas nutricionales, inmunológicas, económicas e importantes beneficios en el desarrollo psicosocial del niño asociados a la lactancia materna.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan lo siguiente: Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida; Lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida; Introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta los dos años o más.

A pesar de que se "ha logrado un notable progreso en lo que se refiere a mejorar las prácticas mundiales de alimentación de lactantes y niños pequeños en los últimos años, las prácticas de alimentación inapropiadas, es decir, la alimentación subóptima o la ausencia de lactancia materna y la alimentación complementaria inadecuada continúan representando la principal amenaza para la salud y la supervivencia infantil en todo el mundo.

UNICEF describe a la leche materna como la primera inmunización del bebé, contiene anticuerpos que protegen de enfermedades y ayuda a prevenir la diarrea, otitis, infecciones pulmonares y otros problemas de salud. No se debe soslayar que la diarrea y la neumonía son las dos causas principales de mortandad en la niñez en todo el mundo.

La leche materna también puede tener beneficios a largo plazo para la salud de la madre y el niño, como la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia y la adolescencia.

Los niños amamantados tienen un riesgo significativamente menor de enfermar y de morir. Tienen además menos riesgo de enfermar de infección urinaria y meningitis. Se ha demostrado que la protección sobre el riesgo de meningitis no solo es efectiva durante la lactancia, sino que permanece hasta la edad escolar. Diversos estudios han demostrado un menor riesgo de enfermar en etapas posteriores de la vida de diabetes juvenil, linfomas y enfermedades cardiovasculares.

Amamantar a sus hijos también contribuye de forma importante a la salud de las madres, por ejemplo, reduce el riesgo de diabetes tipo II y de cáncer de seno y ovario. Igualmente, la capacidad de la lactancia materna para salvar vidas reviste una particular importancia en contextos humanitarios, donde el acceso al agua salubre, saneamiento adecuado y servicios básicos suele ser limitado.

La lactancia materna es una práctica que debe regir la alimentación y nutrición del infante, considerando su elevado valor nutritivo e inmunológico, científicamente probado. Por lo anterior, es recomendada y difundida por la OMS.

El suministro de leche materna al niño durante la primera hora de vida se conoce como inicio temprano de la lactancia materna, con lo cual se asegura que recibe el calostro (primera leche), rico en factores de protección que previenen la mortalidad neonatal.

Los estudios actuales indican que el contacto directo de la piel de la madre con la del niño poco después del nacimiento ayuda a iniciar la lactancia materna temprana y aumenta la probabilidad de mantener la lactancia exclusivamente materna entre el primer y cuarto mes de vida, así como la duración total de ésta. Los recién nacidos a quienes se pone en contacto directo con la piel de su madre también parecen interactuar más con ellas y llorar menos.

Independientemente de que el parto tenga lugar en una choza de una aldea rural o en un hospital, amamantar a los recién nacidos dentro de la primera hora de vida equivale a brindarles la mejor oportunidad de sobrevivir, crecer y desarrollar todo su potencial.

En función de lo anterior, es de gran relevancia garantizar el inicio temprano de la lactancia materna exclusiva a libre demanda dentro de los primeros treinta minutos de vida. Es de señalar que aun cuando las mujeres se propongan amamantar exclusivamente, en ocasiones los bebés son alimentados con fórmula infantil en el hospital sin ninguna justificación médica, lo cual aumenta el riesgo para la continuidad de la lactancia materna en el futuro.

A pesar de la abrumadora evidencia disponible, la lactancia materna, particularmente el inicio temprano de la misma (suministro de leche materna al niño durante la primera hora de vida) es una práctica que no se ha podido asegurar en todos los nacimientos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Garantizar el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos y el derecho de las niñas y niños a ser amamantados en todo momento y en toda circunstancia.
- Incentivar el inicio temprano de la lactancia materna exclusiva a libre demanda dentro de los primeros treinta minutos de vida y en los casos medicamente justificados, facilitar la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional de los menores.

Equidad en la Remuneración entre Hombres y Mujeres. "A Igual Trabajo, Igual Salario"

Planteamiento del Problema

La discriminación en el trabajo constituye una violación de un derecho humano elemental. Los trabajadores pueden ser discriminados por distintos motivos, incluso por su sexo. En el caso de las mujeres, la discriminación se manifiesta particularmente en la remuneración.

La remuneración comprende elementos que van más allá del salario básico. El conjunto de la retribución puede incluir también primas y comisiones, además de otras prestaciones, como el subsidio de vivienda, el seguro de salud y de vida, y la concesión de un vehículo, un teléfono móvil y/o un ordenador portátil por parte de la empresa.

Las mujeres que se insertan en el mercado laboral lo hacen en condiciones desfavorables: son ellas quienes asumen la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, por lo que buscan empleos más flexibles, y es más frecuente que ellas interrumpan su carrera profesional para atender estas actividades.

La situación de desigualdad de las mujeres en el trabajo propicia la desigualdad en otras esferas de su vida. Los trabajos de las mujeres tienen menos probabilidades de llevar asociadas prestaciones como seguro médico y licencia remunerada. Incluso cuando las mujeres tienen derecho a una pensión, los salarios más bajos significan pagos más bajos en su vejez.

En la participación que tienen las mujeres en el sector laboral predomina la discriminación y la falta de respeto a sus derechos, especialmente en el ámbito económico, lo cual se traduce en falta de estímulos y reconocimiento laboral, al mismo tiempo que se cataloga la labor por género, dificultando con ello alcanzar la igualdad salarial.

La situación de las madres que laboran o madres solteras también es un acto discriminatorio que influye en la brecha salarial, ya que las horas que las mujeres dedican a los hijos, al hogar y, en general a su familia, son actividades no remuneradas.

Existen dos principios de igualdad de remuneración que se deben seguir: I) Igualdad de remuneración por un mismo trabajo, lo cual quiere decir las mujeres y los hombres deberían percibir la misma remuneración por un trabajo que es igual o similar; y II) Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, lo cual significa que las mujeres y los hombres deberían percibir la misma remuneración por un trabajo que puede ser diferente de muchas formas, pero del mismo valor.

Resolver las cuestiones causantes de las diferencias de remuneración tiene una repercusión que va más allá del aumento salarial de las mujeres: es una de las formas más importantes de luchar contra la discriminación basada en el sexo en el lugar de trabajo y de fomentar la igualdad de género.

La igualdad de remuneración promueve el bienestar de las familias, aumenta la competitividad de las empresas y fomenta el Desarrollo Estatal. Comprometerse con la igualdad de remuneración es comprometerse con el trabajo digno y la justicia social, así como también con el éxito económico para todos los miembros de la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 señala que: "Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad".

Es importante reconocer que, con la pandemia de COVID-19 y su impacto económico, se pronostica un mayor ensanchamiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, en buena medida porque muchas mujeres trabajan en los sectores que han registrado más afectaciones como la industria de servicios, la hostelería y la economía informal.

En el Partido Verde Proponemos:

- Garantizar la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres que realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y de todas las condiciones laborales de desigualdad.
- Promover incrementos salariales para las mujeres en los sectores en los cuales las mujeres representen más del 80% de los asalariados (servicios sociales, comunitarios, de cuidado y discapacidades).

- Crear una unidad de auditoría especializada sobre género y no discriminación para que los inspectores del trabajo se ocupen de las cuestiones de igualdad de remuneración.
- Instaurar un sistema para que cada año los empleadores faciliten información a los representantes de los trabajadores sobre los puestos de trabajo ocupados por hombres y por mujeres, así como sus respectivas remuneraciones.
- Implementar un método de evaluación basado en perfiles de las competencias de los trabajadores en combinación con las exigencias del puesto de trabajo en términos de esfuerzo y responsabilidades, así como de las condiciones de trabajo y no en el género y los estereotipos.
- Fomentar que las empresas contraten a un porcentaje mínimo de mujeres en su plantilla laboral.
- Garantizar la vuelta de las mujeres al trabajo después del parto con el mismo sueldo que tenían antes de éste.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad

Planteamiento del Problema

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o en el trabajo.

En este sentido, es menester que el Estado y sus Instituciones promuevan la erradicación de la discriminación que sufren las personas con discapacidad, lo cual se logra por medio de políticas públicas con un enfoque transversal, las cuales busquen atender y darle una solución a los distintos obstáculos a los que se enfrentan día con día. Se trata de que una discapacidad no se traduzca en la pérdida de oportunidades para vivir o para acceder a mejores condiciones de vida.

Promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad requiere y exige un gran esfuerzo de parte del Estado y de la sociedad, ya que para alcanzar condiciones de igualdad y dignidad para ellos es necesario unir voluntades y poner en marcha esfuerzos para que estas personas puedan acceder al mercado laboral, a los servicios públicos como la educación y la salud.

Asimismo, se deben adaptar los espacios públicos para garantizar su accesibilidad física. Por otro lado, es también imprescindible hacer las adecuaciones necesarias a fin asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la información y a las comunicaciones, especialmente a aquellas cuyas discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales lo requieran.

En este sentido, el diagnóstico es claro, nos estamos quedando cortos en el ámbito de la atención a personas con discapacidad y se requiere transformar esa realidad para garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos en las mismas condiciones que cualquier otro mexicano.

En el Partido Verde Proponemos:

- Crear un Programa de Atención a las Personas con Discapacidad, del cual participen los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, cuyo objetivo sea atender y resolver las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro estado y elimine los obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos.

ADULTOS MAYORES**Programa de Atención al Alzheimer y otras Demencias en Adultos Mayores****Planteamiento del Problema**

Las enfermedades vinculadas a la edad en la población se han convertido en un problema que aumentará en grado y en complejidad conforme la estructura poblacional de nuestro estado vaya envejeciendo, por lo que se deben implementar estrategias efectivas para garantizar el derecho humano a la salud.

Atender los problemas de salud relacionados con este sector de la población representa un gran reto para el sistema de salud, toda vez que se verá obligado a mediano y largo plazo a destinar mayores recursos económicos y humanos para el tratamiento oportuno e integral de las enfermedades que afectan a los adultos mayores, que en muchos de los casos son padecimientos crónico degenerativos que evolucionan de forma gradual, deteriorando la calidad de vida de quienes los padecen.

Los problemas de salud que afectan a las personas adultas mayores en Quintana Roo son diversos y tienen complejidades distintas, sin embargo, las enfermedades relacionadas con la demencia son de los principales padecimientos que afectan a mujeres y hombres a partir de los 60 años de edad, minando gradualmente su capacidad cognitiva y física y situándolos en condiciones de dependencia y vulnerabilidad.

Este problema se vuelve más complejo si tomamos en cuenta que la población mexicana tiende a ser cada vez grande en el número de personas adultas mayores y menor en el número de jóvenes.

La demencia es el nombre genérico que se le da a los padecimientos crónicos o progresivos que se caracterizan por el deterioro de la capacidad cognitiva lo cual repercute de forma directa, entre otras cosas, en la memoria, el pensamiento, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, etcétera.

Este tipo de padecimientos son consecuencia de diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro, algunos de los factores de riesgo que se han identificado en las personas que padecen cierto tipo de demencia están relacionados a otros padecimientos, malos hábitos y factores como depresión, el bajo nivel educativo, el aislamiento social, la inactividad cognitiva y el sedentarismo.

Dentro de este grupo de enfermedades el Alzheimer y la demencia vascular son los padecimientos que se presentan con mayor frecuencia en las personas, toda vez que el 90% de los casos corresponde a los mismos.

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que ocasiona deterioro gradual en las funciones del individuo y por su alta incidencia en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que su prevención y atención es un asunto de salud pública que debe ser atendido por los Estados de manera prioritaria.

El Alzheimer como padecimiento crónico degenerativo genera repercusiones directas en las personas que lo padecen y se ha registrado que se presenta principalmente en mujeres, sin que esto signifique que los hombres no sufran de igual manera esta enfermedad y sus consecuencias.

Además de las repercusiones que tiene esta enfermedad en las funciones físicas y cognitivas de las personas, el Alzheimer reduce significativamente la calidad y la esperanza de vida de quien lo padece.

Hablar de esta enfermedad y de otros tipos de demencia implica comprender el ambiente en el que se desarrollan, toda vez que al presentarse principalmente en personas a partir de los 60 años su contexto individual, social y familiar se ve afectado de forma directa al demandar y requerir cuidados especiales que implican un costo económico y la dedicación de tiempo, que en muchos de los casos son absorbidos directamente por los integrantes de la familia.

El Alzheimer y otros tipos de demencia representan en la actualidad en nuestro país un reto que pone en entredicho la capacidad institucional para atender este tipo de padecimientos, siendo más la demanda que los servicios disponibles y afectando la economía y la calidad de vida no sólo de los pacientes, sino de sus familias, pues son ellos quienes sufragan los gastos necesarios para su atención. Esta situación se agrava si tomamos en cuenta que un número importante de personas mayores de 60 años de edad viven solas y no cuentan con familiares o amigos que se hagan responsables de su cuidado.

Derivado de lo anterior se hace necesario que el gobierno fortalezca las políticas públicas en materia de atención de enfermedades como el Alzheimer y otro tipo de demencias con la finalidad de garantizar niveles adecuados de bienestar en las personas que lo padecen, su cuidado y protección en general en caso de no contar con familiares o amigos que se hagan responsables de ellos.

En adición a lo anterior, también es necesario fortalecer en el ámbito federal, estatal y municipal las acciones en materia de prevención de estos padecimientos, ya que, si bien no tienen cura, sí es posible prevenirlos mediante la detección oportuna o, en su caso, aminorar los efectos negativos que ocasionan en las personas a través de una alimentación adecuada y actividad física regular, entre otras recomendaciones.

El incremento de los casos de Alzheimer y otros tipos de demencias es una realidad que nuestro país enfrenta desde hace años y se agravará conforme la población de nuestro país envejezca, por lo cual es urgente que se tomen cartas en el asunto para garantizar a la población adulta mayor propensa a desarrollar alguno de estos males que a través de programas públicos especializados tengan acceso a servicios de salud de calidad para atender este tipo de enfermedades.

En el Partido Verde Proponemos:

- Diseñar e implementar programas para la prevención, detección oportuna y atención integral de personas con Alzheimer y otros tipos de demencia en instituciones de salud pública, federales y estatales, con visión a corto, mediano y largo plazo, a fin de brindar a las personas con este tipo de padecimientos los cuidados y la atención especializada necesaria para preservar su salud y calidad de vida.
- Impulsar la creación de programas de apoyo económico para solventar los gastos del cuidado de personas con Alzheimer y otros tipos de demencia, con el objetivo de proteger el patrimonio de los pacientes y de sus familias, y garantizar su acceso a cuidados especializados a través de las instituciones de salud pública federales y estatales.

PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS**Ingreso Mínimo Vital****Planteamiento del Problema**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sido reconocida históricamente como el primer texto de su especie que otorga derechos sociales a las personas.

A partir de este reconocimiento, el texto constitucional mexicano se ha enriquecido con diversas normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a todas las personas. Nuestra reciente historia da cuenta de muchas de estas acciones, entre ellas destacan especialmente: la introducción del mandato de redistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 constitucional; la creación de un sistema de salud para el bienestar a fin de garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social; el establecimiento de la obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente; el reconocimiento del derecho de las personas adultas mayores a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva; y el establecimiento de un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.

No obstante, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y consolidando un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, principalmente después de que la pandemia por COVID-19 ha dejado expuesta la profunda desigualdad persistente entre los diversos sectores de la población y la forma en que ésta ha convertido en un impedimento para el acceso a otros derechos fundamentales.

A fin de extender los alcances de los derechos sociales, en otras latitudes se han llevado a cabo reformas con el propósito de garantizar que las personas puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos y libertades que les otorga el orden constitucional, siendo una condición indispensable para ello que cuenten con la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.

En ese sentido, un orden constitucional comprometido con los derechos debe necesariamente reconocer que para que los mismos sean efectivos se requiere establecer que las personas tienen requerimientos existenciales básicos que deben ser satisfechos para que puedan alcanzar un pleno desarrollo. La identificación de estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas que buscan propiciar igualdad en la sociedad.

El conjunto de estos requerimientos esenciales se denomina "mínimo vital" y forma parte de los objetivos que pueden identificarse dentro de un sistema democrático social que busca la igualdad de oportunidades y que propicia el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número posible de personas.

El Estado social de derecho está basado en la solidaridad. En este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta fundamental. Los derechos sociales crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. Para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de la comunidad.

Estos derechos sociales pueden constituirse como principios que sirven a manera de directriz a las autoridades para que consideren su cumplimiento de manera particular y especial en cada caso y, al mismo tiempo, como un mandato para realizar los objetivos que buscan el cumplimiento de determinadas aspiraciones sociales.

Entre los derechos sociales, el derecho a contar con un mínimo vital se ha construido a partir de la interpretación sistemática de diversas Constituciones (España, Colombia, Alemania, entre otras). Así, el mínimo vital se presenta como un eje que articula lo sustantivo con lo procesal para hacer efectivos los principios constitucionales que sustentan a la democracia y los derechos fundamentales. En el centro del modelo aparece el concepto de dignidad de la persona. Este modelo también se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene un doble reconocimiento del derecho a un mínimo vital. Por un lado, se reconoce el derecho del trabajador a "una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a él y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social". Y, por otra parte, establece el derecho de toda persona a "un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".

La concepción del Estado social de derecho hace referencia a un "sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona dentro de la sociedad sin privaciones irracionales". Estos derechos sociales se basan en el principio de igualdad y tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su libertad.

Asimismo, desde la perspectiva de los tribunales el concepto de mínimo vital en un Estado social de derecho sirve para proteger a las personas frente a un perjuicio irremediable causado por la falta de atención a un derecho social. Así, el mínimo vital se instituye como un recurso del cual echan mano las autoridades jurisdiccionales para subsanar una situación de injusticia o para

socorrer a una persona indefensa frente a la desidia y la indolencia del Estado y, en ocasiones, de los particulares.

Desde un punto de vista operativo, el derecho a un mínimo vital puede referirse a la posibilidad de que las personas puedan disponer libremente de recursos económicos mínimos para hacer frente a sus necesidades más perentorias. Para articular este ejercicio, el derecho al mínimo vital hace a un lado a aquellos segmentos de la población que tienen recursos suficientes para su subsistencia y se concentra en quienes no tienen los medios necesarios. De esta manera, una política diseñada para garantizar el mínimo vital se debe enfocar en proporcionar complementos al salario de los trabajadores que así lo requieran, o bien, una cantidad periódica a aquellos ciudadanos que no realizan un trabajo remunerado.

El establecimiento constitucional del ingreso mínimo vital no pretende que todas las personas sean iguales. Se aspira a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y de derecho, que impiden el acceso del mayor número de personas a las mejores oportunidades.

El mínimo vital supone un derecho constitucional fundamental a la vida no entendido como mera existencia, sino como una existencia digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las facultades de las que puede gozar la persona humana.

Es Necesario que el estado tome las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y acceder a una vida digna.

En el Partido Verde Proponemos:

- Garantizar la existencia de mecanismos que permitan habilitar a las personas para que puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos que les otorga el orden constitucional.
- Fijar el mandato expreso en la Constitución para que el Estado mexicano tenga la obligación de garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y acceder a una vida digna.
- Establecer una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación plena en la sociedad a través de incentivos efectivos para una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

Seguro de Desempleo

Planteamiento del Problema

A nivel mundial uno de los grandes retos y principales objetivos de los gobiernos es garantizar la mayor tasa de ocupación y la menor tasa de desempleo posibles. Aunque teóricamente todos los países buscan llegar al pleno empleo, las deficiencias estructurales e institucionales crean importantes diques y desigualdades que impiden materializar este objetivo.

Aunado a lo anterior, la humanidad vive una de sus peores crisis contemporáneas en materia de salud pública y económica. Desde la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, los gobiernos de casi todos los países han tenido algún tipo de afectación, directa o indirecta, conforme se propaga el virus.

A principios de diciembre de 2020 se habían contabilizado poco más de 68 millones de contagios y, lamentablemente, 1 millón 553 mil 717 defunciones. Esta situación ha tenido grandes impactos socioeconómicos, muchos de ellos aún incuantificables, derivados de las medidas de aislamiento y de distanciamiento social que han paralizado totalmente muchas actividades económicas y gubernamentales.

Desafortunadamente, además de las consecuencias en términos de pérdida de vidas humanas y las sanitarias, los mercados emergentes y las economías en desarrollo que dependen de los productos básicos serán las más vulnerables a los efectos económicos de la pandemia.

El Banco Mundial refiere que la pandemia de COVID-19 ha repercutido en la oferta y en la demanda de productos básicos como resultado del estancamiento del crecimiento económico. Aunque se prevé que el verdadero impacto en los mercados de productos básicos dependerá de la gravedad, la duración y la forma en que los países y la comunidad mundial decidan responder a ella, esta pandemia puede dar lugar a cambios permanentes en la oferta y la demanda de esos productos y, en especial, en las cadenas de suministro que los trasladan desde los productores hasta los consumidores de todo el mundo.

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pandemia podría ocasionar que la economía mundial se reduzca en 0.9% durante el 2020, en lugar de crecer al 2.5%, como se preveía antes de la crisis. Lo anterior conducirá a una disminución de la producción global en caso de que las restricciones económicas se extiendan por más tiempo.

Así mismo, se prevé una pronunciada caída del sector servicios como resultado de las medidas de confinamiento obligatorio y las restricciones, las cuales afectarán principalmente al comercio minorista, al sector del esparcimiento, las actividades recreativas y los servicios de transporte.

Esta situación tendrá efectos directos en el empleo por lo que se vuelve fundamental el diseño e instrumentación de medidas contingentes para mantenerlo, estimularlo y garantizar un ingreso para los desempleados a través de un seguro de desempleo o ingreso básico temporal, como ya lo han implementado en muchos otros países.

También se vuelve importante impulsar medidas fiscales y de créditos directos para micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por esta situación extraordinaria provocada por el coronavirus que afectó directamente la generación de nuevos empleos y el mantenimiento de los mismos.

Estamos en la necesidad imperiosa de crear un Seguro de Desempleo a nivel nacional que permita a los trabajadores que han perdido su fuente de trabajo contar con un ingreso para solventar sus necesidades básicas mientras encuentran un empleo nuevo. Si bien existen algunas entidades que cuentan con programas en la materia, lo cierto es que estos no alcanzan a toda la población en nuestro país y tampoco representan derechos sociales que trasciendan a los gobiernos que los instrumentan.

Más allá de ver a la emergencia sanitaria solamente como una crisis, es momento también para analizar las oportunidades que en este contexto se presentan para ampliar los derechos sociales de la población, proteger su ingreso y contribuir a que la economía se recupere de manera más rápida y sostenida una vez superada la contingencia sanitaria.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar la creación de un Seguro de Desempleo que garantice el pago de al menos un salario mensual para personas que hayan perdido su empleo y que hayan cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante al menos 12 meses antes de la pérdida del empleo.
- Promover la creación de un vale para adquirir una canasta básica alimentaria para otorgar como apoyo temporal a personas que han perdido su fuente de ingresos.

Suspensión de Pagos de Renta e Hipoteca hasta por tres Meses para Personas que Pierdan su Fuente de Ingresos

Planteamiento del Problema

En ciertos casos y países las prestaciones de seguridad social ante la pérdida de empleo permiten a las personas acceder a apoyos como subsidios o transferencias directas de recursos por un tiempo mientras encuentran un nuevo trabajo.

No obstante, en cualquier caso, las deudas y las obligaciones persisten lo mismo que las necesidades básicas humanas, lo que es a costa de un precario ahorro que, en caso de existir, se agotó rápidamente, obligando a las personas a tomar medidas desesperadas, como recurrir a prestamistas de dudosa reputación o a empresas financieras con tasas de interés libremente pactadas, pero altísimas y abusivas.

Durante el inicio de la pandemia de COVID-19, muchas instituciones bancarias que operan en nuestro país hicieron una moratoria o una espera de pago sin intereses a obligaciones crediticias. Igualmente, algunos arrendadores de oficinas o casas habitación, recorrieron o difirieron las fechas de salida de sus contratos, dando la posibilidad a los arrendatarios de no pagar un par de meses de renta durante la pandemia, pero recorriendo el pago de estos al final. De esta manera, tampoco el arrendador tiene que absorber esta pérdida. Esto es lógico, aún más en el caso de que el arrendador tenga como única fuente de ingresos la renta de un bien inmueble.

El gobierno federal también implementó acciones para apoyar a las personas durante la pandemia. Desde finales de marzo del 2020, el INFONAVIT anunció que se tendría a disposición un presupuesto de 19 mil 326 millones de pesos para financiar apoyos de crédito de

derechohabientes que no pudieran pagar sus mensualidades debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19. Estos financiamientos tienen como objetivo reducir las afectaciones en la economía familiar de los derechohabientes y evitar que se ponga en riesgo su patrimonio.

El INFONAVIT también anunció recientemente medidas de ayuda para los patrones de pequeñas y medianas empresas.

Gracias a lo anterior se congelará el saldo de la cuenta del trabajador durante tres meses y no se producirán intereses de ningún tipo en ese periodo. Si el acreditado puede y decide pagar sus cuotas, la totalidad de sus pagos amortizarán a capital. Este beneficio puede extenderse hasta los seis meses según el desarrollo de la contingencia sanitaria.

Si bien los contratos de crédito para vivienda y los derechos de sus coacreditados pueden ser diferentes, dependiendo de si se trata de una empresa privada o de autoridad o institución pública, ambas habilitan la posibilidad de gozar del derecho humano a la vivienda, a un techo y a vivir dignidad.

Las medidas descritas deberían ser formalizadas en nuestro marco jurídico, en previsión de la ocurrencia de situaciones como la que hoy estamos viviendo en todo el mundo a consecuencia del COVID-19, pues ésta es una manera de garantizar el derecho de los trabajadores a la vivienda y también una forma de robustecer la capacidad del Estado y de la sociedad para enfrentar y superar circunstancias adversas.

En el Partido Verde Proponemos:

- Realizar reformas a las leyes que regulan la renta de casas habitación y las hipotecas para que las personas puedan acordar con sus arrendadores o con las instituciones financieras con las cuales están obligadas a cubrir pagos mensuales un diferimiento de las obligaciones de pago hasta por tres meses cuando pierdan su fuente de ingresos.

II. POLÍTICA ECONÓMICA

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO

Impulsar el acceso a ingresos extra por trabajos digitales desde casa y apoyo a emprendedores

Planteamiento del Problema

En la actualidad, conforme las sociedades avanzan hacia la “Era Digital” y a las “Sociedades de la Información y del Conocimiento” las formas de interrelacionarse entre los seres humanos experimentan importantes cambios. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) transforman las maneras tradicionales de producir, de consumir, de vender, de educar, de acceder al conocimiento, de financiamiento, de informar, sólo por mencionar algunas, convirtiéndose estas nuevas herramientas en elementos democratizadores.

Sin embargo, existen barreras económicas, sociales y culturales que impiden aprovechar su potencial, por ejemplo, la falta de acceso a internet, la falta de un dispositivo o computadora y la carencia de conocimientos, competencias y habilidades digitales tecnológicas para aprovechar estos nuevos instrumentos.

Si bien estas limitaciones están vinculadas a brechas sociales que tienen grupos específicos de la sociedad, este problema se vuelve complejo cuando se asocia a temas relacionados con la educación y la carencia total de competencias y habilidades para el uso de estas nuevas tecnologías, lo cual contribuye a la profundización de la brecha digital.

De acuerdo con la investigadora Susana García Ávila, *la reducción de la brecha consiste en fomentar la capacidad de la ciudadanía para utilizar de manera crítica la información a la que se puede acceder de forma libre*”. Al no saber utilizar la información para el desarrollo y beneficio personal, más allá de contar con un dispositivo y acceso a internet, el usuario queda limitado al esparcimiento y al entretenimiento y desaprovecha el potencial que estas herramientas tienen para generar autoempleo, aumentar sus conocimientos y capacidades, así como aumentar su productividad laboral. Una persona se considera analfabeta digital cuando tiene un acceso limitado y/o un desarrollo bajo o nulo de las habilidades que le permitan interactuar en la red comunicativa que proporciona el uso de las TIC.

En este sentido, la alfabetización digital es aquella que promueve el desarrollo de habilidades necesarias para ser usuario de la información digital, dentro de las cuales se incluyen que: a) las personas adquieran y desarrollen aptitudes transferibles y utilizables a lo largo de toda la vida para la resolución de problemas; b) en el ámbito educativo se requiere una evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basada en los recursos y en la solución de problemas en contexto; y c) en el ámbito socio-laboral, el dominio del análisis, gestión, recuperación y evaluación de la información electrónica; y en el ámbito económico, actividades de servicio apoyadas en las tecnologías para un rápido desarrollo de cómo mejorar la infraestructura de

acceso a los servicios multiplataforma y garantizar la ciberseguridad de la información y las comunicaciones.

En términos generales, este tipo de alfabetización incluye tener conocimiento de diversas fuentes de información digitales, criterios éticos para emplear la información, hacer uso y tenencia de dispositivos, entre otros elementos.

Las ventajas de estar alfabetizado digitalmente hablando están vinculadas directamente con un mejor desarrollo académico, profesional, económico y social.

Lamentablemente, las brechas sociales y digitales nos impiden acceder a la población a este tipo de educación lo cual impacta directamente en la productividad y en las posibilidades de acceder al mercado laboral con un mejor ingreso.

Por otro lado, las medidas de distanciamiento y aislamiento social por causa de la pandemia han puesto en evidencia la complejidad y las limitaciones que tienen muchas personas para poder desarrollar el trabajo desde su hogar. En este sentido, se vuelve fundamental implementar una política nacional de alfabetización digital que garantice la formación de habilidades y competencias digitales para aumentar la productividad laboral, poder desarrollar algún tipo de trabajo a distancia, manejar de manera adecuada los programas y herramientas computacionales y contar con incentivos y apoyos que conviertan al trabajo a distancia en un elemento que detone el aumento de la productividad, el autoempleo y la obtención de ingresos adicionales para las personas.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar la formación de competencias y habilidades digitales en los niveles de educación media superior y superior.
- Promover que la Secretaría de Educación de Quintana Roo en coordinación con las secretarías locales diseñen e instrumenten planes para extender la alfabetización digital y formación de competencias y habilidades digitales en la población.
- Promover que las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología elaboren un programa nacional de estímulos para las personas que se capaciten en competencias y habilidades digitales.
- Promover la creación de una instancia en la Secretaría de Economía que explore los sectores económicos, en el sector público y privado, donde se pueda desarrollar trabajo a distancia que requiera habilidades digitales y generar un portal de oferta de empleo.
- Promover la creación de una incubadora de negocios digitales.

Dotar de una Canasta Básica Digital a los Hogares que no Puedan Adquirirla

Planteamiento del Problema

El internet es quizá el invento que más ha revolucionado la convivencia humana y que más ha transformado nuestras vidas en los últimos años, pues éste ha cambiado el comercio, la educación, el gobierno, la salud e incluso la forma de relacionarnos con los demás, al grado de haberse convertido en uno de los principales instrumentos de cambio y movilidad social en la actualidad.

El internet brinda oportunidades a las personas para mejorar sus habilidades y capacidades para la educación y la productividad en el entorno laboral, así como para estar en contacto con la comunidad, hoy ya de carácter global.

En 2018, Tim Berners Lee, uno de los padres de internet, escribió que ese año marcaba un parteaguas en la historia, pues se llegaba a un momento en que más de la mitad de la población mundial tendría conectividad, sin embargo, mostraba también una auténtica preocupación por cómo haríamos para que la otra mitad de la humanidad pudiera acceder a la red, pues definitivamente el acceso o no a la misma es un factor que genera una gran desigualdad entre las personas y profundiza las diferencias ya existentes.

Tan importante se ha vuelto el internet para nuestra vida cotidiana que en 2016 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el acceso a éste es un derecho humano, como lo son también el acceso al agua potable, a la electricidad, a la vivienda y a los alimentos.

Nuestra propia Constitución dispone, desde 2013, que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

No obstante, una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Para nadie es un secreto que, por factores de diversa índole, el acceso al internet como derecho básico sigue siendo denegado a millones de personas en nuestro país, ya sea porque no pueden pagar por él o porque los lugares en donde viven no cuentan con la infraestructura necesaria para disfrutar de una conexión a la red, o bien, porque no tienen acceso a una computadora o cualquier otro aparato que permita navegar a través de la red.

En este sentido, resulta evidente la necesidad de impulsar políticas públicas y esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de los grupos más desfavorecidos.

Hoy en día estar desconectado de la red significa ser excluido de oportunidades para aprender y ganarse el sustento diario, de acceder a servicios valiosos, de ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la educación y a la libre expresión, así como de participar en el debate público.

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado que aún nos falta mucho por hacer para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo sexto constitucional y un ejemplo claro de ello es la forma en que la carencia de internet ha afectado el derecho de millones de estudiantes a continuar con su formación educativa en mejores condiciones.

Como ya se dijo, internet nos ofrece posibilidades infinitas para no detenernos a pesar del coronavirus y tratar en la medida de lo posible de continuar con nuestras actividades, pero, tristemente, eso sólo aplica para quienes cuentan con una suscripción privada o para quienes, por su circunstancia geográfica, pueden beneficiarse de una conexión pública y gratuita.

Recientemente, la ONU adoptó el umbral de asequibilidad propuesto por la Alianza por un Internet Asequible de 1 Gigabyte de banda ancha móvil por menos del 2% del ingreso promedio mensual de un hogar, no obstante, para muchas familias pagar una conexión a internet representa mucho

más que ese porcentaje y supone un gasto que no pueden asumir porque implicaría desatender otras necesidades como el transporte, la vivienda o la alimentación. Esta es una realidad injusta que debemos transformar.

Si bien es cierto que en México la digitalización ha tenido un importante crecimiento en las últimas décadas, también lo es que este fenómeno no ha alcanzado todavía a una parte significativa de la población y menos de la mitad de los hogares del país cuenta con una computadora. De igual manera, existe una importante diferencia entre la población que habita en zonas rurales, ya que el porcentaje de personas que son usuarios de internet está por debajo de la mitad, en contraposición a los tres cuartos registrados entre la población que habita en zonas urbanas.

Se debe considerar también que la disponibilidad de una computadora para los estudiantes es limitada y ha disminuido en los últimos años. Adicionalmente, la población en edad para acceder a la educación básica representa el segundo grupo de edad con menor proporción de usuarios de internet, únicamente superado por las personas mayores de 55 años.

Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión.

Con relación al porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al teletrabajo, la CEPAL precisó que está positivamente vinculado al nivel del Producto Interno Bruto per cápita y a menores grados de informalidad.

En el Partido Verde Proponemos:

- Universalizar el acceso a las tecnologías digitales, promoviendo la inclusión de las personas que por motivos económicos no pueden acceder a ellas y por tanto ven condicionado el ejercicio pleno de los derechos fundamentales que consagra el orden constitucional.
- Promover las medidas necesarias para dotar de una canasta básica digital (al menos una computadora, una tableta o un teléfono inteligente más una conexión a internet que garantice el acceso habitual al mismo) a los hogares que no puedan adquirirla.

Reactivación Económica

Digitalización para el Impulso de los Micro y Pequeños Negocios, incluyendo los del Sector Turístico

Planteamiento del Problema

La crisis del COVID-19 ha generado cambios en nuestro modo de vida que han provocado grandes efectos en la economía global. De un día a otro nos vimos en la necesidad de cambiar nuestros esquemas de trabajo; cambiar la forma en la que estudiamos y enseñamos, la forma en la que nos relacionamos con las autoridades y nos desenvolvemos en el ámbito público.

Esto tendrá un impacto a largo plazo y probablemente nunca regresemos del todo a la normalidad que conocíamos, por lo tanto, la digitalización de los negocios es una medida inmediata que se debe tomar para su subsistencia.

Las transacciones digitales se han disparado a raíz de la pandemia y se estima cierren el 2020 con un crecimiento de 60%. Para que esta transición funcione se requiere de infraestructura y de las habilidades necesarias para adoptarla. Encuestas recientes muestran que las empresas con plataformas digitales consolidadas obtuvieron ingresos 1.8 veces mayores a empresas con poco desarrollo digital en los primeros dos meses de la pandemia. Mientras que los pronósticos para Latinoamérica muestran que la contracción económica en el 2020 será de 5.3% del producto interno bruto y la del mundo será de 5.8%, para México se espera una contracción entre 6 y 12%.

Uno de los sectores que ha resultado más afectado por esta crisis ha sido el sector turístico. A pesar de que México fue de los pocos países que no cerró sus fronteras aéreas ante la crisis, las operaciones internacionales llegaron a caídas de más del 95%. Hasta septiembre de 2020, la pandemia impidió que 10,668 millones de dólares entrasen a las empresas turísticas del país, lo que representa una caída del 57.3% respecto al mismo periodo del año anterior. El turismo fue una de las actividades que más rápido resintió el impacto de la pandemia y será uno de los sectores que más tarde se recupere. Aún con este gran impacto, las conexiones aéreas en el país se han afianzado entre las más avanzadas en esta lenta recuperación.

En muchos países se han lanzado iniciativas para facilitar la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre ellas están la mejora de sus sitios web, la creación de nuevos puntos de venta en línea, programas de capacitación, convenciones virtuales, entre otras.

En este sentido, los micro y pequeños negocios requieren desarrollar habilidades y competencias clave para el éxito de cualquier proyecto hasta lograr la plena digitalización, como medio para acceder a más clientes, competir, difundir su oferta de productos y servicios y concretar las compras de los mismos.

La digitalización es particularmente importante para que la oferta de micro y pequeñas empresas turísticas en destinos geográficamente alejados, donde se puede desarrollar el turismo rural, cultural, ecológico y gastronómico, sea conocida. Hay un gran potencial para que los productos y servicios turísticos en comunidades poco visitadas sean ofertados digitalmente.

En el Partido Verde Proponemos:

- Proveer a las empresas de la infraestructura, de los mecanismos y de la normatividad necesaria para aprovechar las nuevas oportunidades derivadas de la innovación y las tecnologías de la información y que se puedan aplicar a todas las industrias, especialmente a la industria turística.
- Organizar las distintas iniciativas de digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan los gobiernos, cámaras industriales, sociedad civil y el sector privado para potenciarlas.
- Capacitar a los dueños y colaboradores de los pequeños negocios, especialmente aquellos de carácter familiar, en tecnologías digitales y acercarles las plataformas y herramientas más adecuadas para sus necesidades a fin de poder salir al mercado a través de nuevos mecanismos de comunicación con clientes y de la automatización de procesos.

Fondo de Fomento a las Incubadoras de Bienes y Servicios Verdes para Jóvenes Empresarios

Planteamiento del Problema

Nuestra Constitución Política reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la promoción para la creación de empleos y la organización social del trabajo. Además, las personas jóvenes tienen derecho a un desarrollo integral, que incluye el desarrollo humano, social, económico, político y cultural.

Sin embargo, de acuerdo con la Ficha Temática de Personas Jóvenes, publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en el año 2018, el principal problema que enfrentan las y los jóvenes mexicanos son las condiciones desfavorables para incorporarse al desarrollo del país, lo cual ocasiona que tengan dificultades para la inserción en el mercado laboral y una deficiente formación en cuanto respecta a habilidades que les permitan potenciar su desarrollo personal.

La situación de desempleo entre la población de 15 a 29 años ha propiciado que diversos gobiernos hayan empezado en los últimos años a priorizar a este segmento poblacional mediante la creación de opciones de emprendimiento; fue el caso del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), instituido en 2016, el cual concentró los programas dirigidos al emprendimiento en general y al juvenil en particular.

Actualmente existe una mayor integración de los servicios que ofrecen las incubadoras y las aceleradoras de empresas, así como también una mayor coordinación de los programas a los cuales pueden acceder los jóvenes emprendedores. Sin embargo, es necesario también apuntalar la participación de los jóvenes en proyectos de alto impacto, pues la cantidad de ellos que se registran en estos es todavía muy baja.

Lo anterior se debe a que los programas de emprendimiento juvenil no han sido suficientemente difundidos entre los jóvenes a fin de que sean más conocidos y consecuentemente mejor aprovechados. Igualmente, se deben aumentar los recursos dirigidos al apoyo financiero hacia los jóvenes, así como seguir promoviendo la participación del sector privado y social en el apoyo a los emprendedores.

Quintana Roo se ha quedado corto en la búsqueda de mecanismos que promuevan en mayor medida una cultura emprendedora entre los jóvenes, del mismo modo que sigue siendo necesario realizar acciones tendientes a reforzar la coordinación transversal de los apoyos al emprendimiento juvenil.

Es precisamente por esto que se considera necesario implementar o reimplementar programas de apoyo a jóvenes emprendedores, pero dándole ahora un matiz verde, para enfocarlos en proyectos que generen empresas ecológicas y sustentables para contribuir al cuidado de nuestro planeta.

En este sentido, Quintana Roo debe fomentar con mayor fuerza el emprendimiento juvenil, promover las inversiones en proyectos sostenibles y facilitar el acceso al crédito a proyectos de inversión en aquellos sectores que generen beneficios al medio ambiente y/o mejoren la capacidad de adaptación al cambio climático, con el propósito de apuntalarse como un referente en el ámbito de las empresas sustentables.

La creación de un fondo de fomento a las incubadoras de bienes y servicios verdes para jóvenes emprendedores coadyuvaría a aprovechar del bono demográfico con el que cuenta hoy nuestro país en favor del crecimiento económico, dando un mayor impulso a los planes y programas que permitan el desarrollo sostenible y logrando con ello la atención de los problemas medioambientales, al tiempo de impulsar la creación de empleos para las y los jóvenes, el incremento de sus ingresos promedio y el mejoramiento de sus condiciones de vida en general.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar una política de acceso de jóvenes emprendedores a recursos públicos hasta en un 50% de la inversión inicial de un proyecto para financiar iniciativas y proyectos de bienes y servicios verdes, previa evaluación de la factibilidad de los planes de negocios.
- Crear políticas públicas destinadas a otorgar incentivos fiscales para las empresas y fondos privados que inviertan capital complementario en proyectos de bienes y servicios verdes para jóvenes emprendedores.
- Promover la agilización de trámites y gestión de permisos y autorizaciones de las distintas autoridades para el desarrollo de proyectos de bienes y servicios verdes por parte de jóvenes emprendedores.

Créditos a la Palabra para Mujeres Emprendedoras

Planteamiento del Problema

Uno de los principales retos de nuestro país para generar desarrollo y lograr la igualdad sustantiva es revertir la baja tasa de participación de las mujeres en la vida económica.

A pesar de que existe un empoderamiento innegable de las mujeres en los últimos años, todavía hay un largo camino por recorrer, ya que uno de los principios de la equidad de género es que las mujeres tengan control sobre sus recursos económicos para ser independientes y empoderarse, lo cual aún no es una realidad para todas las mujeres mexicanas.

Antes de la crisis generada por el COVID-19 existían pocos apoyos económicos gubernamentales enfocados a mujeres emprendedoras. Tras la pandemia, el gobierno federal, algunas entidades federativas como la Ciudad de México y algunas alcaldías incorporaron componentes de género a sus programas de apoyo económico para empresarios y negocios, dando un mayor número de créditos a mujeres.

Desde abril de 2020, el Gobierno Federal lanzó el programa Crédito a la Palabra, como respuesta ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Este apoyo fue dirigido a las pequeñas empresas, en su mayoría familiares, de los sectores comercio, servicios y producción, para que sus negocios pudieran mantenerse durante los meses de pandemia. El crédito consistió en \$25,000 pesos que se pagarán en

3 años, con una tasa de interés del 6.5% anual, para negocios con más de 6 meses de operación y que no pertenecen al sector agropecuario.

Para recibir el apoyo de los créditos a la palabra se tenía que estar registrado en el Censo del Bienestar, lo que significaba haber sido visitado personal de la Secretaría de Bienestar y haber manifestado interés por obtener un apoyo para fortalecer o consolidar su negocio o actividad productiva.

De igual forma, se brindó apoyo a empresarios mediante los Créditos Solidarios a la Palabra, con la condición de mantener a sus trabajadores con seguridad social, y a micro negocios locales a través de las Tandas para el Bienestar.

Entidades federativas como Quintana Roo, Baja California Sur, Puebla, Michoacán o Oaxaca tienen sus propios programas de créditos a la palabra para mujeres emprendedoras.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover la generación de más créditos a la palabra para mujeres emprendedoras en todas las entidades federativas, municipios y alcaldías.
- Establecer que tanto el gobierno federal como los estatales y municipales contemplen en sus presupuestos recursos para apoyar económicamente a mujeres emprendedoras mediante créditos a la palabra.
- Propiciar la construcción de redes de apoyo entre mujeres emprendedoras con el propósito de que más mujeres se vean beneficiadas con recursos económicos, mentorías y capacitaciones.
- Contribuir al desarrollo y crecimiento de comunidades de mujeres emprendedoras y sus familias generando círculos virtuosos que trasciendan generaciones en las que mujeres de una generación enseñen a otra generación y así sucesivamente.

Acceso a Créditos para Infraestructura Verde en Municipios

Planteamiento del Problema

Quintana Roo es sumamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático tanto por sus características geográficas como por las condiciones sociales desfavorables en las que viven muchos sectores de la población. Resulta necesario resaltar las pérdidas humanas y los altos costos económicos y sociales derivados de ello.

Los daños provocados por estos fenómenos son desproporcionalmente mayores en aquellas regiones y municipios cuyas condiciones sociales desfavorables agravan las consecuencias de estos desastres, resultando en elevados niveles de vulnerabilidad para esas poblaciones.

La vulnerabilidad ante el cambio climático ha sido definida por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático como el grado en el que los sistemas pueden verse afectados adversamente por el cambio climático, dependiendo si estos son capaces o incapaces de afrontar los impactos negativos del mismo. En este sentido, la vulnerabilidad también depende de la capacidad de la sociedad de anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse de un determinado impacto.

Ante una actualidad donde las condiciones climáticas son cambiantes y donde las posibilidades de riesgo están en aumento, la respuesta deberá ser la implementación de políticas públicas orientadas al combate del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad frente a éste, a través de estrategias como el aumento de las capacidades de adaptación y la resiliencia.

El combate del cambio climático depende especialmente de las acciones que tomen los gobiernos locales y regionales en torno a este problema. Es necesario considerar que más de la mitad de la población actualmente vive en áreas urbanas y se espera que esta proporción mantenga una tendencia creciente durante los siguientes 30 años.

Los esfuerzos dirigidos por los gobiernos locales que busquen abatir las causas del cambio climático pueden tener efectos inmediatos, directos y significativos al estar focalizados a zonas con una densidad poblacional alta. Esto es especialmente importante para los países como México, pues se espera que las economías emergentes tengan elevados niveles de urbanización en los próximos años.

A medida que las ciudades crecen, deben satisfacer las demandas de sus nuevos habitantes y enfrentar problemas emergentes como lo son las necesidades de movilidad y vivienda, contaminación ambiental y acceso a la energía. Sin embargo, esto representa una enorme oportunidad para que los gobernantes aborden los nuevos retos desde una perspectiva ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

La planificación e inversión en infraestructura tendrá efectos de largo plazo y serán detonantes de crecimiento y desarrollo urbano para el futuro de las ciudades. La estrategia de combate del cambio climático deberá estar diseñada alrededor de cada ciudad en particular, de manera que se tomen en cuenta factores demográficos, geográficos y características regionales.

En este contexto, las ciudades deben contar con acceso a financiamiento y recursos suficientes para enfrentar los retos señalados, de manera que los gobiernos locales también sean capaces de realizar inversiones orientadas a proyectos productivos con enfoque ecológico. Desafortunadamente, la capacidad de llevar a cabo este tipo de inversiones normalmente se ve impedida al requerir reasignaciones presupuestales importantes y por la limitada capacidad de aumentar los ingresos. Pese a estas limitaciones, los gobiernos locales pueden aprovechar mecanismos de acceso al financiamiento ya establecidos, además de usar modelos nuevos e innovadores de inversión adaptados a sus necesidades.

Actualmente, cualquier entidad con una calificación crediticia puede emitir a través de la Bolsa Mexicana de Valores un bono sustentable; estas entidades incluyen la banca de desarrollo, banca comercial, corporativos, gobiernos locales y gobierno federal (bono sustentable soberano).

El objetivo de la emisión de los bonos sustentables es obtener recursos cuyo destino sea específica y exclusivamente el financiamiento o refinanciamiento de proyectos sustentables detallados en la emisión de los valores.

Los proyectos de inversión deben generar forzosamente beneficios ambientales claros y definidos, ya sea para la reducción de emisiones o para el aumento de la resiliencia frente al cambio climático.

Los proyectos referidos pueden pertenecer a cualquiera de los siguientes rubros: Energía renovable; Eficiencia energética; Construcción sustentable; Transporte limpio; Manejo eficiente del agua, potabilización e infraestructura hídrica; Manejo de residuos; Desarrollo de agricultura verde y orgánica, biomasa y biocombustibles.

La contratación de deuda por parte de estados y municipios está prevista en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual, en concordancia con lo dispuesto por nuestra Constitución, contiene una restricción de contraer cualquier tipo de empréstito con gobiernos extranjeros o personas morales extranjeras.

Así mismo, los estados y municipios están impedidos para adquirir cualquier tipo de deuda que no sea destinada a inversión pública productiva.

Además, los estados y municipios deben establecer un proceso competitivo para la contratación de créditos con cualquier institución financiera. Pese a ello, hay supuestos de excepción del proceso competitivo establecidos en la ley.

Ahora bien, de manera general, los financiamientos y créditos otorgados por ciertos organismos financieros internacionales están acompañados por diversos beneficios, al contrario de aquellos que dan los organismos nacionales e inclusive la propia banca de desarrollo. El financiamiento internacional ofrece condiciones sumamente benéficas, ya sea porque son tasa cero o porque van acompañados por procesos de asistencia técnica.

En México operan dos fondos de inversión en el clima, aprobados por el Banco Mundial en 2008 y diseñados para trabajar a través de bancos de desarrollo multilaterales. Hay 14 proyectos con una inversión superior a los \$580 millones de dólares y financiados por el Fondo de Tecnologías Limpias y el Fondo Estratégico para el Clima.

La problemática estriba en la aplicación, ya que los organismos financieros internacionales están obligados a participar en el proceso competitivo y a dar líneas de crédito a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y otras instituciones de banca de desarrollo, las cuales, a su vez, adquieren para la entidad federativa la línea de crédito, misma que recibe los recursos y los aplica a su tesorería en tanto que en un momento posterior otorga la línea al ente público subnacional.

Lo anterior representa una desventaja para los estados y municipios de acceder de manera más ágil a financiamientos con valor agregado, ya sea por el monto de interés o por las características del crédito. En este sentido, es evidente la necesidad de remover los obstáculos que actualmente entorpecen el acceso de los estados y municipios a créditos en condiciones favorables para ser destinados a la inversión en infraestructura verde sustentable.

En el Partido Verde Proponemos:

- Remover los obstáculos que actualmente entorpecen el acceso de los estados y municipios a créditos en condiciones favorables para ser destinados a la inversión en infraestructura verde sustentable y para aumentar la resiliencia frente al cambio climático de las comunidades como: energía renovable; eficiencia energética; construcción sustentable; transporte limpio; manejo eficiente del agua, potabilización e infraestructura hídrica;

manejo de residuos; desarrollo de agricultura verde y orgánica, biomasa y biocombustibles.

CAMPO

Fomento de la Producción para el Autoconsumo

Planteamiento del Problema

La producción agrícola a nivel mundial proporciona empleo a familias que viven en las zonas rurales, sin embargo, muchas de ellas viven en la pobreza, enfrentan inseguridad alimentaria y tienen un acceso reducido a los mercados.

Uno de los problemas más difíciles que enfrenta la humanidad es la escasez de alimentos y las dietas deficientes en nutrientes. Si bien la producción de alimentos se ha ido incrementando, también lo ha hecho el número de personas con hambre, debido al rápido crecimiento de la población y la carencia de una distribución efectiva de alimentos; a lo cual se suma el hecho de que la cadena alimentaria es más vulnerable a la contaminación ambiental y a los fenómenos climáticos.

La inseguridad alimentaria, es provocada por diversos factores, como la falta de disponibilidad de alimentos, la carencia de poder adquisitivo, la mala distribución de los alimentos, el uso inadecuado de los mismos, la falta de acceso a recursos productivos, largos periodos de pobreza, cambio climático, enfermedades, sequías, variaciones en los precios y la producción, entre muchas otras.

Hoy, con la pandemia provocada por el COVID-19, estamos viviendo una crisis mayor en la suficiencia alimentaria a nivel mundial, principalmente por las restricciones en los movimientos transfronterizos, lo cual afecta las cadenas de suministro de alimentos.

Por otra parte, la degradación de los terrenos es una amenaza constante para la población que habita las zonas rurales, se considera que las sinergias entre la degradación de los ecosistemas y el cambio climático pueden afectar negativamente la seguridad alimentaria de la población mundial, la cual, además, se encuentra en continuo crecimiento.

Debemos reconocer que la agricultura a gran escala produce impactos significativos en el medio ambiente. Ésta ha sido identificada como una de las principales fuentes de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas, asimismo, contribuye en la emisión de gases de efecto invernadero como metano y óxido nitroso y genera en gran medida otros tipos de contaminación tanto en el aire como en el agua.

Los productos utilizados en las prácticas agrícolas son fuente de deterioro ambiental; los fertilizantes generan contaminación de suelos y agua, cuando son utilizados en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos o cuando se eliminan por acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos de nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y animales acuáticos.

Los plaguicidas, por su parte, contaminan agua, suelos y aire, alteran la inocuidad de los alimentos e incrementan los riesgos para la salud humana. Desafortunadamente, en nuestro país los plaguicidas de alta peligrosidad que han sido prohibidos en diversos países por el riesgo que implican para la población son permitidos, representando un grave problema de salud pública que puede ocasionar daño neurológico y renal, cáncer y malformaciones en fetos.

Esta problemática nos llama con urgencia a generar estrategias que permitan el desarrollo de acciones específicas para evitar mayores daños a los ecosistemas y elementos naturales provocados por las malas prácticas en la agricultura a gran escala.

Hoy en día debemos enfrentar una de las crisis de mayor impacto social ocasionada por la pandemia de COVID-19, lo cual nos llama a establecer estrategias que permitan alcanzar la autosuficiencia alimentaria a través de acciones encaminadas a impulsar la producción de alimentos para el autoconsumo.

En este sentido, es importante recordar que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra el de "Hambre cero", el cual prevé llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial para lograr alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2,000 millones de personas más que vivirán en el mundo en el año 2050. Este objetivo busca lograr que nadie se encuentre en situación de hambre para el año 2030, lo cual nos da un plazo de 10 años para trabajar en acciones que nos permitan como país alcanzar esta meta.

Por lo anterior es necesario promover que la producción de alimentos sea sostenible para aliviar los efectos ocasionados por malas prácticas agrícolas y, a su vez, abatir los rezagos relativos a las deficiencias en la alimentación de los mexicanos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Crear estrategias que permitan incentivar la autoproducción de productos alimentarios a fin de aumentar la disponibilidad de alimentos y mejorar el valor nutritivo de la dieta y la economía familiar.
- Garantizar el acceso universal a la alimentación, teniendo como objetivo mínimo las necesidades nutrimentales de las niñas y niños menores de 12 años y de adultos mayores.
- Implementar políticas públicas que permitan el desarrollo de viviendas sustentables, con requerimiento mínimo de zonas específicas para la siembra de semillas que permita la obtención de alimentos.
- Incentivar el aprovechamiento de traspatios que permitan el cultivo de todo tipo de vegetales y semillas de forma continua para su autoconsumo o para el desarrollo de proyectos productivos de comunidades marginadas.
- Otorgar estímulos y subsidios a productos Orgánicos y Agroecológicos.

Fomento a la Ganadería de Bajas Emisiones de Metano

Planteamiento del Problema

A nivel mundial se reconoce la importancia que está teniendo la ganadería en el fenómeno del cambio climático, principalmente por su contribución en las emisiones de metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), potentes gases que dan origen al efecto invernadero. El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante porque causa afectaciones a la salud de las personas. En comparación con el dióxido de carbono, tiene entre 25 y 28 veces el potencial de calentamiento global.

Una de las principales fuentes de emisión de metano en la agricultura y la ganadería se genera principalmente por la producción de alimentos, la digestión entérica de los rumiantes, los desechos de animales y el cambio en el uso de la tierra.

Con base en el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, publicado en 2018, en México la actividad ganadera de carne y leche es responsable del 10.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hay que mencionar, además, que nuestro país está comprometido con la comunidad internacional en la lucha frente al cambio climático. Este 2020 inició una nueva etapa para México y el mundo en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas, pues es el periodo donde deben empezar a implementarse las acciones comprometidas en el Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático, por lo cual, debemos reducir emisiones y tomar medidas para disminuir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura, dando oportunidades para la continuidad del desarrollo económico y la creación de empleos en el país, sin poner en riesgo al entorno.

El Artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático establece que: *"El país se compromete a reducir de manera no condicionada un veintidós por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y un cincuenta y uno por ciento sus emisiones de carbono negro al año 2030 con respecto a la línea base. Este compromiso, asumido como Contribución determinada a nivel nacional, implica alcanzar un máximo de las emisiones nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico, la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto se reducirá en alrededor de cuarenta por ciento entre 2013 y 2030. La reducción del veintidós por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se conseguirá a través del compromiso de los diferentes sectores participantes, de acuerdo con las metas siguientes: transporte -18 por ciento; generación eléctrica -31 por ciento; residencial y comercial -18 por ciento; petróleo y gas -14 por ciento; industria -5 por ciento; agricultura y ganadería -8 por ciento y residuos -28 por ciento".*

Por lo anterior, es transcendental sumar esfuerzos y realizar acciones que logren el avance hacia una ganadería baja en emisiones de metano, como una opción para incrementar la eficiencia productiva, hacer posibles los sistemas ganaderos sostenibles y afines con la protección al medio ambiente, implementando estrategias que incorporen los progresos de la ciencia y el conocimiento local de los productores, con la finalidad de reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero generados por la actividad ganadera.

En el Partido Verde Proponemos:

- Fomentar mejores prácticas y tecnologías para una ganadería de bajas emisiones de metano relacionada con la mejora de alimentación, sanidad animal y el manejo del hato.
- Implementar esquemas de aprovechamiento relacionados con el manejo de desechos derivados de las actividades pecuarias.
- Aumentar el establecimiento de esquemas de producción agropecuaria con mayor potencial de mitigación y que brinden beneficios ambientales y sociales.

Fomento a la Crianza de Especies para el Autoconsumo**Planteamiento del Problema**

La mayoría de las personas de bajos recursos vive en áreas rurales y dependen de la agricultura y ganadería para su subsistencia. Desafortunadamente, México tiene una alta dependencia alimentaria del exterior, al importar la mitad de los alimentos que consumimos y los insumos que requiere la actividad agrícola y pecuaria.

En este sentido, es necesario trabajar para proveer de herramientas a los pequeños productores a fin de que consoliden y mantengan la producción de alimentos que permitan una sana nutrición para todos los mexicanos.

La ganadería cumple varias funciones para las comunidades rurales: genera ingresos económicos, significa ahorro para las familias, contribuye con los contenidos proteicos a la dieta familiar, representa la única fuente de tracción para muchas unidades y resuelve problemas de falta de disponibilidad de dinero en casos de enfermedades o urgencias.

El sector agropecuario posee un potencial enorme para contribuir a la producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, la producción agrícola y ganadera está cada vez más influenciada por factores climáticos y por el comportamiento de la demanda internacional de alimentos, energía y biocombustibles.

Desafortunadamente, el manejo tradicional de la ganadería extensiva hace que la productividad de los pastizales se reduzca continuamente, utilizando áreas de bosques para contrarrestar el bajo rendimiento a través del establecimiento de nuevos pastizales. Los cambios de uso de suelo para la conversión a pastizales generan la pérdida de grandes superficies de bosques y la desaparición de diversas especies de flora y fauna silvestre.

En este sentido, uno de los principales retos enfrentados por nuestro país desde años atrás es la transformación de zonas de cultivo a zonas pecuarias, lo cual deteriora los suelos de superficie rural.

Si bien la ganadería es una actividad que permite la generación de riqueza, cuando ésta no se realiza bajo sistemas de producción sustentable y amigable con el medio ambiente se convierte en una amenaza para los ecosistemas, al no considerar los costos ambientales y los efectos de la marginalización de los pequeños productores.

La contaminación generada por la ganadería en las diferentes etapas de la cadena productiva incluye la contaminación por excretas, los residuos generados por el procesamiento de productos ganaderos, el deterioro ambiental por la producción de alimento de los animales que requieren fertilizantes y plaguicidas, la erosión provocada por el sobrepastoreo y la conversión del uso de suelo.

Se calcula que el incremento del consumo de carne a nivel mundial se duplicará en los próximos 20 años, lo cual generará presión entre la frontera agrícola y ganadera a zonas de mayor vulnerabilidad ambiental.

Este consumo podrá aumentar los niveles de deforestación, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la disminución del recurso hídrico si no se generan acciones decididas para asegurar el crecimiento del sector de forma sostenible que permita la mitigación del cambio climático y de la pobreza.

Asimismo, la ganadería industrial es la principal causa del maltrato animal, ejemplo de ello es la aplicación de hormonas para lograr una mayor producción en corto tiempo. Además, el confinamiento de los animales que se producen para consumo humano en espacios muy pequeños ocasiona graves enfermedades que no son atendidas. Los animales para la producción de carne sufren golpes, descargas eléctricas y degollamientos mientras están plenamente conscientes, las cuales son acciones que debemos erradicar.

México es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, lo cual nos obliga a realizar acciones que reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero, asimismo, recordemos que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra el de Hambre Cero, el cual se prevé llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario. Por ello debemos abordar estos dos temas en conjunto para lograr una mejor gestión de los sistemas ganaderos.

Es necesario generar estrategias que permitan que la productividad agrícola y la producción de alimentos sean sostenibles para aliviar los efectos ocasionados por malas prácticas agrícolas y las deficiencias en la alimentación de los mexicanos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Lograr que exista mayor inversión pública y privada destinada a la investigación y desarrollo tecnológico para la creación de políticas agropecuarias y ambientales que permitan el pago por servicios ambientales a ganaderos que implementen sistemas productivos ambientalmente viables.
- Crear un plan nacional y planes locales de eficiencia en el uso de los recursos de la producción pecuaria para reducir las externalidades ambientales negativas generadas por el sector, estableciendo la promoción de prácticas con sistemas agrícolas, ganaderos y forestales integrales.
- Incentivar el aprovechamiento de traspatios que permitan el manejo de animales para su autoconsumo o para el desarrollo de proyectos productivos en comunidades marginadas.
- Establecer programas para la incorporación de sistemas silvopastoriles intensivos que eviten la conversión de terrenos forestales a zonas ganaderas, utilizándolos como alimento para el ganado y refugio de otro tipo de especies como aves, evitando la erosión del suelo, aumentando la producción y preservando los ecosistemas.

- Generar incentivos legales que fomenten la práctica de la ganadería familiar que permita el ingreso total de la unidad familiar campesina para el fortalecimiento del desarrollo regional, contribuyendo de este modo a garantizar la obtención de productos como huevo, carne, leche y elaboración de derivados para el autoconsumo de la familia o el intercambio comunitario.

Otorgar Contratos y Pagos Anticipados a Quien Produzca Maíz Criollo Nativo de México

Planteamiento del Problema

Nuestro país, por su ubicación geográfica y por sus características climatológicas, posee una gran variedad de especies de plantas que lo sitúan a nivel internacional como uno de los países megadiversos, toda vez que contamos con más de 20 mil especies de plantas.

El contar con un espectro tan amplio en la variedad de plantas hace fundamental el establecimiento de acciones específicas para garantizar su preservación y conservación, toda vez que forman parte importante del medio ambiente, de los ecosistemas y de los recursos naturales con los que contamos, por lo que se deben implementar medidas efectivas para conseguir este objetivo y cumplir con lo establecido tanto en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México como en nuestra legislación.

Una de las plantas que por sus características y variedades requiere de acciones específicas para conservar sus elementos originales es el maíz, ya que la introducción de maíz genéticamente modificado en México desde hace varios años ha puesto en riesgo la subsistencia de las variantes criollas que existen en nuestro territorio desde hace siglos. El cultivo de plantas genéticamente modificadas ha traído la promesa al campo mexicano y a sus campesinos de disminuir los costos e incrementar la producción, lo que económicamente es rentable, sin embargo, vulnera a las variedades nativas de nuestro país al desincentivar su cultivo y conservarlas sin alteración alguna, poniendo en riesgo su existencia.

La introducción de semillas de maíz genéticamente modificadas ha encendido los focos de alerta en diferentes sectores de la sociedad, los cuales han luchado para regular y limitar su utilización para poder resguardar la variedad de razas de maíz que existen en México.

A pesar de que la lucha ha sido larga recientemente se ha conseguido concretar acciones específicas para preservar las razas nativas de maíz. Un ejemplo claro de estos logros es la publicación el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, cuyo objetivo fundamental es reconocer el valor del maíz nativo y en diversificación constante, en relación a su producción, comercialización y consumo como patrimonio alimentario y cultural de nuestro país, por lo que establece una serie de mecanismos institucionales para preservarlo, resguardarlo y reproducirlo.

Sin embargo, a pesar de estos logros, es importante que se implementen acciones concretas con la finalidad de garantizar que las distintas razas de maíz con el que cuenta nuestro país sigan siendo cultivadas y se extienda esta práctica para conservar su existencia, preservando nuestra riqueza biológica y cultural. No basta con tener mecanismos y organismos que busquen su resguardo y protección, es fundamental poder incentivar a los campesinos para que retomen el

cultivo de las razas de maíz originarias de nuestro territorio, dotándolos de recursos económicos para esta tarea y para que sea una fuente de ingreso sólida que contribuya con el sustento de las familias mexicanas que trabajan en el campo.

Es por lo anterior que es necesario diseñar e implementar acciones para que el cultivo de las razas de maíz nativo con el que contamos, siga siendo atractivo para los campesinos al significar un medio para la obtención de ingresos económicos y la obtención de producto en algunos casos de autoconsumo. Es así que consideramos esencial se otorguen contratos y pagos anticipados a las personas que produzcan las diversas razas de maíz nativo.

Con esta medida se garantizará que este alimento esencial de la dieta y la cultura de las y los mexicanos sea preservado, con las características originales y sin ninguna alteración por la utilización de otro tipo de cultivos que pongan en riesgo sus elementos originales.

En el Partido Verde Proponemos:

- Dar contratos y pagos anticipados a quien produzca Maíz Criollo nativo de México.

III. POLÍTICA INTERIOR

SEGURIDAD

Castigar a Quien Lesione de Manera Permanente a una Mujer

Planteamiento del Problema

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La discriminación y la violencia contra las mujeres son las formas más dramáticas de la desigualdad, un problema enquistado en todas las sociedades del mundo que lacera de manera especial a las mujeres mexicanas.

La evidencia disponible no miente. La violencia contra las mujeres se ha vuelto amplia y se ha generalizado durante los últimos años.

Lo hasta hoy establecido en la legislación penal existente no ha sido suficiente para atenuar el fenómeno de la violencia por razón de género y tampoco ha logrado inhibir la comisión de dichas conductas. Al contrario, pareciera que la redacción actual de las leyes, tanto en el ámbito federal como en la mayoría de los ordenamientos locales ha servido más para que la clasificación de violencia ejercida entre agresor y víctima limite la consideración de la violencia únicamente en los entornos familiares, pero no en todos los ámbitos en los cuales las mujeres se encuentran en vulnerabilidad.

Por motivos como el anterior fue necesario distinguir el feminicidio del homicidio contra una mujer, lo cual ha resultado de gran relevancia. En este mismo sentido, es importante distinguir también en el caso de las lesiones, aquellas de carácter doloso en términos generales de aquellas cometidas contra las mujeres en razón de su género, permitiendo con ello visibilizar la expresión extrema de la violencia que resulta de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que puede encontrarse una víctima.

Sabemos bien que la violencia de género tiene diversas manifestaciones, pero sin duda, una de las más perversas es aquella en la que los ataques se dirigen de manera intencional, con el fin de mutilar o lastimar el físico de una mujer y dejarle cicatrices permanentes, tanto físicas como psicológicas, pues existen lesiones que no buscan acabar con la vida de la víctima sino que quienes las perpetran pretenden mediante un acto cobarde pero certero dañarla y quitarle las ganas de seguir viviendo.

Estas alteraciones físicas responden a un tipo de violencia motivada por los estereotipos y prejuicios del papel subordinado que los agresores pretenden que las mujeres mantengan. Estos hechos afectan principalmente a mujeres jóvenes que ven destrozada no solo su apariencia física, sino su salud y su autoestima.

Consideramos que erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea prioritaria para nuestro país a través del establecimiento de mecanismos efectivos de protección.

En este contexto, el Partido Verde ha insistido en la necesidad de imponer penas de prisión al que infiera alteración en la salud o daño producido por causa externa que deje una huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, señalando como razones de género que la alteración o daño sea infamante o degradante, que existan datos a través de los cuales se establezca que se ha cometido cualquier tipo de violencia relacionada con el hecho delictuoso del sujeto activo en contra de la víctima o que la víctima haya sido incomunicada. Así mismo, propusimos establecer agravantes cuando de la alteración o daño resulte una enfermedad incurable, la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica o cuando esta alteración o daño ponga en peligro la vida de la víctima.

No se debe soslayar que en muchos de los casos de feminicidio existen antecedentes de violencia previa que no fueron atendidos debidamente por las autoridades, especialmente por las responsables de la procuración de justicia, las cuales suelen minimizar las denuncias de mujeres que valientemente se atreven a pedirla. El inicio de toda violencia extrema va escalando desde pequeñas acciones que van paulatinamente agravándose hasta tener consecuencias fatales o irreparables.

Por ello es importante que se atienda el concepto de lesiones en razón de género y contribuir a la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres a través de la visibilización de la problemática.

No obstante, estamos conscientes de que no basta introducir más tipos penales, no basta introducir nuevas penas, no basta introducir nuevas agravantes si no hacemos que las instituciones responsables de impartir y procurar justicia actúen de acuerdo con lo que hoy les demanda la sociedad mexicana.

En el Partido Verde Proponemos:

- Seguir impulsando el castigo a quienes cometen ataques en contra de las mujeres con el fin de lastimar su cuerpo, mutilarlo o dejarle cicatrices permanentes, tanto físicas como psicológicas.
- Vigilar que, una vez vigente la propuesta planteada, las autoridades responsables de la procuración de justicia apliquen correctamente la ley a fin de erradicar la impunidad imperante en los casos de lesiones de las cuales son víctimas las mujeres en razón de su género.

Promover una Vida sin Violencia

Planteamiento del Problema

Mucho se ha hablado a lo largo de los años de que la pobreza y la marginación son caldo de cultivo de la reproducción de conductas antisociales y la violencia, sin embargo, la pérdida de valores y la normalización de éstas son los elementos que contribuyen de forma más directa en su reproducción.

Las conductas violentas y antisociales se pueden observar en todos los ámbitos y sectores de la sociedad, tanto personas en situación de pobreza como en personas y familias con recursos

económicos medios y altos. La condición económica no es excluyente de sufrir o reproducir conductas violentas o antisociales que van desde agresiones verbales y emocionales hasta agresiones físicas y en algunos casos el homicidio.

Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que estas conductas pueden ser desarrolladas y reproducidas en diferentes ámbitos, públicos o privados, tales como la escuela, el trabajo, al interior de la familia y en las relaciones personales (amistad, noviazgo o relación de pareja), así como en la calle.

La normalización de las conductas violentas y antisociales contribuye a que las sociedades las reproduzcan de forma inercial sin darse cuenta de que hacen más complicada la convivencia entre las personas que ya de por sí es difícil por el contexto económico en el que vivimos, donde la falta de empleo, los bajos salarios o la inestabilidad en el trabajo, son elementos que provocan que las personas sean menos tolerantes y puedan reaccionar de forma agresiva.

En adición a lo anterior, es necesario tomar en cuenta que los medios de comunicación han contribuido en este proceso de normalización de la violencia, toda vez que con el ánimo de mantener informada a la población sobre los acontecimientos que ocurren día a día en el país hacen énfasis desmesurado en difundir noticias e imágenes ligadas a accidentes, peleas, homicidios, narcotráfico, etcétera. Sin embargo, la normalización de la violencia no es responsabilidad exclusiva de los medios de comunicación y hay que reconocer que se trata de un fenómeno ligado con la pérdida de valores en las familias que por falta de tiempo, recursos económicos o interés ya no se preocupan de que sus integrantes cuenten con una estructura formativa que los conduzca al respeto, la tolerancia y la paz.

A este contexto social violento en el que se desenvuelven las personas se suma el desarrollado al interior de las familias en donde es común que se presenten diferentes conductas violentas y antisociales que son permitidas y adoptadas como es la violencia en diferentes manifestaciones y grados entre la pareja, los hijos y demás integrantes del núcleo familiar. Este tipo de conductas no se quedan al interior de una familia, toda vez que al verse normalizadas sus integrantes pueden replicarlas en otros ámbitos, lo cual desencadena la reproducción social de las mismas, afectando directamente a las personas que son víctimas de estos actos o que no tienen la estructura de valores necesaria para evitarlas.

La manifestación más radical de la violencia es cuando las conductas antisociales derivan en delitos como lesiones, homicidio, feminicidio, delitos contra la libertad y la seguridad sexual, así como delitos contra la familia que dejan como consecuencia, además de las víctimas directas e indirectas, que el agresor sea sujeto de sanciones privativas de la libertad o, en su caso, de venganza por parte de los agredidos.

Es derivado de lo anterior que a lo largo de los últimos años se ha buscado implementar diversas acciones para atender el fenómeno de la violencia en nuestro país, las cuales comprenden reformas legislativas para sancionar con mayor severidad estas conductas, establecer mecanismos de protección para las víctimas, medidas para la formación de principios y valores en la familia y en la escuela, así como políticas públicas generales y focalizadas para intervenir de forma puntual en los diferentes sectores de la sociedad.

A pesar de estos esfuerzos, ante el incremento de conductas antisociales y violentas en nuestro país sigue siendo necesario fortalecer las acciones que contribuyan a que las familias y la sociedad en general vivan en paz y armonía con su entorno.

Si bien es necesario reconocer el trabajo que se ha generado en los últimos años para prevenir y erradicar la violencia en nuestro país, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para desterrar la violencia de nuestra sociedad de manera definitiva, motivo por el cual no podemos ser omisos en la búsqueda de alternativas efectivas para garantizar que las familias mexicanas se desarrollen de forma plena en un ambiente de respeto y tolerancia, donde las diferencias entre las personas enriquezcan la convivencia y no generen divisiones ni conflictos irreconciliables.

En el Partido Verde Proponemos:

- Fortalecer las políticas públicas en el ámbito federal, estatal y municipal en materia de cultura, educación y deporte como mecanismo de prevención social de la violencia y la delincuencia en niñas, niños, jóvenes y personas adultas garantizando su acceso inclusivo y sin discriminación.
- Diseñar e implementar estrategias de atención psicológica y psiquiátrica en el ámbito federal, estatal y municipal para personas con comportamiento violento o antisocial, así como a las víctimas directas e indirectas de estas conductas.
- Diseñar e implementar y, en su caso, fortalecer en el ámbito federal estatal y municipal los mecanismos para la identificación y atención de personas que presenten conductas violentas o antisociales, así como a aquellas personas víctimas de las mismas.

Modelo de Prevención de la Violencia desde la Comunidad

Planteamiento del Problema

Semana a semana los diarios y medios de comunicación nacional dan cuenta de hechos dramáticos de violencia en varias entidades del país. A partir de esto es importante reconocer que la violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y a la sociedad en general.

Así mismo, es importante reconocer los efectos que esto provoca, por ejemplo, la disolución de familias, la destrucción del tejido social y el incremento en la pobreza e inseguridad, lo cual vulnera los derechos humanos de las y los ciudadanos.

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye un indicador de salud pública de una sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físicos, amenazante o real, en contra de uno mismo, de otra persona o en contra de un grupo o comunidad, que resulte en heridas, muerte o daño psicológico, disfunciones o privaciones.

La violencia tiene causas complejas que ocurren a diferentes niveles conocidos en salud pública como determinantes sociales. El primer nivel identifica los factores biológicos y personales que influyen en el comportamiento de los individuos y que incrementan su probabilidad de llegar a ser

víctimas o perpetradores de actos de violencia. En el segundo nivel destacan las relaciones familiares o de amistad en las que puedan reunirse factores que propician la violencia. El tercer nivel está relacionado con el contexto de la comunidad y, finalmente, el cuarto está asociado a los factores sociales que contribuyen a crear un clima en el que se alientan las actitudes violentas.

El fenómeno de la violencia en nuestro país ha cobrado particular importancia por sus efectos en la salud de la población y su estrecha relación con la economía. La violencia puede afectar a la inversión extranjera por la pérdida de confianza en la nación, disminuir el número de turistas de otras nacionalidades, así como afectar la inversión interna de las empresas, porque de esa manera se aumentan los costos en seguridad, entre otros más. Lamentablemente, la violencia ha servido como marco para la reproducción de historias apologizadas sobre personajes admirados por un sector de la población por su carácter carismático y atracción de un concepto de "éxito" socialmente aceptado, sobre todo, en la población joven.

Desde esta perspectiva, resulta evidente la necesidad de generar políticas públicas efectivas para la erradicación de la violencia. En este contexto, el análisis de la violencia debe partir de la base de que se trata de un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible.

Un reto importante para el sistema de salud mexicano es asegurar que los servicios de salud estén disponibles para la atención de las víctimas de actos violentos. En general, la cifra de lesiones intencionales atendidas en unidades de salud supera a las notificadas a las autoridades. Cuando se presentan lesiones graves, los servicios hospitalarios de urgencias son el primer sitio a donde acuden las víctimas, en este sentido, la participación de las unidades hospitalarias en la atención oportuna y adecuada de pacientes lesionados deja claro el impacto de la violencia en los servicios de salud.

Lamentablemente, la violencia en México se ha vuelto un problema de "estilo de vida", que se ha interiorizado en nuestras vidas y la hemos normalizado, por lo que vivir con violencia parecería "normal", sin identificar el daño actual y futuro que a la sociedad completa provoca este fenómeno.

Para mejorar en seguridad y paz social es clave fortalecer las políticas de prevención de la violencia que apunten a resolver las verdaderas causas de la misma y a atender los factores de riesgo como la proliferación de armas de fuego y el tráfico y consumo de drogas.

Una política integral de seguridad debe combinar adecuadas dosis de control y represión del delito, mejoras en la eficacia de la aplicación de la ley y en los esfuerzos de rehabilitación y reinserción social con amplias políticas de prevención de violencia.

La participación y el liderazgo de los gobiernos locales son cruciales para el éxito de las políticas y programas de prevención de la violencia. Los municipios tienen una especial capacidad para conocer y dar solución a los problemas cotidianos de las comunidades, pues poseen una mayor capacidad para convocar a los actores institucionales que atienden en los espacios locales correspondientes y poseen competencias fundamentales para controlar factores de riesgo determinantes para la inseguridad, como el mejoramiento de los espacios públicos y la vigilancia de la venta y el consumo de alcohol, promoción de actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas especialmente a los jóvenes, construcción de centros de cuidado y desarrollo infantil para la formación de mejores ciudadanos, así como la creación de espacios para que las personas

puedan expresarse y recrearse sanamente. Lo anterior debe ser complementado con políticas de empleo que generen oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes en situación de riesgo, así como la participación de los vecinos en los grupos locales de seguridad comunitaria, centros de mediación y resolución pacífica de conflictos y otros programas y eventos que se impulsan y ejecutan desde el ámbito local y en conjunto con la comunidad.

En el Partido Verde Proponemos:

- Recuperación de espacios públicos.
- Programa de deporte, cultura y recreación en los polígonos con mayores índices de criminalidad.
- Programa de intercambio de armas de fuego por otros objetos de utilidad.
- Atención a familias víctimas de violencia.
- Inhibir la difusión de la narcocultura y otros patrones y estereotipos violentos.
- Adaptar los centros comunitarios de todos los niveles como espacios de convivencia familiar por las tardes, con programas recreativos para niños y adolescentes.
- Promover la denuncia anónima y protegida, entendida como aquella que salvaguarda a las familias y a la comunidad, no a los delincuentes.
- Reconocer la violencia como un problema de salud pública.

Fortalecer la Atención y Apoyo a Víctimas del Crimen Organizado

Planteamiento del Problema

La función del Estado a través de las instituciones es velar por la seguridad y protección de la ciudadanía, mediante estrategias y políticas públicas que contribuyan a la armonía, tranquilidad, estabilidad y paz en las diversas regiones del país, especialmente, en donde la población requiere de una mayor protección y contar con organismos que cuiden de los sectores más vulnerables.

En este sentido, en materia de seguridad se implementaron reformas constitucionales y legales en 2019, incorporando la figura de la Guardia Nacional para contar con cuerpos policiacos mejor entrenados y capacitados para el combate del crimen organizado y la delincuencia.

La inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado han generado diversas afectaciones a la niñez, a la juventud y a la sociedad en general. Por ello, la importancia de contar con herramientas para el cuidado y protección de las víctimas, mediante la atención adecuada por parte de las instituciones del Estado.

El crimen organizado se define como la connivencia de hecho de tres o más personas para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos delitos como: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, narcotráfico, entre otros.

Parte de las consecuencias y afectaciones que el crimen organizado le genera a las víctimas del delito son: pérdida o daño en los objetos de su pertenencia; lesiones físicas; daño emocional y,

en el peor de los escenarios, la muerte. Tratándose del crimen organizado las víctimas pueden ser menores de edad, jóvenes, mujeres u hombres, sin distinción alguna.

Del mismo modo, las consecuencias y los daños que se causan pueden ser de carácter psicológico, emocional y social. Es por lo anterior que deben existir mecanismos que mitiguen los daños causados en las personas por las organizaciones criminales.

Por otro lado, se debe hacer especial énfasis en que el crimen organizado se aprovecha de la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, como los menores, pues las bandas delincuenciales suelen usar a niñas, niños y adolescentes en ilícitos porque son más manejables y fáciles de coaccionar que los adultos. Una de las razones para reclutar a niñas, niños y adolescentes dentro de una organización criminal es que pueden desempeñar funciones de apoyo, como ser cocineros, cargadores, mensajeros, espías o incluso combatientes.

Por lo anterior es importante continuar transformando el sistema de seguridad y fortalecer la protección de las víctimas del crimen organizado con los debidos procedimientos de coordinación entre los órdenes de gobierno, poniendo a disposición de las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano herramientas jurídicas para combatir a la delincuencia y proteger a la ciudadanía.

La protección y el fortalecimiento en la atención de las víctimas requiere no sólo la búsqueda de la reparación integral de los daños sufridos, sino también de brindarles facilidades para la realización de las denuncias correspondientes, las cuales muchas veces no se realizan por el temor de no tener el respaldo de la justicia y por la posible venganza o represalias por parte de los agresores.

En el Partido Verde Proponemos:

- Establecer y fortalecer los mecanismos de seguimiento y protección para las víctimas a causa del crimen organizado con la finalidad de implementar mecanismos para la reparación del daño y dar soluciones mediante la protección de la víctima frente a un eminente peligro.
- Realizar campañas de concientización para el fomento de una cultura de la denuncia de los ilícitos con la debida protección de las víctimas, con seguimiento de las autoridades para que cuenten con los medios protectores posteriores a la denuncia.
- Establecer esquemas educativos y fortalecer la labor institucional a nivel básico con la finalidad de generar orientación sobre los derechos de las víctimas.
- Implementar esquemas de formación y de mejora en la atención de las víctimas del delito a causa del crimen organizado, propiciando que los tres órdenes de gobierno participen de manera coordinada en el apoyo a las víctimas en temas como servicios médicos y asesoría legal.
- Implementar políticas públicas para mejorar la capacitación de los cuerpos policiacos como responsables en muchos casos de llevar a cabo las primeras acciones de asistencia a víctimas del crimen organizado.

Combate a la Extorsión

Planteamiento del Problema

Luego de que en abril de 2020 las denuncias por distintos delitos cayeran a mínimos históricos debido al confinamiento sanitario por el COVID-19 en todo México, el país había acumulado hasta agosto pasado cuatro meses consecutivos de incrementos en robos, extorsiones, fraudes, abusos sexuales, narcomenudeo y violencia intrafamiliar, entre otros.

Tan solo las denuncias por los delitos que afectan directamente al patrimonio de las personas se han disparado a nivel nacional casi 30% entre mayo y agosto y hay entidades federativas donde el incremento en la incidencia delictiva supera incluso el 100%.

Los datos oficiales de las 32 fiscalías del país publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo anterior y prueban que el descenso en la incidencia delictiva registrado en meses anteriores rápidamente se ha revertido, incluso sin que el desconfinamiento sea completo.

En abril de 2020, cuando se ordenó el paro de casi todas las labores y se suspendieron las clases, la cifra de denuncias por todos los delitos cayó a 119 mil 809, la incidencia mensual más baja en 16 años. Pero a partir de mayo el crecimiento mensual ha sido sostenido y para agosto las denuncias por todos los delitos cerraron en 158 mil 253 casos, lo que representa un incremento del 32% en ese periodo; de hecho, las denuncias registradas en agosto se encuentran solo 5% por debajo de las que se presentaron en enero de 2020.

El crecimiento en la incidencia delictiva en el país ha sido impulsado principalmente por el repunte de los delitos de tipo patrimonial (robos, fraudes, extorsiones, entre otros). Las denuncias por este tipo de delitos pasaron de 55 mil 716 en abril, a 56 mil 735 en mayo, 65 mil 405 en junio, 72 mil 588 en julio y 73 mil 45 en agosto, lo que se traduce en un crecimiento superior al 30% en los delitos patrimoniales en este periodo de cuatro meses.

Para el caso de las extorsiones, el crecimiento también ha sido sostenido, aunque menos pronunciado, pues las denuncias pasaron de 627 a 708 en el mismo periodo, lo cual representa que la incidencia de este delito subió casi 13% a nivel nacional.

En el caso de las denuncias por extorsión destaca lo sucedido en Durango y Chihuahua porque son las únicas dos entidades con crecimientos superiores al 100% en sus denuncias, le siguen Baja California con un repunte del 60% y Sonora con un 50%, mientras que la entidad con la mayor cifra de denuncias por extorsión es el Estado de México, el cual reportó un ascenso del 28% al cierre de agosto.

Esta situación disruptiva ya había sido vislumbrada con anterioridad por diversos analistas y expertos en seguridad pública, al manifestar que se registrarían dos posibles efectos del confinamiento: la disminución de delitos de oportunidad, como los robos por la menor presencia de personas en las calles, así como complicaciones extra para denunciar debido a una reducción de horarios o personal en agencias del Ministerio Público.

En ese sentido, la realidad nacional está definida por tintes de violencia y corrupción y por su peor combinación que es la impunidad, pues el crimen organizado no sólo se ha infiltrado en las estructuras de poder, sino que trastoca seriamente la vida cotidiana de los ciudadanos.

Una de las afectaciones más visibles a comerciantes, transportistas y sectores de profesionistas lo constituye el llamado cobro de "derecho de piso", por el que bandas criminales los extorsionan, obligándolos a pagar una cuota periódica a cambio de dejarlos trabajar; en caso de negarse, los ciudadanos pueden perder desde su negocio hasta la vida misma. Los medios de comunicación nacionales han reportado más de 230 negocios incendiados en los últimos seis años por negarse a cubrir el derecho de piso en todo el territorio nacional.

El derecho de piso afecta las utilidades de pequeñas y medianas empresas, por lo que cabe cuestionarse si este pago irregular debe también considerarse como un gasto de operación que deben tener en cuenta los empresarios en el país cuando deciden invertir su dinero para emprender.

Lamentablemente, en el caso de la extorsión derivada del derecho de piso cuando se denuncian los hechos ante los órganos de procuración de justicia en nuestro país, la poca efectividad de estos para investigar y dar con los delincuentes, o bien, su colusión con los mismos representa una invitación al cumplimiento de las exigencias del crimen organizado.

Esta circunstancia coloca en un dilema a los empresarios que deben aportar al presupuesto de instituciones que no logran proteger sus derechos de propiedad, de libertad, de comercio, de seguridad jurídica y de justicia pronta y expedita y al mismo tiempo contribuir al engrosamiento de las arcas de los criminales.

Con esta distorsión, resulta que de cada peso entregado al crimen organizado por los contribuyentes por concepto de derecho de piso el fisco recauda legalmente por ese simple hecho otros 35 centavos, lo que a la postre deriva en un cierre importante de micro, pequeñas y medianas empresas, siendo la carga tributaria excesiva al tener que pagar dos tipos de impuestos, el formal-legal y el informal-ilegal, que es el que más consecuencias físicas y materiales implica.

Dada la alta incidencia en homicidios, pérdida de recursos materiales, económicos, laborales y patrimoniales que el delito de cobro de piso representa, así como el consecuente cierre de actividades empresariales es necesario que sociedad y gobierno implementen acciones para establecer como un delito agravado el cobro de derecho de piso, ya que de permitirse que los delincuentes sigan incrementado sus ingresos por este concepto, se estaría dejando en total indefensión a los ciudadanos que sufren por el mismo ilícito.

En el Partido Verde Proponemos:

- Tipificar como delito agravado el cobro de piso y garantizar que aquel delincuente que sea detenido, juzgado y sentenciado por este delito no tenga posibilidad de fianza, ni libertad condicional, al menos durante las tres cuartas partes de su condena.
- Establecer penas de 10 a 20 años de prisión al delincuente que sea sentenciado por el delito de cobro de piso con todas sus agravantes.
- Impulsar que el gobierno federal a través de la SSPC y el CNI fomente la creación de una base de datos respecto los números telefónicos desde los cuales se han generado llamadas

de extorsión, a fin de realizar un rastreo que permita ubicar en el menor tiempo posible los números desde donde se ha perpetrado una llamada de extorsión.

- Establecer protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de seguridad para el combate frontal de este delito y coadyuvar con el proyecto de Ley para el Registro Nacional de Números Telefónicos a fin de combatir las extorsiones o fraudes cometidos vía telefónica.

Garantizar la Seguridad de los Usuarios de Transporte Público en sus Traslados

Planteamiento del Problema

El robo a pasajeros en transportes públicos colectivos representa una amenaza no sólo a la economía de las personas, sino a su seguridad e integridad, debido a la violencia a la que están expuestos en la comisión de ilícitos tanto los usuarios como los operadores.

Llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela, ir al médico, salir a recrearse o cualquier otra actividad que se realiza de manera cotidiana y para la cual se utiliza el transporte público son movimientos que implican riesgos reales de victimización. El riesgo es mayor para aquellos que habitan en zonas de alta criminalidad y violencia y para quienes viven más lejos de sus destinos y pasan más tiempo desplazándose.

Los medios de comunicación dan cuenta constantemente de este tipo de ilícitos cometidos por la delincuencia, los cuales se presentan con mayor frecuencia tanto en las grandes ciudades como en las rutas de carreteras interurbanas que conectan las diversas localidades de las zonas metropolitanas.

Los delitos asociados al robo en transportes públicos colectivos tienen diferentes impactos en la sociedad, tales como sensación de miedo en la población, daño patrimonial a las víctimas del delito y sus familias, agresiones, heridas, extorsiones, delitos sexuales e incluso asesinatos de pasajeros.

Algunos expertos han detectado que los crímenes suceden mayormente en las primeras horas de la mañana, en días laborales. Es decir, la gente que acude a sus actividades diarias en transporte público es especialmente vulnerable. Aquellos que se trasladan en transporte público desde muy temprano, por vivir lejos de los centros de trabajo o alguna otra razón, corren más peligro.

El robo en transportes público colectivo es un delito del fuero común que afecta a gran parte de las entidades federativas, registrando los más altos índices y los impactos más graves el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro.

Si bien diferentes gobiernos locales han impulsado políticas públicas en materia de seguridad ciudadana para afrontar el problema de los altos índices de robos con y sin violencia en el transporte público, lo cierto es que en determinadas regiones del país este delito sigue representando una de las mayores preocupaciones de la población y que ha generado tal nivel de hartazgo entre las víctimas que en ocasiones hieren o intentan linchar a los delincuentes.

En razón de la necesidad que tienen las personas de desplazarse de un lugar a otro para ejercer sus derechos más fundamentales, no puede soslayarse la exigencia de la población de contar con

sistemas de transporte público colectivo eficientes, limpios, cómodos y ecológicos, pero sobre todo seguros que les garanticen a los usuarios llegar sanos y salvos a sus destinos y sin afectaciones a su integridad y patrimonio.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar la instalación de tecnología con el propósito de vigilar a las unidades de transporte público desde los centros de monitoreo de las autoridades de seguridad ciudadana en todo el país (cámaras de vigilancia y botones de pánico) que permitan una intervención oportuna en caso de presentarse algún ilícito.
- Promover la coordinación entre autoridades de las zonas metropolitanas a fin de establecer programas y estrategias conjuntas para combatir el robo a usuarios de transporte público.
- Implementar análisis de rutas, acciones de prevención, revisión de pasajeros en unidades de transporte, supervisión de operadores y estandarización de los servicios.
- Capacitación y controles de confianza de choferes de transporte público.
- Cambiar el entorno en que los autobuses se detienen y en donde son abordados, sumando espacios seguros y bien iluminados diseñados para que las unidades puedan esperar a su pasaje o permitirles el descenso.
- Fomentar la adopción de medidas como no aceptar efectivo para el cobro del pasaje y realizarlo por medio de tarjetas prepagadas, evitando que los conductores carguen dinero en efectivo.
- Sanciones más severas para los delincuentes que cometan el delito de robo en transporte público, especialmente para los reincidentes y para quienes asesinen a sus víctimas.
- Promover la creación de un cuerpo de la Guardia Nacional especializado en seguridad del transporte.
- Impulsar la expedición de una ley de carácter general para el mejoramiento y la seguridad del transporte público que aplique en todo el país.

JUSTICIA

Erradicar el Femicidio y la Violencia Contra las Mujeres

Planteamiento del Problema

La violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a sus derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas, además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia ejercida en contra de ellas también impacta negativamente a sus familias, sus comunidades y su país.

Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes de las entidades federativas respecto a la violencia contra las mujeres y de los códigos y procedimientos penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de los esfuerzos y las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas el acceso a servicios integrales y multidisciplinarios para su atención y el acceso a la justicia en general.

El feminicidio y la violencia en contra de las mujeres es un problema que exige atención inmediata por parte de todas las autoridades públicas en sus diferentes niveles, hemos sido testigos de cómo los índices de violencia contra la mujer y los feminicidios han aumentado en lugar de desaparecer o tan siquiera disminuir la incidencia delictiva en contra de todo el género femenino.

Actualmente, no existe una sola entidad federativa que no registre por lo menos una desaparición, un secuestro, una violación o un homicidio relacionado con mujeres.

Incluso en el transporte solicitado vía internet las mujeres no se encuentran a salvo, pues es común en ver en casos de mujeres desaparecidas y después halladas muertas con evidentes signos de violencia que abordaron un taxi o unidad de alguna de las plataformas existentes. Lo anterior se debe a que dichas empresas de transporte por internet no están plenamente reguladas para que puedan ser imputadas bajo alguna causa penal.

Pero no solamente las empresas de transporte por internet tienen altos números de incidencia delictiva contra las mujeres, pues los servicios de taxis convencionales en cualquier ciudad del país tampoco son la excepción.

Las mujeres ya no se sienten seguras en ningún punto y eso es precisamente por la falta de políticas públicas dirigidas a salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional, lo cual trae como consecuencia que los feminicidios y la violencia en contra de la mujer sigan aumentando año con año, al igual que sucede con la impunidad.

Resulta también necesario emprender acciones prioritarias para apoyar los esfuerzos de las entidades federativas encaminados fortalecer sus procesos de recolección y análisis de datos en materia de feminicidios y violencia contra las mujeres, pues de ello depende que las políticas públicas que se implementen sean realmente efectivas.

Se debe también atender el mandato de los tratados internacionales y regionales que protegen los derechos de las mujeres y de las niñas para garantizar que las leyes y los servicios nacionales observen las normas internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) puede ser una herramienta poderosa que nos ayude a lograr un cambio de fondo.

Las formas de violencia en contra de las mujeres hoy en día se han denominado "prácticas culturales o tradicionales perjudiciales" y abarcan expresiones tan diversas como la propia cultura, por ejemplo, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, el matrimonio forzado, la violencia relacionada con la dote, los ataques con ácido, los denominados crímenes de honor y el maltrato de las viudas, la incitación al suicidio, las restricciones dietéticas para las mujeres embarazadas, la alimentación forzada y los tabúes nutricionales, el matrimonio con el hermano del marido fallecido, la caza de brujas, entre otras.

Dichas prácticas son el resultado de la desigualdad entre los géneros y de normas sociales, culturales, religiosas y tradicionales discriminatorias que regulan la posición de la mujer en la familia, en la comunidad, en la sociedad y controlan la libertad de las mujeres, incluido el ejercicio de su sexualidad.

Así, en todo el mundo las mujeres pueden verse expuestas a lo largo de su vida a diversas prácticas perjudiciales que deben ser erradicadas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades, así como su desarrollo pleno.

En el Partido Verde Proponemos:

- Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas, así como otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que fueron víctimas, para lo cual el Gobierno de México deberá adoptar un enfoque de transformación en lo relativo a las reparaciones para las familias de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.
- Crear planes nacionales y locales de acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los estados de la república mexicana, que logren reunir al gobierno, a las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones de los derechos humanos.
- Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos y aumentando la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en los principales servicios públicos.
- Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales, teniendo como objetivo mínimo las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de las niñas atendidas mediante líneas de emergencia gratuitas que trabajen las 24 horas, contando con intervenciones rápidas para su seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para ellas y sus hijos, con un seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados post violación y con ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus derechos y opciones.
- Fortalecer la red nacional de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y sus hijos.
- Establecer cursos obligatorios de reeducación para hombres que violenten los derechos de las mujeres.
- Promover en todas las escuelas de educación básica la impartición de clases para evitar la violencia contra la mujer.

Protección a Defensores del Medio Ambiente

Planteamiento del Problema

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales, tal como el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Actualmente, la agenda internacional de los derechos humanos y el medio ambiente está enfocada en garantizar que todas las personas entendamos que los ecosistemas constituyen un contexto inalienable donde todos vivimos y que el ejercicio de la mayoría de nuestras prerrogativas depende de su preservación y protección.

En un contexto de violencia como el que desafortunadamente se vive en nuestro país, la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es y debe ser tema prioritario para el Gobierno, como pieza fundamental para la implementación y protección universal de los derechos humanos.

De acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la estigmatización de las personas y de su actividad contribuye a la percepción de que los defensores y las defensoras son blancos fáciles para abusos por parte de actores estatales y no estatales, por lo que el reconocimiento de la labor y las funciones de los grupos, instituciones o individuos en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales es primordial para detener este tipo de conductas delictivas sobre los mismos.

En nuestro país y en el mundo entero existen personas que, de manera desinteresada, con recursos limitados, pero sobre todo con una gran pasión por la naturaleza realizan acciones en favor del medio ambiente, muchas veces incluso poniendo en riesgo su integridad y su propia vida.

Todos debemos tomar conciencia de la importante labor que desempeñan esos luchadores que, en su mayoría, son rostros anónimos que no desean protagonismo mediático, sino simplemente enfrentar los problemas ambientales que afectan a sus comunidades y, por ende, a todo el sistema ambiental en su conjunto.

Es por lo anterior que se deben establecer medidas que permitan el desarrollo de su labor a los defensores ambientales como parte de los esquemas de protección otorgados por el Estado mexicano, haciendo extensiva esta posibilidad a cualquier organización de defensa que enfrente un riesgo similar con motivo de su labor.

Es incuestionable que las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas deben trabajar sin obstáculos en un entorno seguro y propicio en todo el país, así como también deben hacerlo quienes con valentía alzan la voz para tutelar un derecho humano que nos beneficia a todos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, por ello, es necesario que se adopten las medidas correspondientes para reconocer jurídica y socialmente el derecho a defender causas ecológicas sin que se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de quienes lo hacen y, sobre todo, sin caer en ambigüedades o en falta de certeza.

En el Partido Verde Proponemos:

- Construir un marco jurídico especializado que establezca mecanismos para proteger de modo más efectivo la vida y la integridad de ambientalistas, tal y como sucedió en su momento con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Denuncia Rápida de Delitos Vía Digital o Telefónica

Planteamiento del Problema

La inseguridad es uno de los temas que más importan a los Quintanarroenses, tristemente, en las últimas décadas los índices delictivos han tenido un aumento considerable, mermando la calidad de vida de la población.

La sociedad se encuentra intranquila ante la posibilidad de algún daño a su integridad física o pérdidas en su patrimonio; ya no siente la confianza de poder caminar con libertad por los espacios públicos, o bien, sentirse a salvo al interior de sus domicilios y centros de trabajo.

Cuando un individuo es víctima de algún delito se enfrenta a diversas barreras administrativas y burocráticas que le limitan su derecho de acceso a la justicia.

La falta de denuncia de los delitos que diariamente ocurren con frecuencia se asocia a la falta de confianza en las autoridades, así como los altos índices de impunidad que imperan en nuestro país.

Por otro lado, se ha identificado que la falta de confianza que tiene la población en las autoridades se relaciona en muchos casos con ciertas actitudes de los servidores públicos, tales como hostilidad, hostigamiento, extorsión, entre otras.

Cabe señalar que otro de los obstáculos con los que se encuentran las víctimas del delito al denunciar es experimentar el proceso tan largo, tedioso y hasta intimidatorio que puede resultar la sola presentación de una denuncia; claramente, estas barreras limitan e inhiben la intención de los afectados de presentar la denuncia correspondiente.

Se tiene registro de testimonios de personas que han tardado hasta 12 horas esperando en un Ministerio Público para ser atendidas y denunciar.

Por otro lado, una vez que se les atiende los denunciados pueden tardar horas en que les sea tomada su declaración y ni hablar de las altas posibilidades de ser revictimizados por los propios servidores públicos.

El penoso índice de denuncias es una señal de alerta de que el Estado debe actuar de manera puntual para implementar las acciones necesarias que le permitan recuperar la confianza de la población, así como plantear propuestas innovadoras y acordes a la realidad que vivimos poniendo a disposición de los individuos los medios idóneos para facilitar los mecanismos de denuncia.

Se afirma que las personas no denuncian porque no confían en las autoridades, pero también porque en muchas ocasiones no saben dónde ni cómo hacerlo.

En este orden de ideas, se sostiene que un derecho fundamental como el acceso a la justicia no puede verse limitado por aspectos meramente burocráticos o administrativos y mucho menos en pleno siglo XXI en donde la tecnología ha tenido avances importantes, los cuales debemos aprovechar al máximo en pro de las personas y del acceso a la justicia.

Estamos en la época de la información y de las tecnologías, en donde la mayoría de la población tiene acceso a un teléfono celular y un alto porcentaje de la misma se encuentra habituado al uso cotidiano de medios electrónicos y digitales, ya sea a través de celulares inteligentes, computadoras y/o tabletas.

Ante el innegable avance tecnológico y su fácil acceso para los miembros de la comunidad, hoy es posible afirmar que se ha vuelto innecesario el traslado de las personas a una oficina física del ministerio público para presentar una denuncia respecto a los hechos delictivos de los que ha sido objeto.

En el Partido Verde Proponemos:

- Modificar la legislación para impulsar en cada entidad federativa la reducción del tiempo para denunciar, así como la implementación de denuncias mediante el uso de las tecnologías haciendo posible que los individuos puedan realizarlas vía telefónica o digital en sólo unos minutos.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Erradicar Cualquier Tipo de Discriminación

Planteamiento del Problema

La discriminación es un fenómeno social que menoscaba la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

A partir de 2011, como resultado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Estado mexicano está llamado a reconocer y garantizar el derecho a la no discriminación.

Los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes padecen en mayor medida la discriminación, por ejemplo, las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros.

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entiende por discriminación *toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.*

El derecho a la no discriminación encuentra su fundamento en la dignidad humana. Cabe precisar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que *todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.*

A su vez, México cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, legislación reglamentaria que tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona. Y a nivel local hay 31 leyes antidiscriminatorias; 26 cláusulas antidiscriminatorias que se encuentran establecidas en constituciones locales y 28 entidades federativas que cuentan con códigos penales o en alguna otra legislación que tipifican conductas relacionadas con la discriminación.

Igualmente, desde 2003 existe en nuestro país el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), creado con el fin de eliminar la discriminación en todo el país a través de la promoción de políticas y medidas para avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

Lamentablemente, a pesar de los muchos esfuerzos y avances en materia de creación de instituciones y legislación con el propósito de erradicar la discriminación en nuestro país, ésta sigue estando arraigada en las estructuras de nuestra sociedad y sigue causando sufrimiento en quienes son víctimas de ella.

En el Partido Verde Proponemos:

- Diseñar políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, en coordinación con los tres niveles de gobierno, en lo que respecta a la protección contra actos discriminatorios.
- Atender las recomendaciones que emitan distintos organismos internacionales en materia de erradicación de la discriminación.
- Promover la cultura del respeto a los derechos humanos, cuyo fundamento radica en la dignidad de la persona y fortalecer los esfuerzos para construir una sociedad más incluyente.

Promoción de la Inclusión

Planteamiento del Problema

A pesar de los avances existentes en materia de derechos humanos en nuestro país, con reformas jurídicas pensadas para el beneficio de la sociedad y la protección más amplia de la persona, persisten aún elementos que obstaculizan la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Una de las tareas fundamentales del Estado es la de brindar oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos y velar por el respeto a los derechos de cada individuo por igual, por eso es tan importante crear herramientas que faciliten la inclusión y derrumben los estereotipos predominantes que se convierten en obstáculos para permitir una inserción económica y social exitosa de todos los miembros de una comunidad.

En el caso de las personas con alguna discapacidad el reto es aún mayor, ya que este sector de la población enfrenta el problema de entornos físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias, conscientes e inconscientes, que merman su desarrollo e impactan en sus niveles de bienestar.

Además de las personas con discapacidad, existen otros grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y los adultos mayores, que requieren de esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la sociedad para lograr que se sientan incluidos, que se sientan importantes y motivados a participar en el desarrollo de la sociedad. Dicho de otro modo, se trata de garantizar que nadie se quede atrás.

Debemos trabajar unidos para derribar las barreras culturales y los prejuicios que nos separan y limitan como sociedad. La diversidad es importante y se ha vuelto una obligación del Estado crear entornos que la favorezcan. Debemos apostar a la educación inclusiva, con un ambiente y estrategias de enseñanza orientadas a la educación en la diversidad, con pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas.

En el Partido Verde Proponemos:

- Fomentar el respeto y una cultura de inclusión social de las personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas en los sectores público y privado.
- Reconocer e incentivar a las empresas que emplean a personas con discapacidad y a adultos mayores.
- Promover en los espacios públicos el uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio.
- Impulsar la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, de las personas con discapacidad.

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Democracia Líquida

Planteamiento del Problema

En la actualidad, el ciudadano común no se siente suficientemente atendido por los poderes públicos y, por su parte, los representantes legislativos no siempre pueden satisfacer las necesidades de los electores tomando en cuenta sus preferencias; así, ambas circunstancias evidencian la insuficiencia representativa entre gobernantes y gobernados. Esta condición ha sido señalada por teóricos de las ciencias políticas y activistas, al tiempo que también ha sido constatada por los resultados de múltiples encuestas.

Las deficiencias en la representación provocan el desencanto de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos y ese desinterés, a su vez, incentiva la indiferencia entre los representantes legislativos y sus electores y se obtiene como resultado final un distanciamiento entre gobernantes y gobernados mientras no acontece un nuevo periodo electoral para ratificar o cambiar a los representantes políticos. Ello pone en riesgo de extinción a la democracia como un modelo de organización política y social donde se considere, respete y atienda a la soberanía ciudadana más allá de ser depositada en los órganos de gobierno.

Ante las dificultades de la insuficiencia representativa han emergido instrumentos de participación ciudadana que pretenden influir en la elaboración, ejecución, transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas, sin embargo, no todos los instrumentos de participación ciudadana alcanzan dicho propósito.

Existen mecanismos como el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato que presentan las mismas limitaciones del voto, es decir, no superan los límites de la representatividad, pues son los funcionarios públicos quienes los convocan y se realizan bajo el esquema reduccionista de un sí o un no. Por otra parte, los mecanismos distintos a la mera elección de un determinado candidato, como las iniciativas de ley popular, la consulta ciudadana y los presupuestos participativos se enfrentan a las objeciones de viabilidad de la democracia deliberativa.

Llegados al punto de superar las limitaciones del modelo representativo y de algunos de los instrumentos participativos, se debe exponer la necesidad y condiciones de nuevas fórmulas democráticas; al mismo tiempo, se debe buscar recuperar los elementos más democráticos del modelo representativo y participativo para no tirar todo por lo borda; esto permitirá que la soberanía ciudadana no se extinga bajo el dilema de una representación política o el subterfugio de una participación simulada.

A estas nuevas fórmulas democráticas se alude con la denominación de *democracia líquida*. Como su propio adjetivo lo sugiere, la democracia líquida no se basa en una sola forma de representación política o de encauzar a la soberanía ciudadana, sino que es un sistema en el que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de votar por internet cada decisión del congreso y realizar propuestas, también puede ser representante virtual, mediante la publicación de su intención de voto en nombre del partido político o corriente de opinión a la que representa.

Con este sistema no es necesario esperar cada 3 años para cambiar de representantes, ya que el voto delegado puede recuperarse en cualquier momento, ya sea para votar una decisión puntual en la que se quiere participar directamente, para tomar parte activa en el parlamento virtual, votando en cada decisión, o bien, para delegar el voto en otro representante.

Si la participación ciudadana llega a existir en la democracia representativa, generalmente se hace presente en consejos y comités ciudadanos sin vinculación a las decisiones de las cámaras. Además, dichos organismos se prestan a una simulación soterrada que los enajena en la conformación de la agenda política. Si a ello se suman las limitaciones que padece la ciudadanía al carecer de instrumentos para ejecutar la rendición de cuentas, los juicios políticos y las garantías de las promesas de campaña, entonces la necesidad de nuevas formas de representación y participación se vuelven más apremiantes.

Por estas razones, en la evolución de los medios de participación también se han generado instrumentos más sofisticados a pesar de su compleja implementación, como, por ejemplo, la denominada *advocacy planning* o planificación abogadil, por la cual un abogado profesional busca representar los intereses de los ciudadanos políticamente débiles o que serán afectados por las decisiones gubernamentales. Esta figura (con variadas modalidades del conocimiento especializado y mayor entrega a la confianza técnica, moral y política) es la médula de los representantes delegados *proxies* apoderados que constituyen una de las modalidades de la democracia líquida.

Por lo tanto, se requiere la apertura de los espacios participativos, directos o semidirectos dentro de las cámaras para hacer oír las voces ciudadanas independientemente de los representantes políticos fijos por todo un periodo electoral.

En este contexto, a partir de la falta de sistemas efectivos de influencia en políticas públicas, nace la democracia líquida, que promueve la transparencia, la inclusión, el interés político a partir de la influencia tangible y directa y la responsabilidad de ofrecer votos informados.

No se trata entonces simplemente de exigir un cambio político, sino más bien de clamar un cambio en la manera de hacer política, la ciudadanía demanda tomar las riendas de la política utilizando sistemas más modernos que no dependan del sistema político clásico y con ello lograr el propósito de construir un sistema democrático, participativo e informado.

En el contexto descrito es una labor esencial plantear los posibles instrumentos a través de los cuales posibilitar un histórico cambio en la manera de hacer política para reconstruir la cuestión democrática. Es cierto que la sociedad civil demanda condiciones más participativas y deliberativas en el mundo institucional y social; la idea es promover políticas deliberativas que lleven a la comunidad a tener cada vez mayor peso en la toma de decisiones.

Se tiene que entender la necesidad social de la información como un gran contenedor donde gracias a las nuevas tecnologías se acumulan grandes cantidades de información que rápidamente se difunden llegando a la comunidad social. La labor de este tipo de sociedad termina cuando la noticia llega a su destinatario y es en este momento que debe intervenir la sociedad del conocimiento para filtrar la información y convertirla en herramientas democráticas de participación.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover una versión seccionada de la democracia líquida, donde solo se permita la delegación del voto en los partidos políticos, por lo que el sistema de democracia representativa con los partidos políticos seguiría funcionando, pero para temas selectos de amplio impacto definidos por las cámaras, todo ciudadano podría ejercer su derecho al voto a través de un portal electrónico gestionado por el Instituto Nacional Electoral.
- Promover la creación de un sistema de votación con base de datos única para efecto de establecer una democracia directa donde las personas pudieran votar para participar en decisiones legislativas desde su casa (voto por Internet) o desde cualquier otro centro de votación habilitado permanentemente.

IV. MEDIO AMBIENTE SANO PARA TODOS

BIENESTAR ANIMAL

Otorgar Facultades al Congreso de la Unión para Legislar en Materia de Bienestar Animal

Planteamiento del Problema

A lo largo de la historia los animales han sido utilizados como medio de trabajo, como fuente de alimento, como medio de transporte, como protección para el hogar, como símbolo u objeto de culto, como fuente de entretenimiento, como modelos de investigación científica, como guía para personas discapacitadas y como fuente de afecto para sus dueños.

No obstante, la importancia que los animales tienen en la vida cotidiana de las personas, con regularidad somos testigos de diferentes actos de crueldad cometidos en su contra, las razones son diversas, pero todas se explican por la falta de valores de quienes no han aprendido a respetar a seres vivos que, en muchas ocasiones, tienen un alto grado de desventaja con respecto al hombre.

Existen cada vez más evidencias científicas de que el sufrimiento no es un atributo exclusivo de los seres humanos, sino que éste les corresponde también a los animales; en este sentido, someter a un animal al hambre, a la sed, a la angustia, al dolor, a la frustración y al miedo se considera una forma de maltrato, sin omitir, desde luego, las agresiones físicas y psicológicas directas que se cometen en contra de los animales.

Afortunadamente, gracias a las acciones de los grupos preocupados por el bienestar y la protección de los animales, en los últimos años, tanto a nivel internacional como nacional, se ha dado un nuevo enfoque respecto al trato que se les debe dar.

Por lo que respecta a nuestro país, contamos con diversas disposiciones que hacen referencia al trato digno y respetuoso de los animales, no obstante, ésta ha sido una materia reservada para el ámbito local, por este motivo, las Leyes con objeto de garantizar el bienestar animal resultan muy diversas. Esta falta de uniformidad provoca que lo que está prohibido en una entidad, en otra puede estar parcial o abiertamente permitido. Así mismo, existen diferencias notables en cuanto a las sanciones para el maltrato, pues lo que en un estado puede ser considerado un delito castigado con cárcel, en otro podría apenas ameritar el pago de una multa, lo cual es, sin duda, un factor que explica el aumento en el número de actos dolosos registrados en contra de los animales.

En el Partido Verde Proponemos:

- Modificar la Ley General de Bienestar Animal, definido éste como la ausencia de todo tipo de emociones desagradables (miedo, dolor, frustración, agotamiento) que puedan causar sufrimiento en los animales.

Modificar la Ley General de Bienestar Animal, Aplicable en todo el Territorio Nacional

Planteamiento del Problema

En nuestro país existe un gran número de conflictos relacionados con el trato a los animales, mismos que varían en sus causas, naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y no domésticas de fauna y al uso que se hace de ellas. En la mayoría de los casos, los problemas de bienestar animal se deben a la percepción errónea que la gente tiene acerca de que los animales no son capaces de sufrir, de sentir dolor y de padecer estrés.

Lamentablemente, derivado de la percepción señalada, es común que se registren actitudes negativas hacia los animales, lo que finalmente se refleja en conductas de crueldad y negligencia, siendo el alojamiento y mantenimiento; el transporte y movilización; la eutanasia y matanza; la comercialización y el manejo de los animales, las situaciones que dan origen a la mayoría de los casos de maltrato, en los cuales los animales sufren estrés, lesiones, enfermedades e incluso la muerte.

Si bien hoy contamos con diversas leyes que contemplan el bienestar animal, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley Federal de Sanidad Animal; y las leyes locales de bienestar animal, lo cierto es que éstas solo contienen disposiciones aisladas que resultan insuficientes para erradicar los múltiples casos de maltrato que se presentan en el país. Por lo anterior, resulta necesaria la creación de una ley de carácter general que nos permita contar con un instrumento jurídico específico que defina y homologue las directrices para el tratamiento de las especies que se usan en diversas actividades, procurando siempre el bienestar de las mismas.

En el Partido Verde Proponemos:

- Crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto:
 - 1) Regular el bienestar de los animales sujetos al dominio o posesión del ser humano, considerando el valor de la vida por sí misma, la libertad y la capacidad de sufrir de cada especie;
 - 2) Establecer infracciones y delitos contra la fauna en general;
 - 3) Establecer políticas que fomenten la adopción de medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los animales;
 - 4) Crear una Fiscalía Especial Federal para la Protección de los Animales, con delegaciones en cada entidad, la cual será responsable de la vigilancia y efectiva aplicación de la Ley General de Bienestar Animal, con el auxilio de las autoridades estatales y municipales;
 - 5) Obligar a todas las policías del Estado a aplicar la ley en el ámbito de su competencia, así como coadyuvar con la fiscalía cuando se trate de delitos realizados en flagrancia, de oficio o a petición de parte, realizando las primeras diligencias, aseguramientos y puestas a disposición que se requieran, debiendo a la brevedad posible dar aviso del caso a la fiscalía;
 - 6) Involucrar a los ciudadanos y a las asociaciones protectoras de animales en la denuncia de los casos de maltrato animal y en todo tipo de colaboración para la plena consecución de los fines de la nueva ley;

7) Establecer que será sancionado todo servidor público que incumpla con sus obligaciones, ya sea al permitir violaciones a la ley, ignorar denuncias, omitir los avisos o las custodias a cargo de las asociaciones protectoras, negarse a detener a personas en flagrancia, omitir el aseguramiento o el posterior decomiso de los animales afectados, negar o retardar, sin causa justificada, el libramiento de órdenes de cateo, o evitar la promoción de los derechos de los animales.

Erradicar la Crueldad en el Desarrollo y Sacrificio de Animales

Planteamiento del Problema

A pesar del gran valor que tienen las actividades ganaderas en Quintana Roo no se ha podido impedir el maltrato hacia los animales destinados al sacrificio para consumo humano.

No obstante que existe un marco jurídico reforzado por normas oficiales, en las cuales se han establecido protocolos de actuación que consideran aspectos como el cuidado durante el traslado, la alimentación y técnicas humanitarias para el sacrificio de los animales, no son pocos los casos en los que se ha documentado lo siguiente: incumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado animal, encontrándose omisiones en el aturdimiento de los animales antes de su sacrificio para evitar una agonía dolorosa; animales que se enciman unos sobre otros debido a que perciben el peligro, aumentando su estrés por su deseo de escapar; sometimiento de los animales con prácticas de tortura, tales como matarlos azotándolos en el piso, cortarles la cola vivos y golpearlos constantemente; encadenamiento de especímenes, las cuales reciben golpes, choques eléctricos y otras prácticas como muerte por desangramiento; además de la existencia de rastros clandestinos.

A pesar de que haya animales destinados para consumo humano, no debemos olvidar que merecen respeto y cuidados adecuados, no sólo durante su vida, sino también cuando llega el momento de sacrificarlos.

Por lo anterior es necesario considerar un concepto de salud o salubridad orientado a garantizar que las condiciones en las cuales se desarrollan y mueren los animales de abasto sean las adecuadas, tanto en beneficio de los animales, como de los consumidores. En México la concepción de la salud animal se relaciona directamente con la salud del ser humano.

En el Partido Verde Proponemos:

- Ampliar el concepto de sanidad animal para que éste abarque todo el ciclo de vida de los animales de abasto. Igualmente, se propone establecer que las disposiciones de sanidad animal consideren en todo momento las buenas prácticas pecuarias y las técnicas de sacrificio humanitario.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Reconversión de Unidades de Transporte de Pasajeros y de Carga de Gasolina o Diésel a Gas Natural y Fomento a la Red Nacional de Estaciones de Carga de Gas Natural Vehicular

Planteamiento del Problema

Las emisiones que generan las unidades de transporte, tanto de carga, transporte urbano y automóviles, aportan significativamente a la contaminación ambiental y, por tanto, al cambio climático que resulta de una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La quema de combustibles fósiles en los automotores libera dióxido de carbono, que es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales se quedan atrapadas en la atmósfera, provocando el cambio climático.

La determinación sobre cuánto contamina un automotor depende del tipo de vehículo, de su uso, de la temporalidad en circulación, de las prácticas de conducción y, en buena medida, del combustible que utiliza. El transporte de cargas más pesadas libera más emisiones. Asimismo, un coche pequeño y compacto tiene un menor efecto sobre el medio ambiente que un camión de carga o camioneta.

De forma paralela y debido fundamentalmente a que no existe en México un sistema ferroviario realmente eficiente a lo largo del territorio nacional para el transporte, logística y distribución de mercancías, la circulación de éstas y de personas se realiza mayormente en tráileres de doble caja, camionetas y automóviles particulares, cuyo uso ha crecido significativamente en los últimos años.

Considerando lo anterior y en razón de que los vehículos de combustión interna generan un alto porcentaje de emisiones de CO₂, se hace indispensable pensar en el uso del gas natural como combustible principal para las unidades en las que se realiza mayormente el transporte de personas, pero sobre todo de mercancías en nuestro país.

El uso del gas natural vehicular se ha incrementado en todo el mundo, debido a sus grandes beneficios, no sólo porque es un combustible económico, sino también porque resulta amigable con el medio ambiente; los vehículos que utilizan este combustible generan menos emisiones de CO₂ por cada kilómetro recorrido.

Otro de los beneficios del uso de gas natural vehicular es la seguridad que brinda, ya que al ser más liviano que el aire, ante una eventual pérdida, el gas se eleva y se disipa rápidamente, a diferencia de los combustibles tradicionales. El gas natural vehicular reduce el riesgo de incendio y explosión en caso de accidentes.

Convertir un auto a gas natural vehicular permite generar ahorros inmediatos, pues es más barata la conversión del combustible que renovar un auto para poder circular todos los días en ciudades con restricciones a la circulación en función de la cantidad de emisiones generadas. A lo anterior se suma el ahorro de largo plazo, pues el uso de este hidrocarburo es 50% más económico que los tradicionales (gasolina y diésel) y el rendimiento sigue siendo el mismo.

Ya desde el año 2011 los empresarios del transporte y los expertos en energías hacían énfasis en la necesidad de buscar una nueva alternativa tecnológica, económica, ecológica y segura para el transporte en México.

Con una combinación eficiente de combustibles es posible mejorar sustancialmente la calidad del aire, por lo cual se debe tener en cuenta que el gas natural puede resultar varias veces menos contaminante que otros combustibles que generan gases de efecto invernadero.

En Quintana Roo los automóviles son la principal fuente de contaminación pues su uso provoca la formación de ozono troposférico, el cual se relaciona con enfermedades pulmonares.

El ozono que se encuentra en la capa baja de la atmósfera, donde habita el ser humano (tropósfera), es un contaminante secundario que se produce por la reacción de las emisiones de monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, además de la luz solar.

Entre los efectos nocivos a la salud con los que se asocia el ozono están los problemas respiratorios, pues éste inflama las membranas del sistema respiratorio, generando alteración de las vías respiratorias y reduciendo la función pulmonar. Por otro lado, el ozono puede incrementar los problemas cardiovasculares, empeorar los cuadros de asma y de enfermedades respiratorias y es capaz de provocar la muerte prematura derivada de padecimientos cardiopulmonares. Asimismo, hay evidencia que sugiere afectaciones por ozono al sistema nervioso central, cáncer y problemas reproductivos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar la reconversión de unidades de transporte de pasajeros y de carga de gasolina o diésel a gas natural.
- Fomentar el crecimiento de la red nacional de estaciones de carga de gas natural vehicular y su cobertura en todo el territorio nacional.
- Promover la actualización de las normas que regulan las emisiones vehiculares a escala nacional.

Programa de Sustitución de Leña por Gas y Electricidad

Planteamiento del Problema

El acceso a fuentes de energía es fundamental para el desarrollo integral del individuo y de las comunidades. A pesar de la importancia que significa el acceso a la energía para propósitos tan básicos como la preparación de alimentos, resulta paradójico que en pleno 2020 un número muy alto de mexicanos obtienen su energía para estos fines de la combustión de la leña y el carbón.

La leña y el carbón son combustibles sucios, que además de contaminar al aportar emisiones de CO₂, contribuyen al fenómeno del calentamiento global y a la deforestación, emiten gases y especialmente partículas muy pequeñas que se alojan en los pulmones, resultando nocivas para la salud de las familias que están continuamente expuestas a respirarlas.

De esta forma, la exposición continua a los humos de la leña o el carbón es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades pulmonares, que inclusive puede tener un riesgo más alto que la exposición e inhalación del humo del tabaco.

De acuerdo con el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, quemar madera o carbón para cocinar está asociado con un mayor riesgo de hospitalización o muerte por enfermedades respiratorias.

Es evidente que en la actual circunstancia de la pandemia de COVID-19 las personas expuestas a los humos de leña y carbón durante años y que han desarrollado enfermedades crónicas de tipo respiratorio representan una precondition de riesgo, teniendo una más alta probabilidad de sufrir complicaciones que acaben con su vida al contraer el virus.

Ante ésta lamentable situación, se debe impulsar una política de justicia social energética donde todos los mexicanos y en particular los más pobres y vulnerables tengan acceso a fuentes de energía asequible, segura, saludable y limpia.

El artículo 124 de la Ley de Hidrocarburos establece que: *"Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro adecuado y oportuno, a precios asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas rurales y zonas urbanas marginadas."*

Por lo anterior, se hace necesario impulsar acciones para mejorar la calidad de vida de la población, proteger la salud de las personas y el cuidado al medio ambiente, sustituyendo gradualmente la leña y el carbón como combustibles utilizados para cocinar, por fuentes de energía que sean más limpias y saludables como el gas licuado de petróleo (LP) y la energía eléctrica fotovoltaica.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar que el gobierno federal implemente un programa para que, en una primera etapa, 15,000 hogares sustituyan el uso de leña y carbón por fuentes de energía que sean más limpias y saludables como el gas licuado de petróleo (LP) y la energía eléctrica fotovoltaica.
- Promover en el programa la participación de la Secretaría del Bienestar con el concurso de las Secretarías de Energía, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, buscando la colaboración y coordinación del sector social y de las asociaciones de la iniciativa privada del sector hidrocarburos.
- Desarrollar un esquema donde se facilite a las familias el acceso a equipos de cocina como parrillas de gas, así como equipo para el suministro del gas LP como lo son los cilindros portátiles de 10 kilogramos para aquellas comunidades cuya ubicación se encuentre cercana a plantas de distribución de gas o a los almacenes y tiendas DICONSA.
- Facilitar el acceso a equipos de parrillas eléctricas y paneles fotovoltaicos de generación de energía eléctrica para aquellas comunidades sin acceso cercano a las plantas de distribución de gas.
- Desarrollar un modelo de abasto social a bajo costo de gas LP, mediante la red de almacenes y tiendas DICONSA, fomentando el establecimiento de estaciones de llenado parcial o total de los cilindros portátiles.

Incentivos Fiscales para Mujeres que cuiden el Medio Ambiente

Planteamiento del Problema

Ante el inminente deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, provocados por la intervención negativa del ser humano, las autoridades internacionales han refrendado un verdadero compromiso para consolidar una agenda ambiental transversal con la finalidad de frenar las acciones que ponen en peligro la preservación de nuestro entorno.

Reconocemos que muchas de las afectaciones que hoy en día padecemos en distintas zonas a nivel mundial tienen origen en fenómenos naturales que está fuera de nuestras manos evitar, sin embargo, dichos fenómenos son resultado de acciones negativas de las personas que aún no adoptan el compromiso de ser más respetuosas y responsables con el cuidado del medio ambiente.

Hasta la fecha, seguimos observando la indiferencia de quienes aseguran que el tema ambiental es un rubro de moda contemporánea o, peor aún, que la responsabilidad de hacer algo es exclusiva de los gobiernos.

Es cierto que el Estado debe garantizar la protección de uno de los derechos más fundamentales para las personas, en el caso de México, el derecho humano a un medio ambiente sano, por ello resulta indispensable trabajar no sólo para su reconocimiento, sino para su garantía. No obstante, en esta labor se requiere de la participación activa de la sociedad mediante la adopción de hábitos amigables con el medio ambiente.

En los últimos 10 años, pese a los numerosos compromisos con el medio ambiente por parte de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional, se ha visto un grave deterioro de la salud del planeta. Los desastres naturales catastróficos como el aumento en el nivel del mar a un ritmo veloz, el aumento de la contaminación del aire, el acceso cada vez más reducido al agua potable y las elevadas tasas de extinción de especies contribuyen a que el mundo sea un hábitat cada vez menos saludable. A pesar de la existencia de un cuerpo sustancial de leyes nacionales, regionales e internacionales que procuran abordar estas cuestiones medioambientales cruciales, todavía está por registrarse un avance global sistemático, especialmente en lo concerniente a la participación de las mujeres y la transversalización de género.

Tenemos la convicción de que educar para proteger el medio ambiente es una de las mejores inversiones que se pueden hacer; tenemos que poner un alto al deterioro ambiental y no existe mejor vía que la educación para generar consciencia sobre su cuidado y los graves efectos de no hacerlo.

A pesar de la resistencia de algunas naciones y sectores de nuestro propio país, para creer en la existencia del cambio climático y sus efectos nocivos en contra del equilibrio ecológico y la propia salud y vida humanas, cada vez se suman más personas a la implementación de tareas que benefician al medio ambiente y a su salud y colateralmente impactan de manera positiva en su economía.

Son muchos, pero, sobre todo, son muchas las mujeres que se comprometen con la protección ambiental. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, éstas son factor clave en los procesos de cuidado y restauración del entorno y han sido reconocidas como agentes intermediarios de la relación entre desarrollo sustentable y medio ambiente, determinada por aspectos tales como el crecimiento de la población, la migración, la organización familiar del trabajo, los patrones de producción y de consumo y la desigual distribución del poder económico y político.

Desde esta corriente su participación no sólo está caracterizada por su lugar de “víctimas” de los cambios ambientales dada la vulnerabilidad diferencial de varones y mujeres a los impactos negativos de esto, sino también como conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales, así como sujetos de experiencia y creatividad en el trabajo comunitario y, por lo tanto, en su carácter de promoventes de mecanismos que conduzcan a la sustentabilidad.

En el Partido Verde Proponemos:

- Modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para contemplar el otorgamiento de estímulos fiscales para actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente ejecutadas por mujeres, pues resulta necesario otorgarles herramientas suficientes que les permitan continuar y fortalecer su valiosa participación en el cuidado y conservación de nuestro entorno.

Incentivos Económicos, Fiscales y Disminución de Cargas Regulatorias para Inversiones Verdes

Planteamiento del Problema

Frente a la peor crisis económica de los últimos años provocada por la pandemia de COVID-19, es necesario poner en marcha estrategias de crecimiento verde.

Al mismo tiempo que lidiamos con problemas inmediatos como las altas tasas de desempleo y las presiones inflacionarias o el déficit fiscal, tenemos que orientarnos hacia el futuro y concebir nuevas maneras de garantizar que el crecimiento y el progreso que hemos llegado a dar por sentados estén asegurados en el futuro.

Volver a hacer las cosas como hasta ahora no es aconsejable y finalmente resulta insostenible, ya que implicaría riesgos que podrían imponer elevados costos humanos y restricciones sobre el crecimiento y el desarrollo económicos.

Seguir por la misma ruta podría dar como resultado una mayor escasez de agua, agotamiento de recursos, contaminación del aire y del agua, cambio climático y una pérdida de biodiversidad que podría ser irreversible, por ello se necesitan estrategias para lograr un crecimiento más verde. Si queremos asegurarnos de que los avances en el nivel de vida que hemos visto en los últimos cincuenta años no se detengan, debemos encontrar nuevas maneras de producir y cambiar nuestras maneras de consumir.

Incluso resulta relevante redefinir qué queremos decir con el término progreso y cómo lo medimos y asegurarnos de preparar a las personas con las habilidades adecuadas para aprovechar los beneficios de empleo generados por el cambio estructural. El cambio de los patrones actuales de crecimiento, hábitos de consumo, tecnología e infraestructura es un proyecto a largo plazo y todos tendremos que vivir con las consecuencias de las decisiones pasadas durante mucho tiempo.

La economía moderna se creó gracias a la innovación y prospera con base en ella, en este sentido, la innovación y los cambios no tecnológicos, como nuevos modelos de negocios, patrones de trabajo, planificación urbana u organización del transporte jugarán un papel decisivo en el impulso del crecimiento verde.

Ningún gobierno cuenta con todos los recursos tecnológicos, científicos, financieros y de otro tipo necesarios para poner en marcha por sí mismo el crecimiento verde, pues los desafíos son de carácter global. Afortunadamente, existen ejemplos varios de alentadores esfuerzos internacionales para abordar de modo colectivo los problemas ambientales, reconociendo que lo verde y el crecimiento deben ir de la mano y estableciendo líneas de acción para lograr el crecimiento y el desarrollo económicos, al mismo tiempo que se combate el cambio climático e impidiendo la costosa degradación ambiental y el uso ineficiente de los recursos naturales.

Necesitamos el crecimiento verde porque los riesgos para el desarrollo van en aumento a medida que el crecimiento continúa erosionando el capital natural. Si tal situación no se controla esto significaría una mayor escasez de agua, un creciente estrangulamiento de los recursos, una mayor contaminación, cambio climático y una pérdida irreversible de la biodiversidad.

Los instrumentos económicos y financieros que se diseñen para implementar la política de crecimiento verde deben eliminar barreras regulatorias innecesarias que puedan estar limitando la posibilidad de obtener una respuesta adecuada por parte de los agentes económicos. Igualmente, deben incorporar incentivos y estímulos al sector privado a realizar las acciones e inversiones que favorecen el crecimiento verde y que en el mediano y largo plazos generen beneficios para ellos mismos, para la sociedad en su conjunto y, desde luego, para el medio ambiente y la conservación del capital natural.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover esquemas de financiamiento público y privado para la facilitación de inversiones verdes.
- Remover las barreras regulatorias y disminuir las cargas fiscales para las inversiones requeridas por el crecimiento verde.
- Facilitar la captación de recursos del sector privado para financiar proyectos verdes con condiciones preferenciales a través de la emisión de bonos verdes.
- Incentivar al sector privado a una reconversión tecnológica limpia.
- Implementar políticas que brinden incentivos para el uso eficiente de los recursos naturales y para hacer que la contaminación sea más costosa para quienes la generan.
- Impulsar la inversión en infraestructura de red adecuada para las tecnologías de la siguiente generación, en especial en los rubros de energía, transporte, agua y comunicaciones.

Promoción de Huertos Urbanos

Planteamiento del Problema

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o interiores destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta práctica se da en el centro o en la periferia de las ciudades, al igual que otros ejemplos de agricultura urbana y periurbana.

La agricultura urbana surgió en los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, cumpliendo funciones de subsistencia e higiene pública. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las grandes fábricas se vieron obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para complementar sus ingresos y mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros.

A raíz de la depresión económica de 1893, el alcalde de Detroit ofreció terrenos vacantes a los desempleados para que pudieran cultivar sus alimentos, siendo replicada la iniciativa en otras ciudades de Estados Unidos. Se recurrió nuevamente a esta medida durante la Gran Depresión (1929-1935), periodo en el que este tipo de terrenos se denominaron huertos de emergencia.

Según la arquitecta urbanista Nerea Morán Alonso y el arquitecto Agustín Hernández Aja, los momentos de mayor auge de la agricultura urbana están ligados a crisis económicas y energéticas, que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento.

La misma coyuntura de escasez vivida durante la Gran Depresión dio pie a la aparición de los llamados Jardines de la Victoria, también llamados jardines de guerra o jardines de alimentos para la defensa, los cuales son igualmente precursores de los actuales huertos urbanos. Se trataba de espacios en las residencias privadas o en los parques públicos en las ciudades más importantes del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial donde se plantaban vegetales, frutas, hierbas aromáticas y medicinales, utilizados para suministrar alimentos a las ciudades en los periodos de escasez sin tener que depender de las importaciones.

Los huertos urbanos pensados como ejemplos de sostenibilidad ciudadana en los años 60 del siglo pasado han transformado la agricultura doméstica en mucho más que cultivos de ciudad. Estas parcelas se han convertido en lugares para el ocio, la desconexión, la educación medioambiental y el desarrollo de terapias en entornos naturales. Hoy es habitual que muchos ciudadanos participen activamente en huertos urbanos privados o comunitarios e incluso que los ayuntamientos los contemplen dentro de sus planes de desarrollo urbano con enfoque sostenible.

Aunque a primera vista puede parecer que la agricultura urbana y periurbana son una cuestión sólo para personas mayores, cada vez son más los jóvenes que se interesan por este tema y participan en la gestión de huertos urbanos comunitarios o construyen el suyo propio en sus casas.

Los huertos urbanos aportan diversos beneficios, entre los que destacan los siguientes:

- Reducen el número de intermediarios y favorecen el ahorro en transporte, envasado y almacenamiento. De esta forma, los horticultores ganan más y se contamina menos.
- Facilitan alimentos frescos a la población y reciclan desechos domésticos y municipales.

- Fortalecen a las ciudades frente al cambio climático y reducen la huella ecológica.
- Crean comunidad, recuperan áreas subutilizadas, convirtiéndolas en espacios verdes, mejoran el paisaje urbano e impulsan la cooperación, coordinación y las relaciones interpersonales.
- Tienen incidencia en la mejora de los hábitos alimenticios de la población y generan conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
- Son pequeños pulmones que respiran en las azoteas, contribuyendo a mitigar la contaminación atmosférica de las grandes ciudades.
- Promueven buenas prácticas de agricultura ecológica y generan empleo.

La ecóloga y agrónoma Lily Foster, directora de un huerto urbano en la Ciudad de México, considera que la agricultura urbana es un acto que restablece la conexión del ser humano con la naturaleza y sus semejantes, ayudando también a reducir fuertemente el impacto de la huella ecológica. Así mismo, señala que cuando cultivamos localmente bajamos la cuenta de uso de petróleo, de plástico y de empaques.

No obstante, los múltiples beneficios asociados a los huertos urbanos, también se identifican algunos riesgos. Es habitual que los horticultores domésticos operen sin licencia ni supervisión, ya que muchos países no reconocen esta actividad en sus políticas agrícolas y de planificación urbana, lo cual puede provocar la generación de ruidos y olores, además de poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente si se llegan a filtrar pesticidas y abono a las fuentes de agua.

Según consideran diversos arquitectos y urbanistas, si las cosas no se hacen bien los huertos urbanos se pueden convertir en una especie de patio trasero de las ciudades, abandonados, degradados y cubiertos de escombros, por lo cual es necesaria no sólo su promoción, sino también su regulación.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover la creación de huertos urbanos y comunitarios en todo el Estado.
- Propiciar la construcción de modelos regenerativos, educativos, formativos y de vinculación social en torno al cultivo de alimentos, el cierre del ciclo de nutrientes; ampliando la producción y el acceso de alimentos locales, para promover comunidades más sanas, participativas y sostenibles.
- Contribuir al desarrollo de ciudades saludables a partir de la construcción de proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana, los oficios sustentables y la vinculación comunitaria.
- Establecer que los gobiernos locales contemplen la promoción y regulación de los huertos urbanos dentro de sus planes de desarrollo urbano.

Impulso a la Creación de Sistemas de Transporte Interurbanos y Regionales de Trenes Eléctricos

Planteamiento del Problema

En la actualidad, si se habla de medios de transportes sostenibles el ferrocarril suele posicionarse entre los primeros lugares de la lista, de hecho, mientras se habla sobre el despunte que empieza a tener el coche eléctrico, los trenes llevan décadas de ventaja gracias a la electrificación de miles de kilómetros de vías en Europa, pues en esa zona del mundo, el 60% de las vías están electrificadas, mientras que en Japón el 60% de sus comunicaciones las hacen a través de vías electrificadas, como el tren bala.

Los sistemas ferroviarios eficientes y respetuosos con el medio ambiente pueden ayudar a mejorar la competitividad de las regiones, un claro ejemplo de lo anterior lo constituye el impulso que mundialmente se está brindando a los trenes eléctricos, los cuales pueden ser financiados para su puesta a punto con la emisión de bonos verdes, ya que la implementación de este medio de transporte ecológico tiene el propósito de reducir las emisiones de dióxido carbono, disminuir el congestionamiento vial, los accidentes viales y lograr un beneficio social para los habitantes de la región en donde se promueva.

La implementación de trenes interurbanos regionales en México tendría como propósito poner a nuestro país en los ojos del desarrollo mundial, así, el proyecto sería el inicio de una amplia interconexión ferroviaria en las regiones en que sea factible su desarrollo, ya que se vislumbra que para los próximos años el impulso a este transporte ecológico tendrá un gran potencial de crecimiento económico, lo que permitirá una mayor comunicación, integración y beneficios sociales en las regiones beneficiadas con su ejecución.

La conformación de un sistema de trenes eléctricos interurbanos regionales consiste en la construcción, equipamiento y puesta en marcha de un Sistema Ferroviario Eléctrico para Pasajeros interconectado con las cabeceras municipales, en conjunto con las cabeceras municipales de las regiones que no ostenten la categoría de industrializadas o semi industrializadas, pasando por municipios que servirán de paradas y/o terminales del recorrido.

El tren eléctrico de pasajeros es un proyecto transformador que cambiaría la vida de miles de personas, por sus beneficios en tiempos de traslados, reducción de costos a las personas, mejoras en la salud y la calidad del aire, así como reducción de las emisiones de carbono de cara a la descarbonización de la economía.

Aunque la inversión en infraestructura y equipamiento del proyecto represente un desembolso financiero de grandes proporciones, se debe pugnar porque la implementación del mismo sea ejecutado bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, lo cual traería beneficios tanto para el gobierno como para la iniciativa privada con diversas fuentes de cooperación para mejorar al máximo las condiciones de ejecución de los tramos ferroviarios, con la expectativa de mejorar las condiciones tanto ecológicas como sociales de la regiones en donde se instaure.

La idea es que todos los trenes tengan los mismos estándares de calidad y eficiencia, puedan interconectarse para generar una comunicación transregional durante los próximos diez años, pues los primeros trenes deberán servir de ejemplo para todas las regiones en que se desarrolle mientras se construye y pone en operación la totalidad de unidades que conformarán la red.

En ese sentido, durante la próxima década, el Poder Legislativo deberá configurar el marco normativo necesario para establecer un *"Plan nacional de fomento y desarrollo a los trenes eléctricos interurbanos y regionales para pasajeros y transporte de carga"*, mediante el cual habrán de establecerse los lineamientos de políticas públicas y estrategias de desarrollo para el sistema ferroviario nacional, con el propósito de atender los requerimientos de transporte que sean requeridos tanto para trasladar pasajeros como insumos de la actividad productiva a lo largo y ancho del país.

Lo anterior habrá de redundar en viajes de menor duración y menores costos logísticos, con un marco de respeto a las necesidades primordiales de la sociedad y el medio ambiente, como resultado tendremos un sistema de transporte que contribuya a hacer más eficiente el traslado de pasajeros e insumos a nivel nacional, mejorando el bienestar social relacionado con las necesidades de transporte de la población.

Dicho Plan de fomento y desarrollo a los trenes eléctricos deberá ser elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tomando en cuenta los lineamientos y generalidades del marco jurídico aplicable para formular los convenios de asistencia, consultoría técnica y construcción con las diversas empresas privadas que participen en la implementación del desarrollo ferroviario.

En América Latina y el Caribe hoy en día existe una tendencia hacia la especialización del uso de ferrocarriles ecológicos para el transporte de pasajeros y de carga en distancias medianas y largas; ejemplo de lo anterior es el tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, un proyecto desarrollado con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica que ayudará a potenciar el desarrollo económico y social de Centroamérica.

Este medio de transporte de pasajeros está especializado en implementar trenes interurbanos regionales con velocidades variables de 100 hasta 150 kilómetros por hora, en tramos de recorridos no mayores a 100 kilómetros, los cuales pasarán interurbanamente por las cabeceras municipales aledañas, ayudando a aliviar los problemas de congestión vial que aquejan a las urbes en la mayoría de las entidades del país.

Por otro lado, el transporte ferroviario impulsado por electricidad representa un sistema integral guiado por el principio de eficiencia que ayuda en la organización y transporte de mercancías, reduciendo costos monetarios, tiempos de traslado y mermas en los traslados, preservando siempre el bien social y el medio ambiente a través de la reducción de emisiones contaminantes que actualmente representa el sistema de transporte que usa diésel.

Para regular la entrada en vigor del plan nacional de desarrollo ferroviario impulsado por electricidad deberá crearse un organismo regulador orientado a prestar servicios ferroviarios integrales de calidad asociados con la construcción, operación, conservación, administración, modernización y explotación de las redes ferroviarias eléctricas, como prestador de servicios por contrato, que facilite el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez

y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable en un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la creación, expansión e integración de una red nacional de transporte ferroviario eléctrico.

El organismo regulador de la red nacional de transporte ferroviario por electricidad deberá ser un operador competitivo, que otorgue servicios de excelencia a los usuarios y clientes con base en estándares de desempeño y calidad, fortaleciendo las acciones de transparencia y rendición de cuentas, en apego a las directrices que marque el Ejecutivo Federal.

El organismo regulador de la Red Nacional Ferroviaria por Electricidad deberá velar porque la prestación de los servicios a los usuarios cumpla con los esquemas programados de calidad y eficiencia energética; asimismo, deberá vigilar que las redes sean amigables con el medio ambiente.

Finalmente, tanto la creación del Plan Nacional de Fomento y Desarrollo a los Trenes Eléctricos Interurbanos y Regionales para pasajeros y transporte de carga, como la del organismo regulador de la Red Nacional Ferroviaria por Electricidad serán propuestas realizadas por el Partido Verde que se encaminen a comunicar mejor a México a través de una vasta red de transporte eléctrico con miras a seguir fortaleciendo el compromiso de nuestro país con la utilización de energías verdes para satisfacer las necesidades de transporte de la población y de la industria.

En el Partido Verde Proponemos:

- Crear e implementar un plan nacional de fomento y desarrollo a los trenes eléctricos interurbanos y regionales de pasajeros y transporte de carga para establecer las políticas públicas y estrategias de desarrollo del nuevo sistema ferroviario nacional, con el propósito de atender los requerimientos de transporte de pasajeros e insumos de la actividad productiva en el país.
- Proponer la creación del organismo regulador de la Red Nacional Ferroviaria por Electricidad, con el propósito de prestar servicios ferroviarios integrales calificados y asociados con la construcción, operación, conservación, administración, modernización y explotación de las redes ferroviarias eléctricas, como prestador de servicios por contrato que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable en un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la creación, expansión e integración de una red nacional de transporte ferroviario por electricidad.
- Crear reglas de operación que regulen un método de cooperación público-privada, para efecto de que la construcción de la red ferroviaria y la adquisición de unidades eléctricas cumpla con la normativa oficial mexicana y los estándares internacionales tanto de calidad como de eficiencia y que a su vez sean amigables con el medio ambiente.
- Delimitar un plan estratégico de acción para que los concursos y licitaciones sean apegados a derecho y con transparencia, lo cual redundará en un servicio de excelencia y calidad en beneficio de los usuarios.

Incentivar el Uso de Vehículos Híbridos y Eléctricos a Través de la Instalación de más Estaciones de Carga de Electricidad

Planteamiento del Problema

El impacto que tiene el modelo de transporte basado en el uso del coche particular fue saturando paulatinamente las vías de comunicación de las grandes ciudades, planteando la impostergable necesidad de un cambio de modelo de movilidad que se base en modos alternativos al uso abusivo del vehículo privado motorizado por parte de las sociedades actuales.

Se entiende por movilidad sustentable a todas aquellas acciones orientadas a contribuir a la reducción de los efectos negativos en el entorno. Éstas abarcan desde prácticas de movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas con dicha problemática -desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte público en lugar de en coche siempre que sea posible, compartir el auto para acudir al trabajo, etcétera- hasta la adopción de tecnologías que aumenten las opciones de movilidad sustentable, como el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos con combustible de hidrógeno o de batería.

En cuanto a las políticas de movilidad sustentable, éstas se centran en la disminución del congestionamiento de las vías de comunicación y la reducción del consumo de combustibles fósiles, así como la introducción de vehículos de transporte urbano de bajas emisiones, híbridos o eléctricos.

Asimismo, para que las políticas públicas puedan potenciar la movilidad sustentable, éstas deben contemplar la configuración de un modelo de transporte más eficiente que mejore la competitividad del sistema productivo, aumento de la integración social de los ciudadanos con accesibilidad más universal, brindar mayor seguridad en los desplazamientos, así como incrementar la calidad de vida y no comprometer las condiciones de salud de sus ciudadanos.

Ante la necesidad de buscar transportes alternativos o menos contaminantes que no usen combustibles tradicionales, surge la opción de adquirir autos verdes, equipados con motores eléctricos o híbridos. Estos autos eléctricos son más ecológicos respecto a aquellos que usan gasolina o diésel.

Beneficios de los autos híbridos y eléctricos en México:

- En algunos casos se benefician de descuentos sustanciales en el pago Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
- Están exentos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
- El pago por la renta o uso temporal de automóviles eléctricos es deducible de impuestos.
- Tienen holograma exento de verificación de acuerdo con las condiciones aplicables en las entidades en donde operan programas como el Hoy No Circula.
- Tienen acceso a descuentos en los sistemas de cobro por el uso de autopistas y carreteras en el país.

Actualmente la tecnología nos ofrece diversas alternativas de transporte más amigables con el medio ambiente que las que representan los vehículos con motores de combustión, como los vehículos eléctricos e híbridos, que aplicadas al transporte público pueden ser de gran ayuda para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar cambios en el enfoque institucional para gestionar la movilidad e incentivar el uso de vehículos eléctricos e híbridos.
- Establecer incentivos fiscales que propicien la adquisición y uso de vehículos eléctricos e híbridos.
- Fomentar la instalación de más estaciones de carga de electricidad distribuidas de manera estratégica en todo el país.
- Fomentar la investigación en los centros universitarios en temas de diseño, fabricación y uso de vehículos eléctricos para propósitos múltiples.
- Prever que la planificación y diseño urbanos favorezcan la movilidad sustentable y el uso de vehículos eléctricos e híbridos.
- Electrificación del transporte público urbano y cambio en los modelos tarifarios del mismo, priorizando el uso de los vehículos eléctricos.

ENERGÍAS RENOVABLES

Reconversión y Certificación de Edificios y Oficinas Públicas en Materia de Sustentabilidad Energética y Uso Eficiente de la Energía

Planteamiento del Problema

Gracias a su versatilidad y a la gran cantidad de energía que proporcionan por unidad de volumen, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente energética básica de todo el mundo, pues aportan el 80% de la energía que consumimos. El problema es que el modelo basado en la incineración de combustibles fósiles, esencialmente petróleo y carbón para producir energía dejará de ser viable muy pronto a causa del agotamiento de los mismos, además de que genera contaminación atmosférica y afectaciones a la salud.

Ante este panorama, la comunidad internacional ha emprendido esfuerzos por reducir la extrema dependencia energética de los combustibles de origen fósil; un ejemplo de ello es la inversión que países como China, Estados Unidos, Alemania, España e Italia han llevado a cabo en el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

La actuación en el ámbito del sector energético resulta fundamental para mitigar el cambio climático, pues más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación y uso de la energía, de allí que las principales medidas para avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono se concentren en este rubro.

Si bien México es un país productor y exportador de petrolero y su modelo energético ha estado basado por décadas en éste y otros recursos de origen fósil, lo cierto es que el territorio nacional también posee un amplio y variado potencial para generar energía a partir de otras fuentes, por ejemplo, la fuerza del viento y del agua, la radiación del sol o el aprovechamiento del calor natural que se almacena en el interior de la Tierra. No obstante, nuestro país no figura entre las naciones líderes en el impulso de las energías limpias, pues el porcentaje de generación de electricidad a partir de hidrocarburos es significativamente superior al porcentaje de energía eléctrica producida a través de fuentes renovables.

Lo anterior hace evidente que se deben impulsar leyes y políticas públicas que permitan facilitar el desarrollo de proyectos para generar energía a través del aprovechamiento de recursos renovables y en ello hay mucho por hacer desde el sector público.

Siguiendo esta lógica, es oportuno impulsar la instalación de equipos y tecnologías de generación de energía eléctrica a través de recursos renovables en los edificios públicos.

No se puede soslayar que el gobierno es el consumidor más importante de cualquier país, en este sentido, la instrumentación en sus entidades de acciones encaminadas a que el uso de la energía sea más eficiente y sustentable representaría una gran contribución para reducir significativamente la huella de carbono de nuestra economía y, al mismo tiempo, una oportunidad para contribuir con la política de racionalidad en el gasto promovida por el gobierno federal, al reducir los costos que se pagan por concepto de electricidad.

En este sentido, se deben realizar los esfuerzos que hagan falta para que nuestro país transite hacia una política energética sustentable en el sector público a través de la reconversión de las oficinas gubernamentales y la certificación de las mismas en materia de sustentabilidad en el uso de la energía.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover y certificar programas para la generación de electricidad con fuentes renovables dentro de las dependencias y entidades de la administración pública federal en sus bienes muebles e inmuebles para contribuir a la reducción de la huella de carbono de nuestra economía y, al mismo tiempo, coadyuvar con la política de racionalidad en el gasto promovida por el gobierno federal, al reducir los costos que se pagan por concepto de electricidad.

Impulsar la Generación de Energía Renovable para el Autoconsumo

Planteamiento del Problema

La energía es necesaria para el desarrollo de la mayoría de las actividades productivas y recreativas, así como para el funcionamiento de los servicios médicos, educativos, alimentación, transporte y en general, para facilitar nuestras actividades cotidianas, por lo que el acceso a la energía se ha convertido en una necesidad.

Actualmente, los hidrocarburos y la energía eléctrica, obtenida a partir de diversas fuentes, representan los tipos de energía de uso más generalizado para el transporte, la industria, los hogares, actividades comerciales y de servicios, tanto en zonas urbanas como rurales.

Sin embargo, la producción y uso de combustibles fósiles, así como de la electricidad derivada de ellos, generan contaminantes que dañan la salud de las personas. Los combustibles fósiles también producen gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

Por esta razón, se han implementado diversas medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles en todos los sectores, particularmente en la generación de electricidad, para ser sustituidos gradualmente por energías limpias y renovables, que tienen menores emisiones contaminantes y menor impacto ambiental.

La sustitución gradual de combustibles fósiles por energías renovables es necesaria para el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. También se han establecido metas a nivel nacional e internacional para lograr una participación cada vez mayor de las energías limpias en la generación eléctrica.

Bajo este contexto, la mayoría de los países han implementado legislación, políticas públicas e incentivos fiscales para promover la sustitución gradual de combustibles fósiles por energías limpias y renovables.

El principal obstáculo técnico que ha frenado la transición hacia las energías renovables es su intermitencia, es decir, la interrupción y continuación sucesiva de energías como el viento, la luz solar y las mareas, en función de los ciclos de la naturaleza. Por ello, se requiere desarrollar tecnologías para compensar la intermitencia y aumentar la estabilidad.

También es necesario facilitar la implementación de energías renovables en todos los sectores donde se consume. En este sentido, cobran cada vez más importancia las tecnologías habilitadoras, como el almacenamiento en baterías, las bombas de calor, los vehículos híbridos y eléctricos, las cuales son tecnologías complementarias para facilitar la adopción de las energías renovables intermitentes.

Por último, es necesario facilitar el acceso a energías limpias y renovables en zonas apartadas de las redes eléctricas, por lo que cada vez más países están implementando políticas y medidas para promover los sistemas distribuidos de energía renovable, como las mini redes y las soluciones fuera de la red, ya que son los medios más rentables para proporcionar acceso a la electricidad en regiones rurales y remotas.

El uso de las energías renovables para generar electricidad es una tendencia al alza a nivel mundial. Pero no sólo a gran escala, es decir, las grandes empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, sino también a pequeña escala, o sea, en los pequeños negocios y los hogares.

El autoconsumo, que rompe con el esquema tradicional de generación de electricidad en centrales que la distribuyen hasta nuestros hogares, otorga al consumidor la posibilidad de generar su propia energía, contar con una mayor autonomía y reducir los costos de su factura por el suministro de electricidad.

Cuando personas o empresas consumen la energía proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a las mismas, por ejemplo, paneles fotovoltaicos o generadores mini eólicos, ayudan a frenar el cambio climático al incidir en un mayor uso de las energías renovables y a impulsar la creación de puestos de trabajo verdes en empresas sustentables.

En el Partido Verde Proponemos:

- Facilitar la conformación y desarrollo de cooperativas energéticas, dedicadas a la generación y comercialización de electricidad a partir de energías limpias en regiones alejadas de las redes eléctricas.
- Impulsar el desarrollo de baterías y otras tecnologías de almacenamiento de energía, integradas a los sistemas de energías limpias y renovables.
- Establecer medidas regulatorias para impulsar el uso de inversores solares fotovoltaicos con almacenamiento integrado en los hogares y pequeños negocios que ya cuentan con paneles solares o que están considerando su instalación.
- Diseñar y aplicar incentivos fiscales efectivos para la adquisición y uso de sistemas de energías renovables para el hogar y pequeños negocios.

Producción de Biocombustibles sin Afectación a la Biodiversidad o a la Disponibilidad de Alimentos

Planteamiento del Problema

Durante muchos años la producción primaria de energía en México estuvo dominada por la explotación de los abundantes recursos petroleros entonces accesibles y con costos adecuados a la demanda en el mercado mundial. Sin embargo, la creciente escasez y encarecimiento de las energías fósiles convencionales al igual que las altas emisiones contaminantes asociadas a las mismas impulsaron el surgimiento de nuevas políticas energéticas enfocadas a la inclusión de fuentes de energía limpia en la matriz energética.

Ante esta necesidad, se ha promovido el desarrollo tecnológico que implica la diversificación de fuentes de energía distintas a la de los combustibles fósiles, considerando la reducción de los costos y la contaminación ambiental que estos últimos generan. En este sentido, la producción y el consumo de los biocombustibles, el etanol y el biodiesel, se han incrementado en el mundo debido, principalmente, al uso que se les da en el sector autotransporte.

A los biocombustibles se les atribuye el beneficio de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque también se señala que están asociados a algunos riesgos, tales como los derivados de incrementar las áreas de cultivo para obtener los insumos (maíz y caña de azúcar, principalmente) necesarios para la producción. Igualmente, se ha identificado que su producción masiva incrementa la contaminación por el uso intensivo de agroquímicos, además de que propicia el aprovechamiento no sustentable del agua.

En México se han creado leyes y programas de gobierno que entre sus objetivos persiguen el de incrementar la generación de energía a partir de fuentes limpias y renovables, incluyendo los biocombustibles.

El debate entonces está en encontrar la manera de impulsar más decididamente la utilización de los biocombustibles, convirtiéndolos en una industria sostenible, que genere empleos verdes, que reduzca las emisiones a la atmósfera pero que al mismo tiempo evite crear un problema mayor al que pretende resolver a través de la destrucción de bosques y selvas y de la contaminación y degradación del agua y del suelo. Lo anterior sólo puede lograrse promoviendo reformas para mejorar la regulación en la materia y garantizar que la producción de biocombustibles no pondrá en riesgo al medio ambiente ni comprometerá la seguridad alimentaria de nuestro país. En razón de lo anterior, se considera indispensable la actualización de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y la expedición de una Ley de Biocombustibles.

En el Partido Verde Proponemos:

- La armonización y modernización de la legislación en materia de biocombustibles.
- Una ampliación de los objetivos en materia de biocombustibles en el cual las dependencias gubernamentales coadyuven dentro del ámbito de sus facultades.
- El establecimiento claro y actualizado de las funciones que desempeñan las dependencias, que conlleve a una operatividad efectiva.
- La creación y/o fortalecimiento de programas que permitan el desarrollo de los biocombustibles, teniendo metas y objetivos claros que contribuyan en la misión de diversificar la matriz energética del país.
- La creación de instrumentos que permitan desarrollar la investigación, tecnologías y capacitación como una parte elemental para el desarrollo de los biocombustibles.

Garantizar el Acceso Universal a la Energía por Medio de la Promoción de la Producción de Electricidad a Través de Ciclos Combinados

Planteamiento del Problema

La generación de energía eléctrica en el mundo sigue teniendo una gran dependencia de combustibles fósiles, uno de los inconvenientes del uso de estos son las emisiones contaminantes locales y de gases de efecto invernadero, principalmente el bióxido de carbono (CO₂).

Entre los principales contaminantes emitidos por el uso de dichos energéticos tenemos a los óxidos de nitrógeno (NO_x), el bióxido de azufre (SO₂), el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) y las partículas suspendidas. La concentración de NO_x depende de la composición del combustible y de la temperatura de combustión.

La producción de CO e hidrocarburos no quemados depende de la eficiencia del proceso de combustión. En presencia de radiación ultravioleta los NO_x reaccionan con los hidrocarburos no quemados produciendo smog fotoquímico. La producción de NO_x tiene dos causas; la primera de ellas es la oxidación del nitrógeno contenido en el aire comburente (NO_x térmico) y, la segunda, la reacción del nitrógeno contenido en la composición del combustible (NO_x del combustible).

Otro problema ambiental relacionado con la generación de electricidad es la lluvia ácida. Los principales compuestos relacionados con la formación de lluvia ácida son el SO₂ y los NO_x. Dichos compuestos reaccionan en las nubes formando una mezcla de ácido sulfúrico (H₂ SO₄) y ácido nítrico (HNO₃), los cuales se precipitan a través de la lluvia y la nieve.

También se deposita acidez en la superficie en forma de partículas secas que en contacto con la lluvia originan un medio corrosivo.

Las perspectivas del incremento del consumo de electricidad y los consecuentes problemas ambientales por la combustión parecen favorecer a la energía nuclear. Sin embargo, los problemas de seguridad originados por desechos radiactivos de alto nivel, así como las características de la estructura actual del sector eléctrico desfavorecen el uso de esta tecnología en el corto plazo.

Dicho lo anterior, pareciera que las plantas generadoras de electricidad que utilizan la tecnología de ciclo combinado son las más eficientes y amigables con el ambiente, ya que emiten menos contaminantes que las plantas a base de otros combustibles fósiles como el combustóleo y el carbón.

Una planta de ciclo combinado se inscribe en la categoría de termoeléctricas, con la diferencia de que su proceso combina dos ciclos que operan de manera consecutiva: el de una turbina de gas natural y el que opera con una turbina de vapor. La primera turbina se mueve gracias a la combustión de gas natural, que permite activar el generador; derivado de esta energía, se produce el calor necesario para obtener vapor, mismo que mueve la segunda turbina que activa de nuevo el generador.

Dentro de las ventajas del ciclo combinado encontramos: flexibilidad, eficiencia, menos consumo de agua y menores costos de instalación y operación.

Las plantas de ciclo combinado pueden adaptarse a la demanda de electricidad o a la necesidad de producción. Por sus características, una planta de este tipo puede operar al 100% cuando la demanda es alta y si esta disminuye puede reducir su operación a una carga parcial del 45% de su capacidad. Esto permite que la infraestructura produzca lo necesario, evitando desequilibrios en el mercado o excedentes de producción.

Esta flexibilidad es vital en el escenario de la producción eléctrica a partir de fuentes renovables como la eólica y la solar. Estas energías son intermitentes, pues dependen de las condiciones cambiantes de las fuentes primarias: viento y sol. Por ello, como respaldo, una planta de ciclo combinado es ideal. Puede operar a baja capacidad cuando las condiciones de viento o sol son adecuadas, o bien, a su máxima capacidad cuando las condiciones climáticas lo ameritan. Así se garantiza la continuidad en el suministro de energía en los lugares en donde la producción está sustentada mayormente en fuentes renovables.

Sin duda, este tipo de tecnología permite incrementar la capacidad de generación a un menor costo y, por tanto, aumentar la energía disponible. El rendimiento en las centrales de ciclo combinado es superior al 60% frente a una central convencional o de combustóleo. Esto significa que con un menor consumo de energía primaria (gas natural) se logra una mayor producción de energía eléctrica. Ello, como es lógico, supone ventajas tanto ambientales como económicas que benefician a los entornos en donde estas plantas se instalan y aseguran mejores precios a los consumidores finales.

En comparación con una planta tradicional a base de combustibles fósiles, las de ciclo combinado le ahorran al ambiente y a los seres humanos 100% de las emisiones de SO₂, 80% de las de NO_x y 50% de las de CO₂.

Adicionalmente, el transporte y suministro del combustible principal para estas plantas (gas natural) se hace a través de un gasoducto enterrado, por lo que se evita el impacto derivado de la circulación de camiones o trenes de aprovisionamiento de carbón o combustóleo.

Dado que una central de ciclo combinado sólo requiere agua para la condensación del vapor, éstas utilizan únicamente un tercio del agua que se requiere en las centrales térmicas convencionales. Para la generación de energía se puede echar mano de aguas negras, tratadas, salobres o marinas, es decir, que no son de consumo humano. En caso de no tener disponibilidad cercana a este líquido es posible recurrir al aire a través de aerocondensadores.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover el acceso a las energías verdes, baratas y no contaminantes.
- Implementar políticas públicas a efecto de dar cumplimiento al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN) y garantizar el acceso universal a la energía eléctrica mediante una importante contribución de producción de electricidad a ciclos combinados.
- Cumplir las leyes y compromisos internacionales a fin de reducir la producción de Gases de Efecto Invernadero en la generación de electricidad y contribuir a la transición energética del país.

CALIDAD DEL AIRE

Ampliar y Modernizar el Monitoreo de la Calidad del Aire

Planteamiento del Problema

En nuestros días la contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrentan las grandes ciudades en todo el mundo, debido a los efectos negativos que ésta genera sobre la salud humana y el medio ambiente.

La contaminación atmosférica incrementa el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer de pulmón, así como enfermedades cardiovasculares e incluso muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire. Lo anterior no sólo ha elevado los costos de la atención médica en las poblaciones urbanas, sino que se ha reflejado en la pérdida de productividad entre los trabajadores afectados por enfermedades respiratorias.

Si bien es cierto que los gobiernos de las grandes ciudades han implementado diversas políticas con el objetivo de mejorar la calidad del aire, es claro que existen casos en donde el problema debe abordarse desde una nueva perspectiva que no considere de modo aislado a un determinado número de localidades, sino que contemple soluciones para toda una zona de influencia. Ejemplo de lo anterior es la región central del país, donde confluyen diversas zonas metropolitanas y la responsabilidad de implementar acciones que contribuyan a la protección, restauración y preservación del equilibrio ecológico corresponde tanto a la Federación como a cinco gobiernos estatales.

Otra acción efectiva es establecer redes de monitoreo que permitan, en primera instancia, medir la concentración de todos los contaminantes en el aire, para así poder determinar cuáles son las fuentes emisoras y cuáles son sus efectos en la población. Estos programas permiten a la población conocer la calidad del aire que respira y los impactos que ésta podría tener en su salud de acuerdo a las actividades que realiza diariamente. Así, los sistemas de monitoreo permiten formular normas que fijen estándares de calidad del aire y efectuar estrategias de control y políticas públicas para mejorarla.

El monitoreo de la calidad del aire es una herramienta fundamental para identificar y evaluar los problemas derivados de la misma, por ello representa un eje fundamental para una gestión ambiental exitosa. En otras palabras, el monitoreo de la calidad del aire constituye la base de información confiable que permite el desarrollo de políticas y estrategias para optimizarla, así como la evidencia del cumplimiento de las respectivas normas vigentes. Por ende, es necesario que los estados cuenten con estaciones y redes de monitoreo, especialmente en sus grandes ciudades, que midan las concentraciones de todos los contaminantes utilizados como parámetro, incluyendo las partículas suspendidas, y que se integren a un sistema nacional de monitoreo que permita conocer la calidad del aire en todo el país.

En las próximas décadas el proceso de urbanización a nivel nacional demandará un mayor consumo de energía por parte de la actividad industrial, vehicular, doméstica y de dotación de servicios, en consecuencia, se espera un incremento de las emisiones de contaminantes atmosféricos que incidirán en la calidad del aire a nivel local y regional.

Desde junio de 2013, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, *Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire, es obligatorio que los gobiernos locales de zonas metropolitanas o conurbaciones con asentamientos humanos con más de 500 mil habitantes, emisiones a la atmósfera superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio primarios y una actividad industrial contaminante establezcan estaciones para el monitoreo de la calidad del aire y/o el muestreo de contaminantes atmosféricos.*

Con lo anterior se pretende desarrollar la implementación de sistemas de monitoreo y fortalecer los existentes para generar información que permita evaluar la tendencia temporal de los contaminantes y sustentar el desarrollo de estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales, así como la evaluación de las mismas.

La información generada por los sistemas de monitoreo es fundamental para conocer la evolución espacial y temporal de los contaminantes e informar a la población sobre las situaciones ambientales que representen un riesgo para la salud humana y la de los ecosistemas, por lo cual resulta necesario impulsar la comunicación efectiva de los riesgos y promover una participación social informada y congruente con las decisiones preventivas, correctivas y de consumo.

Cumplir con lo establecido en la norma oficial señalada implica una fuerte inversión económica en infraestructura, en materiales y en el desarrollo de recursos humanos capaces de mantener y desarrollar los sistemas de monitoreo que se requieren.

No debe pasar por alto que el desarrollo de los sistemas de monitoreo requiere la revisión y ajuste de la normatividad que establece los métodos de medición para determinar la concentración de los contaminantes atmosféricos, la cual rebasa los 25 años de antigüedad y es obsoleta en el caso de algunos contaminantes, además de no considerar el uso de equipos automáticos.

En varias ciudades de México los límites establecidos para la adecuada protección de la salud humana no se cumplen, pues se exceden los límites permitidos de ozono y de partículas suspendidas en el aire, en buena medida esto se debe al déficit existente en los sistemas de monitoreo de la calidad del aire.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover que todos los estados del país cuenten con estaciones y redes de monitoreo, especialmente en sus grandes ciudades, que midan las concentraciones de contaminantes, incluyendo las partículas suspendidas.
- Fortalecer las capacidades técnicas sobre monitoreo de la calidad del aire en diversas ciudades del país especialmente en aquellas donde habitan más de 500 mil personas.
- Impulsar que los sistemas de monitoreo locales se integren a un sistema nacional que permita conocer la calidad del aire en todo el país.

DERECHO AL AGUA

Acceso Efectivo al Agua Potable y al Saneamiento

Planteamiento del Problema

El agua es uno de los recursos naturales más elementales para la vida, éste cubre el 70% de la superficie del planeta, sin embargo, el 97.5% del agua es salada y solo el 2.5% del agua es dulce, siendo el 70% del agua dulce de difícil acceso por su composición (glaciares, nieve o hielo).

La importancia de este elemento recae en el uso y consumo para el sostenimiento y reproducción de la vida en el planeta, dado que es un bien esencial y de primera necesidad que permite el desarrollo de los seres vivos y la naturaleza.

La falta de acceso al agua potable y al saneamiento repercute en la salud, la industria y la agricultura, sectores que son fundamentales para el desarrollo nacional y bienestar común.

Quintana Roo es uno de los Estados con una gran extensión territorial, por lo que el uso y consumo de agua potable resulta indispensable para las actividades humanas. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las principales consecuencias que afectan a la sociedad por la falta de agua potable son las siguientes:

- Enfermedades: Por consumo de agua contaminada.
- Hambre: La falta de riego puede comprometer la producción de cultivos.
- Degradación de la naturaleza: La escasez de agua impide que la biodiversidad pueda desarrollarse.
- Desplazamiento poblacional: La ausencia de recursos genera que las personas se muevan a otros lugares en donde puedan acceder a una vida digna.

En el Estado de Quintana Roo hay más de mil quinientos millones de personas que usan y consumen a diario agua para sus actividades cotidianas, aunado a que las principales actividades económicas como la ganadería, la agricultura, las industrias manufactureras o los servicios de salud también requieren del vital líquido.

Como resultado de la poca innovación y mantenimiento en los sistemas de suministro de agua, las comunidades rurales, los pueblos originarios y las personas más frágiles se han visto vulneradas en su derecho al acceso al agua, lo que daña gravemente a la sociedad y a la economía nacional.

El agua es un recurso gratuito, no obstante, los municipios cuentan con la facultad de establecer el pago de derechos por su suministro, es decir, lo que se cobra no es el agua, sino los medios que permiten hacerla llegar a la población. Sin embargo, ante la precariedad que enfrentan los gobiernos locales, resulta necesario emprender nuevas estrategias que permitan ampliar los mecanismos de acceso al agua y su saneamiento para todos.

De esta forma, aquellas regiones que no cuentan con los servicios de agua, pero sí con el recurso, deberán verse beneficiadas por la mejora en los mecanismos de suministro, garantizando no sólo un derecho fundamental, sino el acceso a los impactos positivos derivados de esta condición, como la mejora en la producción de alimentos y energía, así como la contribución al trabajo decente y al crecimiento económico.

En este sentido, el marco jurídico federal y local reconocen el derecho al agua potable y a su saneamiento, sin embargo, las actividades humanas han ocasionado alteraciones en el medio ambiente, provocando que la poca agua potable disponible no llegue a los lugares y a las personas que más la requieren, o bien, que el agua se contamine.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado, emitiendo el criterio de "mínimo vital" cuya razón de ser es la de garantizar aquellos derechos fundamentales que permiten a la persona gozar de una vida digna.

Es así que resulta imperativo impulsar leyes y políticas públicas para garantizar la disponibilidad de al menos el mínimo vital de agua que requieren las personas, así como el saneamiento para todos mediante la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos.

El cuerpo humano está compuesto entre un 50 y un 65% de agua. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que por persona se consumen aproximadamente 20 litros de agua diarios en necesidades de higiene y alimentación.

De acuerdo con el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, el sector agropecuario e industrial son los que más requieren de agua para su funcionamiento. En este sentido, la escasez de agua genera problemas sociales y de salud pública.

Lo anterior demuestra que el agua es indispensable para el sostenimiento de la vida y de las actividades productivas que generan bienestar, por tal motivo, mejorar el acceso al agua y su saneamiento es fortalecer el Estado de derecho y salvaguardar los derechos fundamentales para vivir dignamente.

En el Partido Verde Proponemos:

- Armonizar la legislación federal y local acorde a la realidad social y a las necesidades fundamentales para garantizar el acceso al agua potable y su saneamiento a fin de que la población pueda disponer de este recurso para el desarrollo de sus actividades esenciales.
- Crear planes nacionales y locales para conservar y recuperar los mantos acuíferos, ríos, lagos, lagunas y depósitos naturales de aguas dulces que permitan abastecer a las generaciones presentes y futuras.
- Crear programas sobre el uso y consumo sostenible del agua con la coadyuvancia de los tres niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía, haciendo frente a los problemas de abastecimiento de agua, principalmente en el sector rural y en comunidades vulnerables.
- Innovar y ampliar el sistema de suministro de agua potable y de drenaje para garantizar el mínimo vital que permita a las personas vivir una vida digna.

Captación de Aguas Pluviales

Planteamiento del Problema

El agua es un recurso estratégico para cualquier país, ya que permite la producción de alimentos y el sustento que hace posible la supervivencia de las personas. Además, posibilita el desarrollo de actividades productivas, generación de energía y el mantenimiento de los bienes y servicios eco sistémicos.

En julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Así mismo, el número 6 de los objetivos y metas de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas insta a reducir la cantidad de personas sin acceso a agua potable y saneamiento en el mundo. No obstante, el cambio climático está alterando la disponibilidad de agua debido al aumento en la frecuencia de sequías, lo que impacta especialmente en las poblaciones más vulnerables y contribuye a la desigualdad.

El agua es un recurso que puede ser considerado renovable o no renovable de acuerdo a su uso y tratamiento. Si bien el agua sigue un ciclo natural, la intervención de la mano del hombre ha sido crucial para que dicho proceso se vea afectado en perjuicio del medio ambiente y del propio ser humano.

A lo anterior se debe sumar que la creciente demanda en las grandes urbes ha llevado a éstas a sustraer el agua potable de sus alrededores, afectando a aquellas comunidades que poseen el recurso y que antes accedían a él sin inconvenientes. Esta situación genera un fenómeno social de movilización interno, en el cual las comunidades alejadas de las ciudades se ven afectadas por la sustracción de sus recursos, lo que motiva a que los habitantes de las comunidades rurales o poco desarrolladas dejen su hogar para trasladarse a la ciudad buscando mejores condiciones de vida.

No obstante que el agua es un elemento vital para la supervivencia de los seres humanos, muchas personas, lamentablemente, no son conscientes de lo limitado de este recurso, en especial las personas que viven en entornos urbanos y ciudades.

En el contexto de los diversos esfuerzos puestos en marcha por la comunidad internacional para mejorar la gestión de los recursos hídricos a fin de garantizar su conservación y el acceso a ellos para todos los seres humanos, se ha identificado que la reducción del desperdicio es esencial para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. La captación de agua de lluvia, por su parte, apunta en esta dirección porque permite que el desperdicio de agua sea menor, generando importantes ahorros, los cuales pueden ser utilizados para garantizar el acceso al agua a quien hoy no lo tiene en suficiencia y calidad.

En este sentido, nuestra Ley Fundamental reconoce el derecho al agua, sin embargo, la legislación secundaria en la materia no regula adecuadamente las formas a través de las cuales éste puede ser garantizado, por ejemplo, la captación de agua pluvial, lo cual, sin duda, puede contribuir a proveer a todos los mexicanos de un elemento fundamental para acceder a una vida digna y al mismo tiempo abonar al mantenimiento del equilibrio ecológico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la región con mayor disponibilidad de agua pluvial es la zona sur, la cual comprende los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, mientras que las regiones que menos agua pluvial reciben, con apenas el 25%, son las zonas del centro y el norte, siendo los estados del norte los más áridos.

Cada año crece la población y con ello también aumenta el uso del agua, mientras que su disponibilidad disminuye.

Se deben propiciar nuevas estrategias que permitan obtener agua de forma ecológica, segura y eficiente, por ejemplo, a través de la captación del agua pluvial.

De acuerdo a las condiciones climáticas y sociales, se pueden emplear diferentes tipos de captación de agua con mayor o menor eficiencia, como lo son: qanats, terrazas de banco, riego por derivación, captación de aguas pluviales en azoteas y cisternas, en el que además se pueden implementar técnicas de micro captación y macro captación.

En el Partido Verde Proponemos:

- Generar políticas públicas que permitan la creación de plantas de tratamiento de aguas pluviales, de tal forma que puedan ser utilizadas para actividades humanas o industriales y de modo de que se elimine toda sustancia nociva para la salud a causa de su contaminación por las actividades humanas.
- Crear programas de conciencia ambiental entre la ciudadanía respecto a la necesidad de conservación del medio ambiente y de mitigación de los efectos de la actividad humana en el ciclo natural del agua.
- Crear programas locales de filtración de aguas pluviales de forma natural para recuperar los mantos acuíferos que han sido contaminados o sobreexplotados, así como generar políticas públicas que regulen las nuevas infraestructuras que permitan la filtración de aguas pluviales al subsuelo.
- Establecer jornadas de captación de aguas pluviales en temporadas de lluvia en las 32 entidades de la república.

- Crear una estrategia nacional en coordinación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles, sector privado e instituciones educativas para impulsar la captación de aguas pluviales a nivel doméstico y comunitario.
- Fomentar la investigación e innovación de técnicas que permitan crear nuevos proyectos de captación de aguas pluviales para hacerlas llegar a las zonas áridas.

Protección de Cenotes a Nivel Nacional

Planteamiento del Problema

Un cenote es pozo o estanque natural de agua dulce abastecido por un río subterráneo que se forma en numerosos lugares de la península de Yucatán por la erosión de los suelos.

Los cenotes no están aislados, sino que se conectan entre sí por una red compleja de cuevas, secas o inundadas. Se trata de un ecosistema enorme, de cientos de kilómetros, que abarca toda la Península y que conecta a los ríos subterráneos con el mar. La vida del ecosistema tiene una profunda conexión con la vida de sus habitantes e implica repercusiones en la economía y en los servicios ambientales de la región. El término adecuado para designar a este sistema es "karst".

El agua del karst de la península de Yucatán es patrimonio de todos los mexicanos y al día de hoy no tiene una definición en la ley en materia de aguas que regule su uso, ni que lo proteja de los impactos negativos provocados por las actividades humanas como la ganadería, la agricultura, el desmonte de la selva y el turismo.

Las principales amenazas para estos acuíferos son la falta de drenaje, las descargas de aguas negras directo al subsuelo, la filtración de lixiviados, la urbanización, la contaminación y el aprovechamiento insostenible de los mismos.

A pesar de su importancia y del riesgo que enfrentan, en el marco jurídico nacional no existe una regulación especial de los cenotes. Aunque es posible encontrar diversas disposiciones vinculadas a ellos, éstas se encuentran dispersas y son poco precisas, lo cual puede resultar en ambigüedad y falta de certeza.

Las omisiones citadas generan incertidumbre sobre el régimen legal que resulta aplicable a los cenotes, en perjuicio de su adecuado manejo y protección.

Si bien los gobiernos locales han emitido regulaciones encaminadas a proteger los cenotes, éstas corren el riesgo de ser declarados como inconstitucionales, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las aguas del subsuelo son de competencia exclusiva de la Federación y no de los estados. Lo anterior hace necesario que el Congreso de la Unión defina los aspectos esenciales que permitan la protección y el uso sustentable de los cenotes.

La península de Yucatán cuenta con más de 8 mil cenotes, así como más de 1,500 kilómetros de cuevas inundadas y 354 kilómetros de cuevas secas.

La formación de los cenotes se remonta hasta la última Era de Hielo, cuando la Península de Yucatán solía estar cubierta de mar. Ésta paró de descender, dejando la barrera de coral expuesta y dando origen a un suelo de piedra caliza.

La piedra caliza fue filtrando poco a poco el agua de la lluvia dentro de cuevas y túneles, lo que a su vez formó ríos subterráneos. La piedra caliza se fue desgastando y desplomando hasta dar vida a los cenotes como hoy los conocemos.

La clasificación de los cenotes está relacionada con la edad de los mismos; Los cenotes maduros son aquellos que pueden verse completamente abiertos y los más jóvenes son los que todavía conservan su cúpula intacta. Se pueden encontrar cenotes a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta.

La palabra cenote proviene del maya "dzonot", que significa caverna con agua. Desde tiempos ancestrales, los cenotes han sido de gran importancia para la cultura maya, ya que, según su cosmogonía, estos representaban portales hacia el inframundo, mejor conocido como Xibalbá, donde moraban los dioses, los antepasados y seres sobrenaturales. Los cenotes también eran utilizados para rituales y ceremonias, donde se arrojaban tributos a los dioses. Actualmente se han encontrado más de 20 piezas cerámicas correspondientes al periodo Posclásico temprano (año 800-1200 d. C.) en los cenotes localizados en Chichén Itzá.

En el Partido Verde Proponemos:

- Incorporar a la legislación en materia de aguas la definición legal de los cenotes, así como la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, los mecanismos de coordinación entre las autoridades y los instrumentos que permitan su protección, conservación y aprovechamiento sustentable.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Limitar el contacto de los seres humanos con la vida silvestre

Planteamiento del Problema

Hablar de la vida silvestre, especialmente de la fauna, nos lleva indudablemente al reconocimiento de la vasta riqueza con la que cuenta nuestro país; la ubicación geográfica abona a la diversidad biológica, lo que nos posiciona como una de las naciones con más especies de fauna a nivel internacional.

Desafortunadamente, esta privilegiada posición nos ha llevado a la inconsciencia de creer que estos recursos son inagotables y, por tanto, a dejar de visualizar como prioritaria la protección de los ecosistemas como hábitat de estas especies.

Si bien es cierto que actualmente contamos con un marco legal dirigido a la protección de la fauna silvestre, lo cierto es que ello no ha sido suficiente para generar consciencia entre la sociedad para lograr erradicar actos que atentan contra el medio ambiente y que impactan directamente en la desaparición de las zonas de distribución de dichos ejemplares.

Lamentablemente, aún existe mucha indiferencia sobre la importancia de conservar el entorno natural como mecanismo de protección de la vida silvestre, aún más, tratándose de la relevancia y beneficios de que la fauna permanezca en su hábitat natural.

Actualmente se han normalizado actividades que buscan acercar a las personas con estas especies silvestres, bajo la falsa idea de que representan un acto de enseñanza-aprendizaje; no obstante, ello está lejos de cumplir con dicho objetivo, pues cada vez son más los actos de irresponsabilidad hacia los animales.

Sugerir que para conocer una especie es necesario tenerla frente a nuestros ojos es casi tan irresponsable como quitarle un respirador artificial a una persona que depende de él para vivir; extraer un animal de su medio natural representa el desencadenamiento de una serie de consecuencias irreversibles, primero para el ejemplar, que deberá enfrentarse a condiciones antinaturales, posteriormente, para su especie, propiciando la disminución de su población y, por supuesto, para el equilibrio ecológico de nuestro planeta, al ponerse en peligro los servicios ambientales que de ellos dependen.

Se reconocen los esfuerzos que nuestro país ha emprendido para lograr una eficaz protección de la fauna silvestre, hoy contamos con una Ley General de Vida Silvestre cuyo objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios en relación a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

Dicha regulación, como toda la legislación en materia ambiental, fue creada con un enfoque preventivo para evitar la degradación de nuestros recursos naturales y de la biodiversidad en nuestro país; no obstante, como hemos referido, son muchos los casos que muestran que no existe el compromiso y responsabilidad suficiente en las personas para observar los preceptos legales; lo que ha llevado a que nuestros legisladores enfoquen parte importante de sus actividades en el diseño e impulso de reformas a leyes para introducir en éstas conceptos rígidos de protección que, incluso, han llevado al establecimiento de prohibiciones expresas para evitar que se siga explotando y maltratando a los animales silvestres.

Hoy es común enfrentarnos a un sinnúmero de ofertas de actividades turísticas, espectáculos, parques y granjas de convivencia con fauna silvestre, lo cual nos demuestra que no se ha logrado generar consciencia sobre la relevancia de garantizar la subsistencia de estos ejemplares en su medio natural.

No se trata de una postura sesgada, asegurar que el mejor espacio para la fauna silvestre es su hábitat natural encuentra su fundamento en la propia ciencia; Ojasti y Dallmeier, especialistas en fauna silvestre, aseguran que todos aquellos individuos pertenecientes a especies integrantes del reino animal, vertebrados e invertebrados, acuáticos y terrestres, que viven de forma libre y sujetos a los procesos evolutivos en su hábitat son de gran importancia incluso para el ser humano, tanto si producen un servicio o generan beneficios como si causan daños.

Por lo anterior su interacción tendría que basarse en un manejo responsable que se limite a la conservación, reproducción y control, a fin de evitar que estos ejemplares sean explotados en actividades fuera de las señaladas.

Existen diversos factores que intervienen en esta problemática, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que otro de los conflictos entre la fauna silvestre y los humanos que se han acentuado en las últimas décadas es el aumento de la densidad de las poblaciones humanas y la usurpación de hábitats silvestres por parte de dichos pobladores.

Lo anterior ha llevado no sólo a la invasión y desaparición de sus hábitats, sino a la normalización de la convivencia de las especies silvestres con las personas, incluso dentro de su propia naturaleza, obligando a las autoridades a fijar acciones de “rescate”, sometiéndolos al cautiverio y comportamiento que, además de innecesario, es antinatural; llevándolos a su muerte y poniendo en peligro de extinción a su especie.

Queda claro, entonces, que limitar la interacción de la fauna silvestre con las personas es una necesidad urgente y una tendencia mundial dirigida a la conservación y preservación de las especies, en donde la protección de los ecosistemas juega un papel fundamental para fortalecer los hábitats de estos ejemplares en sus zonas de distribución; sumando a estas acciones el tajante rechazo de su extracción para fines lucrativos y poco educativos.

Tampoco se debe perder de vista que, aunque siguen en curso las investigaciones sobre el COVID-19 para evaluar la fuente del brote, el modo (o modos) de transmisión y el alcance de la infección, las experiencias previamente adquiridas con otros coronavirus y virus respiratorios, por ejemplo, la gripe aviar, apuntan a la posibilidad de transmisión zoonótica. Lo anterior ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a recordar la importancia de limitar el contacto de los seres humanos con animales silvestres como medida para reducir el riesgo de transmisión de patógenos emergentes.

En el Partido Verde Proponemos:

- Establecer restricciones a la convivencia de las personas con la fauna silvestre, siempre que éstas no tengan que ver con su conservación.
- Erradicar el cautiverio de fauna silvestre en condiciones que no cumplan con altos estándares de calidad, salubridad y seguridad para los ejemplares.
- Establecer incentivos económicos para la conservación de suelos forestales y recursos naturales de los que dependa la subsistencia de las especies silvestres que se encuentren en peligro de extinción.
- Establecer restricciones de acceso a las personas en las Áreas Naturales Protegidas que sean identificadas como hábitat de fauna silvestre.
- Incentivar la transformación de espacios que actualmente desarrollan actividades encaminadas a la convivencia entre fauna silvestre y humanos para que adopten mecanismos interactivos con el uso de tecnologías de la información con el objetivo de limitar su interacción física.
- Limitar cualquier actividad turística, de espectáculos, cultural o tradicional que implique la interacción de la fauna silvestre con las personas; así como aquellas que pongan en peligro la subsistencia de dichas especies.
- Derogar los preceptos legales que actualmente permiten solicitar autorización por parte de la autoridad ambiental para contar con un ejemplar de vida silvestre como mascota o animal de compañía.

Recuperación de los Niveles de Inversión Pública en Medio Ambiente

Planteamiento del Problema

Desde la Primera Revolución Industrial hasta los albores de la Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0, la innovación y el desarrollo tecnológico han marcado la pauta del orden económico, político y comercial que determinan las nuevas formas de interrelacionarse en la sociedad, la producción y el consumo. Este progreso tecnológico ha impactado y transformado de manera directa e indirecta al medio ambiente, los sistemas ecológicos y ambientales y al clima como resultado de la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales, la contaminación en general del agua, el aire y la tierra, así como los magros resultados de las políticas ambientales.

Actualmente son inminentes los daños y afectaciones que vivimos por los niveles alarmantes de contaminación. Los efectos del cambio climático son el preámbulo de un caos ambiental que se alimenta día a día por el uso excesivo de combustibles fósiles y por el uso exponencial de sustancias químicas, elementos indispensables para la industria y para satisfacer la demanda mundial de consumo y de servicios. Los grandes esfuerzos y estrategias internacionales para poder paliar una de las mayores crisis ambientales que se avecina, han sido insuficientes para generar una conciencia colectiva de que los patrones de producción y de consumo actuales son insostenibles y dañan al medio ambiente de manera irreversible.

Desde principios de los años 1970 con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo y la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se estableció que *"El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras"* Lo anterior sentó las bases para el reconocimiento del medio ambiente como un derecho humano fundamental que se materializó en diversas constituciones y leyes ambientales.

Posteriormente, con el Informe "Nuestro futuro común" de 1987, realizado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se convino la preponderancia y la necesidad de considerar la protección del ambiente y el desarrollo económico como una sola cuestión. Este hecho sentó las bases para que se acuñara el concepto de desarrollo sostenible entendido *"como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"*, el cual emergió como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Esta definición consta de tres pilares fundamentales que buscan lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

A partir de este momento se inició a escala global el cuidado y manejo ambiental. En poco más de 32 años se ha dado origen a un sinnúmero de acuerdos, convenios, tratados, pactos, leyes, conferencias, cumbres y metas en materia de salud, impacto ambiental, pobreza, hábitat, población y desarrollo, comercio y medio ambiente, agricultura y seguridad alimentaria, atmósfera, diversidad, contaminación del agua, mares y mantos freáticos, protección animal, alteraciones biológicas, desertificación, tratamiento de residuos peligrosos, seguridad nuclear y océanos, por mencionar algunos.

En este contexto, surge la Agenda 2030, adoptada el 25 de septiembre de 2015, que actualiza y sintetiza una nueva agenda de desarrollo ambiental, derivada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000, y propone un nuevo plan de acción a favor de las personas, el planeta, la justicia, la paz y un crecimiento igualitario.

Esta nueva Agenda plantea 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia integra y direcciona los programas de desarrollo mundial durante los próximos 15 años. Los Estados parte, al ratificarla, se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación, en función de los retos específicos y necesidades de cada país, en su agenda del desarrollo sostenible, sus objetivos y metas.

De acuerdo a lo planteado por esta agenda, la protección de la biodiversidad juega un papel determinante en la Agenda 2030 y en el caso particular de las áreas naturales protegidas (ANPs) se vincula a los objetivos 13 Acción por el clima, 14 Vida submarina y 15 Vida de ecosistemas terrestres.

Refiere la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta. Las áreas marinas protegidas se deben gestionar de manera efectiva, al igual que sus recursos y se deben poner en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos.

En nuestro país las tareas de conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos han ido adquiriendo un valor capital para el desarrollo nacional. El establecimiento y manejo de ANPs ha sido la estrategia de política ambiental más consolidada en materia de conservación de la biodiversidad, al tiempo que ha permitido cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la Convención de Diversidad Biológica.

Bajo este contexto nace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el año 2000 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cuyo objetivo es conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos de 182 ANPs, conjuntando las metas de conservación con las del bienestar de los pobladores y usuarios de las mismas.

Sin embargo, es necesario que se destinen mayores recursos y se recuperen los niveles de inversión pública en materia de protección y conservación del medio ambiente con el propósito lograr el mandato establecido en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales signados por nuestro país.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar reformas que garanticen que no haya reducciones en el presupuesto destinado a la protección y conservación del medio ambiente y que se le designe al sector, al menos, la misma cantidad de recursos del ejercicio presupuestal inmediato anterior.

Proteger las Selvas de Taladores Clandestinos con la Fuerza Pública

Planteamiento del Problema

Quintana Roo es uno de los Estados con más amplias diversidades de recursos naturales, en donde los forestales destacan por su importancia debido a que albergan una gran riqueza de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas de nuestro país y desafortunadamente casi todas con alguna categoría de protección por encontrarse en peligro de extinción.

Por lo que hace a la importancia de los recursos forestales, estos representan un porcentaje importante del total de la biomasa de la tierra, aproximadamente el 85% de la totalidad de los recursos bióticos terrestres están contenidos en selvas de diferentes tipos.

La utilidad de los recursos forestales no radica sólo en la producción de materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento del sistema natural, es decir, en los servicios ambientales que prestan.

Los bosques y selvas son considerados como ecosistemas complejos e importantes por su cobertura densa y su funcionamiento en términos de conservación y captura de carbono, ciclo hidrológico, protección de suelos y biodiversidad.

Atendiendo a dicha importancia, éstos se posicionan como uno de los recursos más vulnerables, llevándolos a su degradación en donde la intervención negativa del hombre ha jugado un papel fundamental para disminuir alarmantemente la posibilidad de su subsistencia.

Las actividades ilícitas más frecuentes en el sector forestal de nuestro país son: 1) Cambio de uso de suelo sin autorización; 2) Tala clandestina; 3) Incendios forestales; 4) Prácticas de extracción no controlada; y 5) Aprovechamiento ilegal de productos forestales no maderables (carbón, resinas, tierra de monte, hongos silvestres, plantas para fibras y ceras, semillas, tallos, hojas, rizomas y plantas completas). Adicionalmente, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra; los conflictos de linderos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; la fragilidad del estado de derecho y las acciones del crimen organizado agravan el proceso de degradación y fragmentación de los ecosistemas forestales.

Datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) indican que de los casi 9 millones de metros cúbicos de madera que se producen en forma legal en el país (información de 2017, el último dato oficial disponible), 76% proviene de bosques y selvas comunitarios, los cuales pertenecen a ejidos y comunidades que cuentan con programas de manejo forestal; mientras que el 24% restante se cosecha en predios privados o plantaciones.

Respecto al origen y legalidad de éstos, especialistas señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal. Estimaciones que no pueden ser confirmadas debido a que ninguna dependencia del sector ambiental cuenta con información actualizada y pública sobre el universo de la tala ilegal en México.

En este sentido, el Programa Nacional Forestal de la CONAFOR señalaba que, hasta 2014, un equivalente al 38% del volumen de madera comercializada era de origen ilícito; sin embargo, el informe "El estado que guarda el sector forestal en México 2019" señala que, de acuerdo a estimaciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en 2009 el 30% del volumen de madera que se comercializaba en el país era producto de la tala clandestina y que para el periodo 2013-2018 dicho volumen incrementó a un 70%, concluyendo que diversas organizaciones de la sociedad civil señalan que por cada metro cúbico legal se extrae otro metro de manera ilegal.

Al respecto, una investigación hecha por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados precisa que se identifican más de 30 métodos para llevar a cabo la tala ilegal y las operaciones de "lavado" de madera, destacando la falsificación de permisos y autorizaciones; sobornos para obtener autorizaciones de aprovechamiento forestal; tala de volúmenes mayores a los concesionados; hackeo de plataformas informáticas gubernamentales para obtener permisos de transporte de grandes volúmenes de madera; "lavado" de madera ilegal mediante la construcción de caminos, ranchos y plantaciones y la mezcla de madera legal e ilegal durante el proceso de transporte a los aserraderos.

Para su atención se han desarrollado diversos mecanismos de protección, sean legales, institucionales e incluso de participación internacional, en donde México se ha adherido a las Convenciones Internacionales más importantes que se han conformado en los últimos años, ejemplo de estos son: 1) La Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación; 2) La Convención sobre Diversidad Biológica, y 3) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Asimismo, la CONAFOR promueve la instrumentación de una estrategia integral para atender los problemas de inseguridad en el territorio rural; fortalece el capital social y la presencia institucional en el territorio, genera alternativas productivas sustentables en el territorio rural, acerca los programas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a la población con mayores necesidades; revisa y modifica el marco legal forestal y fiscal vigente para reducir la sobre regulación y simplificar los trámites; fomenta el consumo responsable de productos forestales entre los grandes consumidores y promueve la certificación del buen manejo forestal.

Sin embargo, ello no ha sido suficiente para lograr erradicar la tala ilegal con implicaciones graves para nuestros recursos forestales y, en general, para el equilibrio ecológico en nuestro país

La vigilancia del cumplimiento a las leyes aplicables es llevada a cabo por la PROFEPA, a través de acciones de inspección y vigilancia a la cadena productiva forestal, conformada en sus 4 fases: Aprovechamiento, Transporte, Transformación y Almacenamiento; teniendo como una de sus atribuciones: recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental.

Al respecto, en nuestro país, la investigación de delitos ambientales está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), dependiente de la Fiscalía General de la República, la cual determina la comisión de delitos ambientales, así como las sanciones y penas aplicables.

No obstante, para que el cumplimiento de la legislación ambiental en materia forestal tenga efectos positivos en la erradicación de la tala clandestina, se necesita un esfuerzo superior que conlleve el trabajo coordinado de las autoridades ambientales y de seguridad pública a fin de que la protección de nuestros recursos forestales sea verdaderamente eficaz.

Actualmente, los inspectores adscritos a la PROFEPA no cuentan con las atribuciones para poder ejercer ninguna detención de personas que resulten probables responsables de la comisión de algún delito ambiental relacionado con la tala ilegal, por lo que la ejecución de estos hechos delictivos encuentra un nicho de oportunidad para su desarrollo de manera impune.

Como es evidente, se requiere del fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia por parte de las autoridades ambientales que forzosamente implique la participación permanente de la fuerza pública, garantizando con ello la protección efectiva de los recursos forestales y la erradicación de los delitos en perjuicio de éstos.

En el Partido Verde Proponemos:

- Garantizar la protección de las selvas mediante la participación permanente y coordinada de la fuerza pública con las autoridades ambientales en las tareas de inspección y vigilancia de los recursos forestales.

Proteger los Mares y Garantizar una Pesca Sustentable

Planteamiento del Problema

La pesca ha sido desde tiempos remotos una solución a las necesidades de alimentación de los seres humanos. Actualmente, la pesca representa una de las fuentes alimentarias más importantes a nivel global. Según "El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018", publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2015, el pescado representó alrededor del 17% de la proteína animal consumida por la población mundial.

Por otra parte, la pesca representa una importante actividad económica que genera empleos e ingresos para las comunidades costeras, particularmente en los países en desarrollo.

De lo anterior se desprende la necesidad de cuidar los recursos pesqueros a través de su aprovechamiento sustentable y la restauración de los mares, océanos y aguas continentales, no sólo por su relevancia en términos económicos, sino para garantizar el derecho humano a la alimentación y a un medio ambiente sano.

Lamentablemente, los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados, eso significa que sus poblaciones cuentan con un nivel de abundancia inferior al necesario para producir el máximo rendimiento sostenible, por lo cual requieren un periodo de tiempo para restablecerse. Ese tiempo generalmente se estima de dos a tres veces el ciclo de vida de la especie en cuestión.

Esto representa una situación preocupante, pues la sobrepesca no sólo tiene consecuencias ecológicas negativas, sino que también reduce la producción pesquera a largo plazo, lo cual acarrea resultados perjudiciales de tipo social y económico.

Según el informe "Living Blue Planet", lanzado en 2015 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), las poblaciones de peces clave para la seguridad alimentaria humana están disminuyendo de forma preocupante en todo el mundo y algunas de ellas se encuentran en riesgo de colapso. Los datos muestran que, en una sola generación, la actividad humana ha dañado gravemente el océano, capturando peces más rápido de lo que pueden reproducirse, mientras se destruyen sus zonas de alimentación.

La sobreexplotación pesquera obedece a diversos factores, siendo uno de los principales la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la cual se ha convertido en un motivo de alarma cada vez más profunda a escala mundial.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada obstruye los esfuerzos de conservación y ordenación de las poblaciones pesqueras en todo el mundo. Esta situación provoca que se pierdan oportunidades sociales y económicas a corto y a largo plazo y tiene efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la protección adecuada del medio ambiente.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada puede provocar el colapso total de una pesquería o perjudicar gravemente los esfuerzos por reponer las poblaciones agotadas, es por ello que se han creado diversos instrumentos internacionales para hacer frente al problema, por ejemplo: el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO; y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

El Código, adoptado por la Conferencia de la FAO en 1995, expone principios y estándares internacionales de actuación para prácticas responsables con el fin de asegurar la conservación efectiva, la gestión y el desarrollo de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad.

Por su parte, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, adoptado en 2009 por la Conferencia de la FAO, es vinculante y estipula medidas mínimas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Desafortunadamente, los esfuerzos emprendidos en contra de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada no han resultado del todo eficaces para erradicarla.

Además de la firma de acuerdos y de la creación de instrumentos jurídicos para el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se necesita de la voluntad política de la comunidad internacional para su aplicación efectiva, así como de la provisión de recursos suficientes para prevenirla, perseguirla y erradicarla. En este sentido, aún falta mucho por hacer para garantizar que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como la sobreexplotación pesquera dejen de ser una amenaza para el desarrollo sostenible en términos ambientales, económicos y sociales.

Si bien lo anterior depende de múltiples factores, empezando por una adecuada vinculación entre los regímenes comerciales, de medio ambiente y de derecho marítimo, así como de la correcta aplicación de las regulaciones ya existentes en materia de documentación y trazabilidad, lo cierto es que las iniciativas provenientes del sector privado y de la sociedad civil también son importantes.

Los consumidores pueden contribuir significativamente a garantizar la existencia de una cantidad suficiente de peces y otras especies en los mares, océanos y aguas continentales si al momento de comprar un producto pesquero prefieren consumir aquellos que han sido capturados de conformidad con las normas de conservación y sustentabilidad.

No se puede soslayar que la sociedad, especialmente los jóvenes, se encuentran cada vez más dirigidos hacia prácticas sustentables; esto significa que un porcentaje creciente de consumidores otorga una gran importancia al grado de respeto por el medio ambiente que tienen las empresas en sus procesos de producción y ello se ha vuelto un factor determinante a la hora de comprar un producto o contratar un servicio.

En este sentido, algunos grupos industriales, en conjunto con organizaciones comprometidas con la protección y conservación del medio ambiente, han puesto en marcha programas voluntarios para la certificación de pesquerías sustentables, así como iniciativas de ecoetiquetado. Estos esfuerzos están orientados a darles certeza a los consumidores de que la pesca se haya realizado bajo las leyes, normas y medidas internacionales de ordenación y conservación.

La propia Organización de las Naciones Unidas reconoció en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Brasil en 1992, que los planes de ecoetiquetado son potencialmente útiles para crear incentivos de mercado en aquellos productos y procesos que sean amistosos con el medio ambiente.

Por su parte, los involucrados en la industria pesquera reconocen que el etiquetado es uno de los puntos de mejora en el sector y se debe aspirar a que en cualquier momento los consumidores tengan información clara de qué se están llevando a la boca, lo cual incluye saber la forma en que fue capturado el pescado, la fecha de captura, el nombre de la embarcación con que fue pescado, cuál fue el proceso de congelamiento y cuáles son los periodos de veda.

En el Partido Verde Proponemos:

- Promover que desde el ámbito gubernamental se realice un esfuerzo por promover, mediante la acreditación de sistemas de certificación, ya sean públicos o privados, la identificación, fácil y rápida, por parte de los consumidores de los productos provenientes de la pesca sustentable. Lo anterior, con la finalidad de contribuir a luchar en contra de la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no regulada y con ello sumar esfuerzos para asegurar la vida y el equilibrio ecológico en los mares, océanos y aguas continentales para que éstos puedan seguir siendo fuente de alimentos y desarrollo para los seres humanos de hoy y del futuro.

CAMBIO CLIMÁTICO

Norma Específica para Fijar Límites a las Emisiones de Contaminantes para Plantas de Generación de Energía Eléctrica

Planteamiento del Problema

A fin de garantizar el derecho de los mexicanos a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar establecidos en la Carta Magna y considerando la premisa de que la generación de electricidad es el segundo sector que más contribuye al total de las emisiones nacionales de gases y compuestos de efecto invernadero, con un volumen anual equivalente a 125 mil millones de toneladas de CO₂, resalta la urgente necesidad de establecer regulaciones técnicas de observancia obligatoria específicamente para este sector crítico.

En particular, las plantas de generación de energía han contribuido de forma significativa a la emisión de diversos contaminantes a la atmósfera. Si las centrales no cuentan con ningún tipo de control de emisiones, éstas pueden ser excesivas, dependiendo del combustible utilizado. Además, los efectos de estos contaminantes no sólo ocurren cuando hay una alta concentración de ellos en la atmósfera, es decir, al superarse la norma de calidad del aire, sino que también aparecen en lugares muy distantes del punto de emisión en diversas formas, siendo las más importantes la deposición ácida, con la consecuente acidificación y eutrofización de cuerpos de agua, el daño a la salud humana y a la producción agrícola.

Aunque existe la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, *Contaminación atmosférica- Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición*, ésta es una norma genérica para este tipo de equipos de calentamiento en distintas industrias, por lo que no toma en consideración las mejores prácticas, estándares y mejores tecnologías disponibles para la generación de energía eléctrica, así como para la prevención y control de las emisiones contaminantes.

Por ello consideramos necesaria la creación de una norma oficial mexicana específica de límites de emisiones para centrales termoeléctricas, con el fin de contar con límites más estrictos para disminuir los riesgos de efectos adversos sobre la salud de las personas y los ecosistemas a través de una reducción de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos: el material particulado (PM), el dióxido de azufre (SO₂) y el óxido de nitrógeno (NO_x), adoptando las mejores prácticas, estándares y tecnologías de generación de energía para la prevención y el control de la contaminación.

Lo anterior permitirá, además impulsar al sector industrial a realizar mejoras en la calidad del producto, la mejora de procesos y el ahorro de energía. Esto se puede alcanzar mediante la introducción de las mejores prácticas, adoptando mejores procesos de control y requisitos de protección ambiental al ciclo de vida entero en este tipo de plantas, las cuales se atribuyen a la modernización de la maquinaria asociándose a equipos menos contaminantes y al uso de combustibles también menos contaminantes a fin de asegurar aire limpio para las generaciones venideras.

Hoy en día la energía eléctrica es una necesidad de primer orden y no podemos prescindir de ella, sin embargo, la emisión de contaminantes a la atmósfera y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales generadoras de energía eléctrica tienen una incidencia nociva sobre el medio ambiente (emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire, concentraciones de mercurio o transporte de contaminantes a larga distancia) constituyendo un riesgo para la salud y vida de la población.

Dependiendo de los combustibles utilizados (combustóleo, carbón y coque, entre otros) las centrales eléctricas pueden emitir a la atmósfera contaminantes tales como el dióxido de azufre (SO₂); óxidos de nitrógeno (NO_x); mercurio (Hg); partículas suspendidas (incluidas PM2.5 y PM10); gases de efecto invernadero como metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) y dióxido de carbono (CO₂); compuestos orgánicos volátiles (COV) y metales en niveles traza.

Aunque la cantidad relativa de ellos depende del proceso y del combustible utilizado, es claro que la generación de electricidad es uno de los principales contribuyentes a la emisión de contaminantes.

En el Partido Verde Proponemos:

- Modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el propósito de adicionar la facultad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para expedir una norma oficial mexicana específica que establezca los límites de emisiones a la atmósfera para Plantas o Centrales de Generación de Energía Termoeléctrica.

Pago por Toneladas de Emisiones Contaminantes sobre Límites Máximos Permitidos (Cobrar más Impuestos a Quienes más Contaminen)

Planteamiento del Problema

En abril de 2020, a nivel mundial, la concentración promedio de CO₂ en la atmósfera fue de 416.21 partes por millón (ppm), la más alta desde que comenzaron las mediciones en Hawái en 1958, estos datos los dio a conocer la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).

Debido a las emisiones de CO₂ generadas por las actividades humanas las concentraciones de este gas, responsable del 70% del calentamiento de la Tierra, están aumentando aceleradamente.

Por su parte, con base en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, el más reciente, presentado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) de gases de efecto invernadero.

Para el 2013 se reportó que la industria en México emitió 114,949.19 Gg de CO₂e, el cual contribuyó con 17.3% de las emisiones a nivel nacional.

Para el sector industrial se obtienen las emisiones por el uso de combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero de algunos procesos que las generan a partir de la transformación de materias primas mediante métodos químicos y físicos, así como emisiones fugitivas por el minado y manejo de carbón (minería). Entre los subsectores que generan más emisiones en el sector industrial se encuentran los del cemento, la siderúrgica y la química.

Todo lo anterior genera una gran preocupación con respecto a nuestro clima y demuestra que cada vez se abre más la brecha que nos separa del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París relativos a limitar el aumento de la temperatura a 1.5 o 2° Celsius, razón por la cual se necesitan medidas urgentes para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.

En consonancia con lo expresado, el artículo 4° constitucional establece el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y, a su vez, establece obligaciones, tanto para la autoridad, en el sentido de garantizar el respeto a este derecho, como para los individuos, a fin de que asuman la responsabilidad por la contaminación que generan.

En este contexto, una forma más eficaz de reducir las emisiones de dióxido de carbono es mediante la aplicación de un impuesto sobre aquellas que excedan los máximos permisibles para la industria en el país.

Medidas como estas pueden motivar a que los productores tengan un comportamiento más amigable con nuestro entorno y generen consciencia de la importancia de llevar a cabo esfuerzos a favor del medio ambiente e incluso actúan como un incentivo para el desarrollo e introducción de tecnologías menos contaminantes, asegurando con ello que la sociedad de ahora y la del futuro tengan garantizado el desarrollo de una vida sana y no se vean amenazadas a consecuencia de la manera en que operan las industrias hoy en día.

Los sujetos obligados a este impuesto serán todas aquellas personas morales del sector industrial que deben realizar registros de la medición de emisiones contaminantes generadas por su actividad.

Estas estrategias, cuando se implementan junto con el fomento a la eficiencia y la innovación, acompañadas con regulaciones estrictas sobre emisiones, pueden conducir a un futuro más limpio y próspero.

En el Partido Verde Proponemos:

- Legislar a favor de un impuesto sobre las emisiones de CO₂ para el pago por tonelada o fracción que excedan los límites máximos permisibles para industrias que proveen productos o servicios que conllevan altas emisiones de carbono, adicionando diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
- Promover iniciativas para etiquetar el destino de los recursos que se obtengan de lo recaudado para dirigirse a la infraestructura y operación de servicios de salud; para la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los programas derivados de ésta.
- Promover la creación de incentivos fiscales para toda aquella industria que invierta en el desarrollo o haga uso de tecnologías limpias, energía verde e infraestructura que prevenga o controle la emisión de CO₂.

MANEJO DE RESIDUOS

Prohibición de Plásticos, Envases y Empaques de un sólo uso

Planteamiento del Problema

El plástico es un material con diversas aplicaciones en el ámbito tecnológico, médico e industrial, el cual ha facilitado en muchos casos nuestra vida cotidiana gracias a sus múltiples usos. No obstante, hemos abusado de su utilización y ello se ha convertido en un problema ambiental, especialmente por la contaminación derivada de la mala gestión de los residuos.

Es probable que para muchas personas sea inconcebible la realización de ciertas actividades y procesos sin el plástico, motivo por el cual lo consideran indispensable, sin embargo, es importante señalar que buena parte de los usos que a éste le damos son temporales y puede ser sustituido por otros materiales que garanticen un menor impacto en términos ambientales.

Una de las alternativas para reducir el impacto negativo de los plásticos sobre el entorno ha sido el aprovechamiento de los desarrollos y avances científicos para incorporar materiales y/o tecnologías amigables con el medio ambiente que garantizan una mayor sustentabilidad.

Si se gestiona y se usa de la forma correcta, el plástico no tiene por qué ser una amenaza para el medioambiente. En este sentido, se debe fomentar en los consumidores la conciencia respecto a la necesidad de hacer un uso más responsable de este material a través de la buena gestión de los residuos y del reciclaje de productos.

Lamentablemente, la dinámica actual de consumo de las personas conlleva a la generación desmedida de desechos plásticos, que, a pesar de ser reciclables en su mayoría, terminan siendo desechados sin que puedan servir como insumo para la elaboración de nuevos productos, lo cual se constituye como uno de los principales factores de contaminación de los suelos, ríos y mares.

En este contexto, buscando garantizar el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano, algunos gobiernos locales han optado por complementar las acciones para desincentivar el uso excesivo del plástico a través de la generación de conciencia en sus ciudadanos con prohibiciones que adoptan diversos matices.

En el caso específico de nuestro país, los gobiernos estatales y municipales son competentes en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, pero las regulaciones que han emitido resultan heterogéneas. En este sentido, se requiere que el Congreso de la Unión establezca reglas homogéneas para que exista un marco regulatorio con estándares mínimos aplicable en todo el país.

La regulación de los residuos sólidos urbanos -dentro de los cuales se encuentran los plásticos- tiene muchos años de haber sido establecida, pero no ha sido del todo efectiva. Desde la creación de las leyes en la materia, tanto federales como locales, se han instituido mecanismos con el propósito de prevenir lo que hoy es una triste realidad: la contaminación por residuos plásticos.

La experiencia internacional indica que las prohibiciones respecto a los plásticos obligan a los consumidores a modificar sus hábitos de consumo, al eliminarse la disponibilidad de aquellos considerados de un sólo uso, lo cual representa un alivio para la crisis que el abuso de los plásticos ha contribuido a generar en materia de contaminación ambiental.

En el Partido Verde Proponemos:

- Modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, estableciendo la obligación de las entidades federativas para establecer las siguientes prohibiciones en su legislación: a) entregar, a título gratuito u oneroso, plásticos de un sólo uso innecesarios; b) entregar a título gratuito bolsas de plástico en transacciones comerciales.
- Fomentar, de manera paralela al establecimiento de las prohibiciones, el uso de materiales más eficientes como los biodegradables y compostables.
- Establecer plazos de cumplimiento razonables para que la transición hacia nuevos materiales y tecnologías sea gradual a fin de reducir los impactos para los agentes económicos.

Impulsar el Reciclaje y que las Personas Reciban Pagos Directos por Reciclar su Basura

Planteamiento del Problema

El problema de los residuos no sólo se relaciona con su mal manejo, sino con la falta de políticas y programas que permitan reducir al mínimo posible la generación de los mismos. En este sentido, no se trata únicamente de disminuir los índices de contaminación ambiental y evitar los daños a la salud humana provocados por la multiplicación de tiraderos a cielo abierto, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de separación de la basura que facilite el reciclaje y la reutilización de los residuos que generamos.

El principio Basura Cero es un concepto de vida sustentable que consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que actualmente tiramos, incorporar este principio en las políticas de gestión de los residuos es uno de los principales retos ambientales en nuestro país.

Uno de los mayores desechos es el plástico. Genera alrededor de 8 millones de toneladas al año y sólo se recicla alrededor de un tercio del mismo. A pesar de los esfuerzos, aún no hay una infraestructura suficiente para el reciclaje en el país. De seguir con esta tendencia, los océanos se llenarán de plástico, el cual tarda miles de años en degradarse y ya está afectando seriamente la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico. La acumulación de residuos que no se reciclan también provoca la degradación del suelo. Los microplásticos en la tierra son ingeridos por las lombrices, que pierden masa al ingerir este producto, lo cual afecta su aporte nutrimental a la tierra e impacta en el crecimiento de plantas y cosechas.

Necesitamos iniciativas como las implementadas por algunos países europeos, los cuales fomentan la industria del reciclaje para que ésta sea determinante en la disminución de la cantidad de basura y contribuya al desarrollo de la economía nacional. Para lograr lo anterior se necesita una proyección a largo plazo y que los sectores público y privado se comprometan.

Las empresas son las que más han trabajado en la reducción y reciclaje de sus desechos. Uno de las muestras más significativas de estos esfuerzos es la puesta en marcha de estrategias que permiten a las personas monetizar la basura, por ejemplo, hay empresas que se han coordinado para instalar máquinas recolectoras en distintos centros comerciales que dan puntos, créditos u otros incentivos al reciclar latas y botellas, con lo cual es posible pagar la suscripción a servicios de contenidos audiovisuales o comprar tiempo aire para telefonía celular.

Darles valor a los residuos, convirtiéndolos en dinero a través de centros o estrategias de recolección donde se aceptan como moneda de cambio para adquirir bienes y servicios es una manera de acabar con la contaminación de suelos y cuerpos de agua, especialmente los mares y océanos, pero también representa una oportunidad para aliviar las carencias de las personas que viven en situación de pobreza.

En el Partido Verde Proponemos:

- Impulsar la dotación suficiente de la infraestructura necesaria para el reciclaje de los residuos.
- Promover el diseño e implementación de estrategias, acciones y programas que permitan a las personas recibir pagos directos al reciclar su basura.